

PAIDÓS ESTADO Y SOCIEDAD

Últimos títulos publicados:

21. K. R. Popper, *En busca de un mundo mejor*
22. D. Osborne y T. Gaebler, *La reinención del gobierno*
23. J. Riechmann y F. Fernández Bucy, *Redes que dan libertad*
25. J. M. Guéhenno, *El fin de la democracia*
26. S. G. Payne, *La primera democracia española*
27. E. Resta, *La certeza y la esperanza*
28. M. Howard Ross, *La cultura del conflicto*
29. S. P. Huntington, *El choque de civilizaciones*
30. G. Kepel, *Al oeste de Alá*
31. K. R. Popper, *La responsabilidad de vivir*
32. R. Bergalli y E. Resta (comps.), *Soberanía: un principio que se derrumba*
33. E. Gellner, *Condiciones de la libertad*
34. G. Bósetti (comp.), *Izquierda punto cero*
35. C. Lasch, *La rebelión de las élites*
36. J.-P. Fitoussi, *El debate prohibido*
37. R. L. Heilbroner, *Visiones del futuro*
38. L. V. Gerstner, Jr. y otros, *Reinventando la educación*
39. B. Barry, *La justicia como imparcialidad*
40. N. Bobbio, *La duda y la elección*
41. W. Kymlicka, *Ciudadanía multicultural*
42. J. Rifkin, *El fin del trabajo*
43. C. Castells (comp.), *Perspectivas feministas en teoría política*
44. M. H. Moore, *Gestión estratégica y creación de valor en el sector público*
45. P. Van Parijs, *Libertad real para todos*
46. P. Kelly, *Por un futuro alternativo*
47. P.-O. Costa, J. M. Pérez Tornero y F. Tropea, *Tribus urbanas*
48. M. Randle, *Resistencia civil*
49. A. Dobson, *Pensamiento político verde*
50. A. Margalit, *La sociedad decente*
51. D. Held, *La democracia y el orden global*
52. A. Giddens, *Política, sociología y teoría social*
53. D. Miller, *Sobre la nacionalidad*
55. R. A. Heifetz, *Liderazgo sin respuestas fáciles*
56. D. Osborne y P. Plastrick, *La reducción de la burocracia*
57. R. Castel, *La metamorfosis de la cuestión social*
58. U. Beck, *¿Qué es la globalización?*
59. R. Heilbroner y W. Milberg, *La crisis de visión en el pensamiento económico moderno*
60. P. Kotler y otros, *El marketing de las naciones*
61. R. Jáuregui y otros, *El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo*
62. A. Gorz, *Misericordias del presente, riqueza de lo posible*
63. Z. Brzezinski, *El gran tablero mundial*
64. M. Walzer, *Tratado sobre la tolerancia*
65. F. Reinares, *Terrorismo y antiterrorismo*
66. A. Etzioni, *La nueva regla de oro*
67. M. Nussbaum, *Los límites del patriotismo*
68. P. Pettit, *Republicanism*
69. C. Mouffe, *El retorno de lo político*
70. J. M. Guéhenno, *¿Cómo salir del liberalismo?*

Alain Touraine

¿Cómo salir del liberalismo?



PAIDÓS

México • Buenos Aires • Barcelona

Título original: *Comment sortir du libéralisme?*
Publicado en francés, en 1999, por Librairie Arthème Fayard, París

Traducción de Javier Palacio Tauste

Cubierta de Víctor Viano

1ª edición en Barcelona, 1999
1ª edición en México, 1999

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del editor, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

D.R. © 1999, Librairie Arthème Fayard
D.R. © 1999 de la traducción, Javier Palacio Tauste
D.R. © de todas las ediciones en castellano,
Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
Mariano Cubí 92, Barcelona
y Editorial Paidós, SAICF
Defensa 599, Buenos Aires
D.R. © de esta edición,
Editorial Paidós Mexicana, S.A.
Rubén Darío 118
col. Moderna 03510
México, D.F.
Tel.: 5579-5113
Fax: 5590-4361

ISBN: 84-493-0751-1
ISBN: 968-853-432-3

Página web: www.paidos.com
Impreso en México • Printed in Mexico

SUMARIO

Introducción	9
1. El retorno del capitalismo	17
2. Las cuatro formas de salida	33
Hacia atrás	33
Hacia abajo	41
Hacia arriba	48
Hacia lo posible	50
3. ¿Nuevos movimientos sociales?	53
Contrasentidos	53
De las luchas clásicas a las nuevas luchas	55
Los <i>beurs</i>	59
Contra el sida	61
Los «sin»	64
Los «sin-hogar»	66
Los movimientos de parados	67
El movimiento de los «sin-papeles»	69
Los movimientos culturales	73
Comentario	79
4. La izquierda social y la extrema izquierda	81
Tres izquierdas y un solo gobierno	92
5. Dos políticas posibles: tercera vía o política dos y medio	95
Prioridad al empleo	100
El desarrollo sostenible	103
La comunicación intercultural	105
Europa y las naciones	108
¿Se puede ser francés?	110
Conclusiones	113
El papel de los intelectuales	113
Del rechazo al descubrimiento	118
Epílogo	121

INTRODUCCIÓN

¿Dispone todavía nuestra sociedad de la capacidad de cambiar y de reinventarse a sí misma a través de las ideas, de sus conflictos y sus esperanzas? Unos y otros querrían convencernos de que esta pregunta sólo tiene una respuesta, y es negativa.

Los liberales nos inducen a olvidar cierto carácter francés de excepcionalidad, al que consideran una carga, y a que nos dejemos guiar por el mercado. Por otra parte, la extrema izquierda se contenta con denunciar abusos y con hablar en nombre de unas víctimas que parecerían no tener conciencia de su situación. Actitudes como éstas se encuentran ampliamente extendidas por muchos países, pero en Francia adquieren más fuerza que en otras partes. Y es que en Francia, efectivamente, se ha difundido de manera obsesiva la idea de que nos encontramos sometidos a ese famoso «pensamiento único» al cual estarían adheridos tanto la derecha como la izquierda, de tal forma que elegir entre una y otra ya no tendría sentido. Una fe semejante en los ilimitados poderes de la economía mundializada genera la impresión de que las víctimas son las únicas en condiciones de destapar las contradicciones del sistema, correspondiendo a los intelectuales y a los militantes políticos la responsabilidad de señalar el camino para la actuación.

Estas dos opiniones enfrentadas, que se podrían definir como «pensamiento único» y «contrapensamiento único», coinciden no obstante en lo esencial: ninguna de las dos creen en la posibilidad de que surjan actores sociales autónomos, capaces de ejercer alguna influencia en las decisiones políticas.

Se trata de un pesimismo que tiene por consecuencia la defensa casi fundamentalista de las instituciones, consideradas como la única barrera eficaz contra la, ya avanzada, descomposición de la sociedad. Estas ideas, que se autodenominan republicanas, no reconocen tampoco la existencia de actores sociales, al igual que aquellas otras a las buscan oponerse. Por el contrario, y deliberadamente, separan lo que es defen-

sa de las instituciones de la reivindicación social. Esto conduce a los partidarios de esta tercera vía a pronunciarse en favor de los poderes «establecidos» y en contra de los *outsiders*, marginales o excluidos, para retomar el vocabulario de Norbert Elias. Es una situación muy diferente a la que, en el pasado, llevara a defender la República, entendida como espacio de igualdad y solidaridad.

Estas tres corrientes de pensamiento, ciertamente opuestas entre ellas pero interrelacionadas, dominan cada vez más el actual escenario social, alimentando la convicción de que ahora no existen las condiciones de posibilidad para que se produzcan cambios sociales y políticos. En pocas palabras, se puede caracterizar la esencia común de estas tres interpretaciones del siguiente modo: contra el actual panorama de dominio de los económicos, la única acción posible pasa por la revuelta y por el llamamiento a la diferencia, lo que conlleva una desorganización social que solamente están en disposición de combatir aquellas instituciones situadas por encima de las diferencias y de las demandas sociales. Para combatir estos tres puntos de vista, a mi juicio más complementarios que opuestos entre sí, escribo el presente libro.

Intentaré aquí defender tres ideas:

La primera es que la mundialización de la economía no disuelve nuestra capacidad para la acción política.

La segunda es que las clases más desprotegidas no se plantean actuar solamente alzándose en contra de la dominación, sino más bien reclamando ciertos derechos, en particular derechos culturales, y afirmando al mismo tiempo cierta concepción innovadora (y no únicamente crítica) de la sociedad.

La tercera es que el orden institucional resulta poco eficaz, e incluso represivo, si no apoya las reivindicaciones de igualdad y solidaridad.

De lo que se trata, pues, es de la sustitución de una lógica del orden y del desorden por otro tipo de lógica, la de la acción social y política, demostrando de paso que entre cierto orden institucional puramente a la defensiva y unas revueltas de mero carácter contestatario debe existir, debe ser reconocido y reactivado, un espacio público que combine el reconocimiento de los conflictos sociales con la voluntad de integración.

Desde el siglo pasado, nuestras sociedades experimentan la expansión mundial del capitalismo financiero. Su radicalidad, que antes no iba

acompañada del menor control, provocó las revoluciones anticapitalistas. Pero con el tiempo se fue comprendiendo finalmente que era posible instaurar eso que los ingleses dieron en llamar, antes que nadie, la democracia industrial, convertida primeramente en política socialdemócrata y transformada luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estado del bienestar. Tal cosa demostraba que no era imposible la intervención en el mismo campo de la economía, incluso en el caso de que ésta estuviera tan consolidada como en la Gran Bretaña de comienzos de siglo. Quienes creían en la necesidad de una ruptura radical se vieron arrastrados a la institución de sistemas totalitarios, mientras que aquellos que, con desprecio, eran denominados reformistas porque confiaban en la posibilidad de que surgieran nuevos actores sociales, serían los que debían abrir nuevos caminos para la democracia.

Hoy, al igual que ayer, se hace preciso elegir entre ambas concepciones, entre ambas políticas. Si uno cree en el dominio implacable de las fuerzas económicas, no puede creer en la posible aparición de movimiento social alguno; todo lo más, verá en ese movimiento social concreto la expresión de las contradicciones internas del sistema, la manifestación objetiva del sufrimiento y de la miseria. Y tal cosa sólo puede conducir sin remedio al pesimismo radical o a la búsqueda de esas famosas leyes «científicas» que «gobiernan» la historia. El pueblo dominado y alienado deberá entonces remitirse a la intervención de intelectuales convertidos en dirigentes políticos y llamados a combatir la dominación económica en nombre de una visión más racional de la sociedad.

La concepción opuesta descansa en la creencia de que la acción todavía es posible y que está encaminada hacia la transformación, no tan sólo necesaria sino también eficaz, de la organización social. En otras palabras, frente al sufrimiento y a la exclusión, y con el fin de escapar de posturas puramente a la defensiva, o bien es necesario remitirse a esos ideólogos que se atribuyen el monopolio del análisis y de la acción, o bien será preciso reconocer que las víctimas podrán convertirse también en agentes sociales, desde el momento en que son capaces de apelar a principios generales tales como el de justicia o igualdad, susceptibles de reunir a su alrededor a otras fuerzas más mayoritarias. ¿Creemos por tanto en la necesidad de una ruptura radical o, por el contrario, en la posibilidad de que surjan movimientos colectivos que reforzarían la capacidad de actuación de unas categorías sociales domeñadas pero no com-

pletamente alienadas? Yo defiendo, como el lector habrá comprendido ya, la segunda postura. No sólo por una cuestión de principios, sino porque la realidad presente genera, en efecto, la conformación de nuevos actores sociales. Y sin embargo, no se le puede negar cierta razón a la posición contraria. No deja de ser un hecho que Francia, en concreto, ha ido perdiendo su confianza en la acción política, y que es abrumadora la conciencia de una degradación continua e irremediable de la situación social, y en especial la de los trabajadores castigados por el paro y la precariedad. En resumen, el hecho de que se formen movimientos a partir de la desesperanza y con ánimo de revuelta resulta fácil de comprender, pero son éstos, precisamente, los que en su interior portan una serie de extravíos ideológicos, aberraciones que se sirven de la falsa idea de la impotencia de las víctimas. Y es que tal convicción es peligrosa, en la medida en que conduce la protesta a un callejón sin salida, al mantenimiento de cierto estatismo anticuado, lo que beneficia tan sólo a aquellos ideólogos que hablan como representantes de un pueblo que por sí mismo no sabría, según ellos, defender concientemente sus intereses y mejorar su situación.

Cabe distinguir principalmente entre tres modelos de crítica social en el momento actual.

El primero, el más ineficaz si de lo que se trata es de comprender y ayudar a la acción colectiva, combate la mundialización, denuncia la degradación de las instituciones nacionales y gusta de apoyarse en los sectores sociales que todavía gozan de protección con tal de aminorar una tendencia general hacia la precariedad. Pero no se entiende verdaderamente cómo la defensa de las clases sociales que cuentan con mayor protección social, o del Estado en tanto que actor económico, ha de mejorar la situación de los parados y de quienes no disponen más que de un empleo precario, o todavía menos, ayudar a la creación de nuevos empleos.

El segundo modelo de crítica está más elaborado. No discute la mundialización de la economía, sino, más directamente, el poder que la sostiene, que viene a ser antes de carácter financiero que económico. Consiste en la denuncia de la miseria y de las desigualdades que condicionan a nuestro país, a las diversas clases sociales y a los sectores económicos. Oponer, o parece oponer, a esta política liberal el intervencionismo por parte del Estado; es raro, no obstante, que realice propuestas concretas.

El tercer modelo de crítica, que es el que inspira el presente libro, combate cualquier ideario que ponga en duda la posibilidad de actuar

positivamente. Por el contrario, afirma que están surgiendo nuevos actores sociales que reivindican tanto determinados derechos como ciertas identidades colectivas. Piensa también que la reivindicación de los derechos culturales está permitiendo hoy día la aparición de nuevos actores y que, solamente de este modo, se hará posible la reconstrucción de una capacidad de actuación que se había debilitado desde hace veinte años, en buena medida porque el poder de resistencia y las fuerzas de oposición se desgastaron en la defensa de modelos económicos hace mucho periclitados, y cuyos efectos perversos no dejan de proliferar.

En esta clave se puede analizar la situación, definir los posibles actores sociales e incluso indicar por dónde deberían ir las nuevas políticas sociales.

Pero para comprender la naturaleza y las condiciones de posibilidad de la acción colectiva, será necesario, primero, lidiar brevemente con ese farragoso tema de la mundialización, que parece tener efectos narcóticos. Se trata de una representación puramente ideológica, por medio de la cual se busca dar cauce de expresión al desespero y las angustias de quienes, efectivamente, son víctimas de las nuevas tecnologías, de la concentración industrial, de determinadas operaciones financieras y de políticas poco claras en relación con la reciente industrialización de algunos países. Todo un círculo vicioso que será preciso romper, y en primer lugar por medio del análisis. Y es que, mientras estemos inmersos en el discurso sobre la globalización —o la mundialización, que viene a ser lo mismo—, estaremos privados de la demostración concreta de nuestra impotencia social y política en relación con lo que sería necesario llamar por su verdadero nombre, la ofensiva capitalista. Nada, en efecto, da pie para afirmar que, de golpe, las políticas sociales se han convertido en imposibles, que las políticas industriales no tienen más que efectos negativos, que la tecnología se encuentre al servicio exclusivo de los intereses financieros dominantes o que el declive de las antiguas formas de gestión administrativa de la economía no pueden conducir más que al triunfo del capitalismo salvaje. En respuesta a estas concepciones, bien vale aliarse con quienes demuestran las debilidades y el punto muerto en el que se encuentra actualmente la economía dirigida, que ni siquiera ha traído esos efectos igualitarios que algunos pretendían. Sí, es necesario buscar alternativas a la economía dirigida, porque resulta económicamente perniciosa y al mismo tiempo porque la apertura a los mercados mundiales

permite, exige incluso, la renovación de las políticas sociales, la búsqueda de la participación y de la justicia.

Dejemos pues de especular y de repetir el catecismo del pensamiento único, cuya principal idea, compartida tanto por sus detractores como por sus simpatizantes, es que la mundialización de la economía genera impotencia tanto en los Estados nacionales como en los movimientos sociales. Abordemos más bien la realidad a partir de las tres proposiciones siguientes:


1. La globalización no consiste más que en un conjunto de tendencias, importantes todas ellas aunque aisladas las unas de las otras. Esa afirmación que dice que se está conformando cierta sociedad mundial, de corte liberal, dirigida por los mercados e impermeable a las intervenciones políticas nacionales, no deja de ser puramente ideológica.

2. Las protestas sociales mejor fundamentadas pueden llegar al estancamiento si quienes las manejan no creen en la posibilidad de transformar colectivamente la sociedad y de instaurar nuevas formas de control social de la economía.

3. Este trabajo de reconstrucción supone cierta complementariedad —no desprovista de tensiones y conflictos— entre las acciones sociales y las intervenciones políticas. A lo largo del presente análisis me referiré a la situación social y a las acciones colectivas actuales con el fin de demostrar que portan dos sentidos: por un lado, la denuncia desesperanzada de las contradicciones del sistema capitalista, lo que no puede conducir más que a la revuelta marginal o al recurso de un poder de carácter autoritario; por el otro, la voluntad de ayudar a las víctimas a transformarse en actores sociales. Evidentemente, hoy se afianza el primer sentido y tiende a diluirse el segundo. Por eso el análisis debe ser crítico, no en contra de eso que se da en llamar movimiento social, sino más bien contra las interpretaciones más alienantes que suelen aportarse y que tan fácilmente son aceptadas en un país que, desde hace veinte años, cuenta con la conciencia de estar padeciendo, en efecto, una grave crisis, viéndose degradarse ineluctablemente su situación social bajo los golpes asesados por los mercados mundiales.

En fin, será necesario reconocer la especial responsabilidad de los intelectuales. Depende de ellos, más que de cualquier otra categoría de ciudadanos, que la protesta se transforme en mera denuncia sin perspectivas o que, por el contrario, conduzca a la formación de nuevos actores sociales e, indirectamente, a nuevas políticas económicas y sociales.

Pero este análisis crítico no llegará nunca a nada si los poderes políticos permanecen indiferentes a las luchas sociales, desconfiando de ellas y contentándose con la puesta en marcha de políticas centristas que combinan la gestión liberal de la economía con la sola preocupación por el orden y la seguridad pública. Si la mayoría elegida en el gobierno no siente el deber de representar a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿cómo nos podemos sorprender de que éstos se dejen seducir por los que profetizan fracturas y catástrofes?

Europa Occidental está casi enteramente gobernada por partidos o coaliciones de centro-izquierda. Pero estos gobiernos parecen aún dudar entre una política centrista, cada vez más sensible a los intereses de esa extendida clase media a la que por encima de todo hay que defender y tranquilizar, y cierta política de lucha activa contra la exclusión social. A algunos les beneficia el hacer más grande, tanto por medio de discursos como en actos, la brecha que separa las reivindicaciones sociales de los programas políticos. Yo descartaría, por el contrario, que los gobiernos adoptaran programas sociales con más decisión. De hecho, y finalmente, para defender los movimientos sociales de carácter independiente y, a la vez, las políticas más activas de lucha contra la exclusión, he escrito precisamente este libro. 

inevitablemente

Capítulo 1

EL RETORNO DEL CAPITALISMO

Si queremos comprender las luchas políticas y las dificultades económicas que afrontamos, tanto como el actual debate ideológico, hemos de ser capaces de definir la situación histórica en la cual se están desarrollando.

Unos hablan sólo de economía. Si su punto de vista resulta el adecuado, la política no tendría el menor sentido y se haría urgente devolver el poder a manos del director de la Banca Central. Otros nos llaman algo más la atención, con su insistencia en un rápido desarrollo de esa sociedad de la información que se enseñorea del mundo entero y que transforma el conjunto de nuestras actividades. Estos no dejan de tener razón cuando constatan que acabamos de salir de la sociedad industrial y que se hace necesario, en efecto, denominar sociedad de la información a lo que hace treinta años llamábamos sociedad postindustrial. En esta nueva sociedad los actores sociales, las posturas frente a la realidad y las relaciones sociales se están transformando, si es que ya no se han transformado profundamente. Nos costó tanto darnos cuenta, en el siglo pasado, de que habíamos entrado en la sociedad industrial y de que ya no vivíamos en la Francia de Balzac que, hoy día, nos encontramos más preparados para no llegar tarde al nacimiento de una nueva sociedad. Bastante bien sabemos que los conflictos de intereses entre patrones y asalariados industriales, por importantes que sean, ya no se sitúan en el centro de la vida social y política, y que las palabras «comunismo» y «socialismo» ya no tienen sentido o han adquirido otro diferente al que a comienzos de siglo tenían. El análisis sociológico o histórico del mundo en el que ahora vivimos nos fuerza a reconocer que hemos pasado de un modo de producción, de relaciones sociales y de representaciones de nosotros mismos a otros muy distintos, y no tan sólo de la sociedad industrial a la disolución de toda sociedad en este mercado que nos es presentado a manera de Dios o de diablo. Pero no se trata de definir actualmente

en tales términos —por pertinentes que sean— la situación en la que vivimos.

Las acciones colectivas de las que me ocupé, hace más de veinte años, aquellos por entonces nuevos movimientos sociales, como el mismo movimiento de Mayo del 68, comportaban nuevos actores y nuevas ideas que anunciaban la sociedad que se nos echaba encima. En el momento actual esos movimientos se encuentran debilitados, caso de que todavía existan, y lo que ahora agita la escena social y política no es tanto la utilización que se haga del conocimiento o de la investigación, la atención médica o los *media*, como el paro, las crecientes desigualdades, la exclusión y, algo más alejado de la vida cotidiana, la tan extendida conciencia de nuestra impotencia en lo relativo a las fuerzas económicas más poderosas que los propios Estados. No nos inquieta en especial eso que algunos han llamado el fin del Estado nacional. No se trata, pues, tanto del cambio de la sociedad en que vivimos como del cambio en los modos de modernización. La diferencia de registro es fácil de explicar: hablar de sociedad industrial o de sociedad de información supone hablar de determinado tipo de sociedad; por el contrario, cuando decimos que pasamos de una economía dirigida, administrada por el Estado, a una economía de mercado, advertimos cierto cambio en la manera de modernización. De inmediato añado, a riesgo de querer parecer original, que el capitalismo y el socialismo son formas de modernización antes que tipos de sociedad. La primera se define por gestionar el cambio a partir del mercado, y la segunda por el papel predominante que concede al Estado. Se podría destacar que el Estado que dirige los cambios históricos puede ser nacional o extranjero, por lo mismo que los mercados pueden ser locales, nacionales o internacionales. Por lo tanto, en una primera aproximación se podría decir que *hemos pasado de una forma de socialismo a una forma de capitalismo, que el mercado ha reemplazado al Estado como la principal fuerza reguladora de nuestra sociedad*. Son numerosos los observadores que han definido esta transformación sólo como una liberación de la economía, hasta entonces prisionera de la burocracia y de los políticos. Este juicio no resulta sin embargo defendible. ¿Por que se hablaría de las Treinta Gloriosas para designar un período de marcado dominio del Estado sobre la economía y la sociedad si este dominio hubiera resultado siempre pernicioso? Los ilustres tecnócratas que dirigieron la reconstrucción y la modernización de la economía francesa, los Bloch-Lainé, Gruson, Delouvrier, Massé y tantos otros, ¿no tuvieron una

visión global de la sociedad francesa, o acaso atendieron menos a la justicia social en provecho de la eficacia económica?

Se trataba, claro está, de una visión global. La mayor parte de los países del mundo conocieron después de la guerra proyectos integrales de desarrollo nacional que reunían objetivos económicos, sociales y nacionales. Este modo de desarrollo se ha extendido en realidad por todas partes; en Europa, a la que había que volver a levantar de entre las ruinas causadas por la guerra; en América Latina, donde los economistas, atentos a los avances sociales tanto como al crecimiento de la economía, buscaron apoyarse en Estados «nacionales-populares» para lanzarse a un salto «hacia adelante». En otros lugares, los países surgidos de la descolonización se propusieron como principal objetivo la construcción de sus nuevas naciones; por último, los países comunistas adoptaron versiones no democráticas de estos proyectos integrales de desarrollo nacional.

Este modo integral y global de desarrollo se ha ido agotando poco a poco, siendo sustituido, a partir de los años setenta, por un modelo opuesto que concede prioridad al mercado. El desarrollo nacional dirigido por el Estado había generado a menudo una mala asignación de los recursos, muchas veces por culpa de la burocratización y de la corrupción; la competitividad de numerosos sectores se había ido debilitando. Al mismo tiempo, se atendía cada vez menos al objetivo de reducir las desigualdades sociales, como en seguida demostraron las críticas de la izquierda hacia el Estado del bienestar en Gran Bretaña, Alemania y Francia. Simbólicamente, las crisis petrolíferas supusieron el comienzo de una era nueva: el dinero salido de los países industriales hacia los países petroleros fue transferido a bancos americanos que buscaron prestatarios en todo el mundo, y en especial en América Latina. La economía se mundializaba. En ese mismo momento, Estados como Japón o Corea comenzaban a dar prioridad a la exportación, convirtiéndose así en nuevas regiones industrializadas cuya competencia era temible para los viejos países industrializados. En los nuestros, en especial, se hizo sentir la necesidad de liberar la economía de las reglas y de los controles que ya no tenían la justificación de reducir la desigualdad y que habían conducido a fracasos espectaculares, sobre todo en Francia, desde donde el *Crédit Lyonnais* a *Air France*, o desde el GAN al GIAT, los fracasos de las empresas públicas se demostraron altamente costosos. De modo que, desde hace unos veinte años, la crítica a la «excepción francesa», a los fracasos

económicos del sector público, a la pesada burocracia, al reclutamiento elitista de las categorías dirigentes y a otras numerosas causas, muy a menudo sólidamente fundadas, ha ocupado gran parte del debate nacional.

Pero estas críticas, por justas e indispensables que sean, se arriesgan a enmascarar lo esencial. La idea de una economía al margen de cualquier control social y político es absurda. La economía consiste en un sistema de medios que se han de poner al servicio de determinados fines políticos. Existe una inmensa distancia entre decir: «Es necesario liberar la economía de la ruinosa intervención del Estado y de los modos de gestión social ahora demostrados ineficaces», y decir «Es necesario que los mercados se regulen por sí mismos, sin la menor intervención exterior».

Esta segunda manera de pensar tiene un nombre: capitalismo, que no es otra cosa sino esta mundialización de la economía de la cual se habla mucho sin detenerse a caracterizarla. El capitalismo supone una economía de mercado en cuanto a que ésta rechaza cualquier control exterior, pues, por el contrario, busca actuar sobre la sociedad en bloque en función de sus propios intereses. El capitalismo significa que la sociedad se ve dominada por la economía. De ahí el peligro que subyace a la actual destrucción del antiguo modo de gestión económica: ésta resulta al mismo tiempo indispensable y peligrosa, pues el reto actual es el de pasar de un tipo de control social de la economía a otro, sin perderse en la ilusoria imagen de una economía liberada de todo control social, imagen que conduce al incremento de las desigualdades y de cuantas formas de marginación y de exclusión sean posibles.

Estas afirmaciones resultan ser, a decir verdad, demasiado moderadas. Reflexionemos sobre las consecuencias del triunfo del capitalismo al final del siglo XIX y a comienzos del XX. Frente a la hegemonía de cierto capitalismo, de cada vez mayor carácter financiero, se constató que las naciones que estaban perdiendo el control de sus economías se lanzaban de cabeza hacia el nacionalismo, ya fuera éste de cariz reaccionario o revolucionario, pero que en cualquier caso conducía al desmantelamiento del tejido industrial y a cuantas revoluciones precedieron o acompañaron a la Primera Guerra Mundial y a la instauración de regímenes totalitarios. La economía había querido dominar la sociedad y la política, pero de inmediato fue la política la que acabó por dominar la economía y la sociedad. En ambos casos, la vida social, el debate, la participación y, por tanto, la democracia, son las principales víctimas de tales circunstancias. Si hoy nos sometemos a los intereses del capitalismo financiero

haremos preparando un siglo XXI todavía más violento y militarista de lo que haya podido ser el XX.

Este conjunto de observaciones pueden ser quizás entendidas, pero sé que no lo tienen fácil en lo relativo a convencer. Pues nos encontramos sumergidos dentro de cierto discurso omnipresente, que proviene tanto de la izquierda como de la derecha, tanto de las organizaciones internacionales como de los trabajadores despedidos por sus empresas: puesto que vivimos en una economía globalizada, conformada a la vez por las transformaciones técnicas, por las nuevas unidades transnacionales de producción, por las redes financieras, y en la cual intervienen nuevos países industrializados en los que a menudo se pagan salarios muy bajos, resulta absurdo hablar de la posibilidad de elegir entre distintas políticas; no tenemos ninguna otra elección salvo la de adaptarnos, mejor o peor, a las nuevas condiciones de la economía internacional. Y aunque es cierto que los Estados Unidos disponen de un verdadero margen de maniobra política, es así porque la globalización significa habitualmente americanización, y porque los Estados Unidos ocupan una posición hegemónica, tanto cultural como militarmente. ¿Es necesario repetir una vez más lo que escuchamos cada día? Lo que se acaba de indicar basta para explicar nuestro sentimiento de impotencia y, por consiguiente, el eco que encuentran los discursos que denuncian esta evolución: condena de los tratados de Maastricht y de Amsterdam, reivindicación de la defensa y de la reconstrucción del Estado nacional.

¿Y si todo esto fuera una falacia? ¿Y si todo esto no fuera más que una pompa de jabón ideológica que se rompe tan pronto como se recurre al análisis?

En primer lugar, como ya he indicado anteriormente, resulta necesario distinguir entre la sociedad de la información y la economía mundializada. La difusión de la información en tiempo real es un acontecimiento importante, pero, ¿puede explicarse la situación de la economía en los años 1900 y la supremacía de Gran Bretaña a causa del telégrafo o incluso por el desarrollo de la industria eléctrica? Rober Reich y Manuel Castells aportan una imagen más fehaciente cuando muestran que las empresas se convierten en mediadoras entre el mundo del mercado y el mundo de la tecnología. He aquí, de un solo golpe, que cae por tierra la mitad de la construcción ideológica que estoy criticando. Lo que otorga a los Estados Unidos su supremacía actual es en buena parte el haber sido capaces de inventar y desarrollar unas nuevas tecnologías que Ale-

Falacia

mania o Francia tardarían algún tiempo en dominar, y el haber sabido modificar las formas de organización y de autoridad que acompañaron a estas nuevas tecnologías. Los países europeos permanecieron atados al viejo modelo industrial para el cual lo *big is beautiful*. Como se ve, todo esto, que resulta esencial y que caracteriza a uno de los campos principales donde se juegan las bazas de nuestro porvenir, no tiene gran cosa que ver con la globalización.

Es cierto que se están consolidando las empresas transnacionales, cada vez más organizadas por medio de redes; es cierto también que el comercio internacional aumenta más rápidamente que la producción mundial. Pero, ¿no era esto cierto hace ya veinte o treinta años, en una época en la que aún no se había oído apenas ese catastrófico discurso sobre la globalización? Reconozcamos simplemente, pues, como han indicado todos los sociólogos desde que lo hiciera Durkheim, y por lo tanto desde hace cien años, que la densidad de los cambios aumenta con la modernidad, siendo ésta una de sus mayores características, incluso si la aceleración de este fenómeno modifica constantemente la vida social, y en particular la economía internacional. Se ha visto cómo algunos países salían de la miseria en pocos decenios, cómo cientos de millones de nuevos productores y consumidores convertían en obsoleta la vieja distinción entre mundo desarrollado y Tercer Mundo, puesto que una parte importante de éste «emerge», mientras que una notable fracción del primero está sumergido. J

Pero ocupémonos del tema del desarrollo de las redes financieras, que resulta tan extraordinario que el comercio internacional de bienes y servicios no representa más que una ínfima parte de la circulación de capitales. Es verdad que éstos pueden cambiar de manos tras ser contabilizados muchas veces al día, y esto, por otra parte, hace todavía más patente el dominio de lo que Rudolf Hilferding, hacia 1910, llamaba capitalismo financiero. Un fenómeno que no está exclusivamente ligado a los cambios tecnológicos y a la internacionalización de los mercados. Acabamos de vivir en Francia un momento de escasez de consumo y a menudo, también, de políticas económicas incoherentes o contradictorias. Durante este período, la parte del capital en el producto nacional ha aumentado en relación con la del trabajo, y la inversión productiva ha progresado menos que las inversiones financieras, a veces muy volátiles, que la opinión pública mundial imagina como si se desplazaran en forma de tornados que acarrearán ruina y pobreza. ¿De dónde procede la

idea de que este superdesarrollo del capitalismo financiero resulta inevitable? Podría pensarse que el retorno de un determinado crecimiento en Europa traerá aparejado mayor inversión productiva, al mismo tiempo que los capitales basculantes serán frenados por reglamentaciones y que se estabilizarán, en particular en los países industrializados que apelan al desarrollo tecnológico y, esperemos, también a la renovación del espíritu de empresa.

Es necesario señalar como la principal causa de la amenaza que pesa sobre nosotros no tanto la mundialización de la economía o la emergencia de nuevos países industrializados, sino la libertad de movimientos del capital en el mundo. La mejor prueba de ello es que el país que ha tomado medidas contra esta libertad, como por ejemplo Chile, que sin embargo sigue una gestión liberal de la economía, o China, que dispone de un sistema económico muy diferente, están protegidos contra una crisis que ha golpeado no obstante a México o Indonesia, entre otros países. La libertad comercial de los bienes y el movimiento incontrolado de capitales son dos realidades muy diferentes. El economista en jefe de la Banca Mundial, Joseph Stiglitz, y el economista Paul Krugman, del MIT, son convencidos partidarios de la economía liberal; sin embargo, se muestran a favor del control, por parte de los Estados nacionales, de los movimientos de capital. Dejemos por lo tanto de poner bajo sospecha todos los aspectos de la economía, desde las nuevas tecnologías a la nueva división internacional del trabajo, e indiquemos de dónde proviene el verdadero peligro: del movimiento incontrolado de capitales que puede destruir de repente diversas economías en virtud de cálculos puramente financieros y efectuados a corto plazo. La responsabilidad de las catástrofes resulta estar así compartida por los capitales internacionales y por los Estados que no saben (o no quieren) defender sus economías, o que se ven arrastrados por los desequilibrios de sus propios sistemas financieros. J

La explosión de la burbuja financiera de Japón durante los años noventa, los desastrosos efectos del superendeudamiento de los grandes grupos económicos de Corea, al mismo tiempo que la debilidad política del gobierno indonesio, han demostrado drásticamente que la economía, las finanzas y la política no conformaban un bloque unido, y que era posible combinarlas de varias maneras que irían de las más ruinosas a las más convenientes. La corrupción, la ausencia de políticas de redistribución de las ganancias y la irresponsabilidad económica de numero-

Los grupos financieros son algunos de los factores que influyeron en la crisis.

Lo que amenaza con destruir la economía y el poder político en Rusia debería bastar para librarnos de una vez por todas de la idea de que la globalización de la economía y la mundialización de los circuitos financieros son fenómenos tan poderosos que escapan a cualquier tipo de intervención política. ¿Cómo no ver que esta crisis es política en primera instancia? Mientras los antiguos países comunistas de Europa Central construían sus economías de mercado, pese a restablecer en el poder en momentos determinados a los viejos comunistas, Rusia no conducía a buen puerto sus intentos de reconversión, desde el momento en que, en 1991, Boris Yeltsin finiquitaba por completo el sistema comunista. Una administración pública ineficaz, puesto que el Estado es incapaz de percibir impuestos, y la ausencia de programas de acción claros; tales carencias han llevado a Rusia a una forma de economía primitiva, basada en la exportación de materias primas y en la colocación en el extranjero de buena parte de sus capitales. La crisis rusa dispara sus efectos sobre el capitalismo mundial, pero no se puede decir que la penetración del capitalismo haya sido la razón que, por sí misma, ha desencadenado la crisis. La principal responsabilidad incumbe evidentemente a unos poderes públicos que no han sabido instaurar las condiciones precisas para el desarrollo y el equilibrio. Resulta indispensable poner de manifiesto los peligros extremos originados por los movimientos de capitales que buscan su propio provecho financiero antes que la inversión productiva, y reconocer a la vez que esto no es más que un efecto de la crisis, que la responsabilidad de los gobiernos resulta a este respecto más que considerable.

Por último, ¿es necesario subrayar que otro aspecto importante de la mundialización, la hegemonía norteamericana, tan marcada desde el año 1989, depende por completo de la globalización de la economía, puesto que ésta es consecuencia lógica de la victoria de los Estados Unidos en la «guerra fría» que le enfrentaba al imperio soviético? Nada nos asegura que los Estados Unidos hubieran podido imponer por mucho más tiempo a sus aliados una nueva guerra del golfo. Sólo su debilidad política y diplomática impidió a Europa jugar un papel internacional de primer rango.

Renunciemos pues a poner en el mismo saco la mundialización y el liberalismo. Acusemos al capitalismo financiero y seamos conscientes, como ha recordado en especial Élie Cohen, de que la capacidad de in-

tervención del Estado en la mayor parte de los sectores de la vida nacional sigue siendo grande y que la lógica económica no es implacable.

La entrada en vigor de los tratados de Maastricht y de Amsterdam podría incluso conferir una importancia creciente a las políticas de desarrollo tecnológico y a las políticas sociales de los países europeos. Nuestros Estados ya no podrán volver a actuar sobre los tradicionales instrumentos presupuestarios, monetarios, y más adelante tampoco de los fiscales, de sus políticas. Ya no volveremos a escuchar en el ámbito político esas declaraciones repetidas hasta la saciedad sobre la importancia del equilibrio presupuestario y sobre el franco fuerte y la lira débil. Volveremos a estar obligados, lo que es una buena noticia, a hablar de producción, de reparto del trabajo colectivo, de prevención de riesgos mayores, de la mejora de la enseñanza y de la atención médica, de los modos de reforzar la protección social y de lograr el reparto de jubilaciones decentes, de la necesaria reorganización de las ciudades y de la gestión de una sociedad de carácter cada vez más multicultural.

¿Qué queda de la idea de globalización después de estas muestras de sentido común? Nada. Decididamente, no se trata más que de un espantajo ideológico. Agitándolo, sólo se busca convencernos de que, sobre las ruinas de los proyectos integrales de desarrollo nacional de posguerra, se ha instalado un nuevo conjunto global, es decir, al mismo tiempo económico, social e internacional. Se querría hacernos creer en el paso de una sociedad estatalizada a una sociedad liberal y en la sustitución de una economía planificada por otra de mercado. Espero haber convencido al lector de que en realidad se trata de lo contrario de lo que esta ideología afirma. *En realidad hemos pasado de los modelos nacionales integrales a una situación internacional en la que las diferentes dimensiones de la vida económica, social y cultural se han dispersado, se han separado las unas de las otras.*

Pero, ¿de dónde proviene entonces el éxito del «pensamiento único»? Por una parte, seguramente de los medios económicos y financieros dominantes: algunos números de libros, de calidad muy desigual, han sido los eficaces voceros de la aparente superioridad de la política económica liberal. Pero no se sabría decir por qué semejante propaganda ha tenido semejante éxito mientras aumentan los índices del paro y el descontento.

De hecho la extrema izquierda, más que la derecha, es la que ha extendido la idea de globalización. De este modo intentaría justificar, en

nombre de la imposibilidad de configurar nuevos medios de control social de la economía, el mantenimiento de las formas tradicionales de economía dirigida. La apertura mundial de la economía y la defensa de los intereses sociales heredados han hecho así buenas migas, puesto que ambas coinciden en la marginación e incluso, en ocasiones, en la exclusión de las clases más desprotegidas. La debilidad de la acción sindical y, en Francia sobre todo, su casi completa identificación con la defensa de los estatutos del sector público, finalmente ha dejado campo libre a las fuerzas económicas y financieras que desean convencernos de que nada es más contrario al ejercicio de su libertad que el mantenimiento de los avances logrados, cuyos efectos económicos negativos los pagan a un precio muy caro las clases más débiles. Dicho de otro modo, no es tanto la situación económica como la situación social la que ha consolidado la difusión masiva de una ideología capitalista que conviene al conservadurismo social de la derecha y de la izquierda tanto como a los *golden boys* de las finanzas.

Todo esto, dicho sea de paso, debería movernos a actuar en favor de cierta transformación de las relaciones sociales. El sindicalismo francés comenzó a desplomarse, efectivamente, hace unos veinte años y las centrales sindicales han perdido entre uno y dos tercios de sus efectivos. Inversamente, a pesar de cierto debilitamiento, el sindicalismo ha conservado su fuerza en Alemania, en Suecia y en Italia, lo que ha permitido a este último país seguir con éxito políticas de liberalización y de equilibrio económico sostenido por el principal partido de izquierda y por las grandes centrales sindicales. Ejemplo destacable, casi tanto como el caso danés, holandés y portugués, que dice mucho acerca de la posibilidad de combinar apertura económica y protección social, cosas que la opinión pública francesa continúa considerando incompatibles, lo que ha llevado a nuestro país a navegar entre Escila y Caribdis, generando el descontento y el miedo.

En cierto sentido, resulta legítimo hablar de mundialización de la economía. Pero no se puede, no obstante, afirmar que se esté poniendo en práctica un nuevo modelo integral. Se trataría exactamente, según nos parece, de lo contrario: de la progresiva separación del sistema económico (y sobre todo de la economía financiera) de un conjunto social en el cual debería estar integrado, y de unas reacciones sociales, culturales y políticas que cada vez se hacen más identitarias, es decir, fundadas sobre la afirmación de ciertos intereses que ya no son económicos, sino

que se alimentan de su propia conciencia colectiva (ya sea ésta étnica, nacional o religiosa). El mundo no tiende a unificarse, sino más bien a fragmentarse. En este sentido, Huntington tiene razón frente a Fukuyama, pero los libros del primero no gozan de tanto predicamento como los del segundo. La idea de un modelo social aceptado (aunque no respetado) por todos, que combine economía de mercado, democracia representativa y tolerancia cultural, es manifiestamente falso, mientras triunfan en numerosos lugares del mundo los integrismos de todos los pelajes. Estados Unidos es el país más tocado por las «políticas identitarias» que destruyen el concepto de ciudadanía, y por tanto la capacidad de acción política, y esto tanto más cuando los partidos se encuentran cada vez más influidos por los *lobbies* financieros.

Ante semejante peligro de fractura social se yuxtaponen dos discursos: el de la mundialización económica y el de la identidad cultural. Y esto es causa y consecuencia del dismantelamiento de los sistemas de intervención pública y de los debates propiamente políticos tanto como de la desorientación de las ciencias sociales. Ante el vacío político abierto entre la economía internacionalizada y la defensa de unas identidades cada vez más particulares, resulta imposible la consolidación de algunos movimientos sociales capaces de transformar la política de un país. Esto explica el recurso a las revueltas callejeras y, en ciertos lugares, a la violencia. Aquellos que hacen de la necesidad virtud, que acentúan el carácter antiinstitucional, puramente crítico, de la acción colectiva, contribuyen a cerrar el círculo vicioso por el cual las situaciones objetivas y las reacciones subjetivas, personales y colectivas se refuerzan mutuamente, lo que contribuye a hacer imposible o a debilitar la acción política, es decir, la capacidad de la cual dispone un país para actuar desde dentro de sí mismo con el fin de reducir esta peligrosa disociación entre la economía y las diversas culturas.

Este análisis crítico de la idea de globalización desemboca en dos conclusiones. La primera es de tipo histórico. No hay razones para creer hoy día en la formación de una sociedad mundial que no existía ya en 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La idea de globalización, como la mayor parte de los compuestos ideológicos, aparece ante la escena pública en el momento en que comienza a perder su utilidad real para el análisis; en particular, en el momento en que en muchos países, como Francia, se habla de nuevo en términos de producción, de intervención pública y también de igualdad y de protección social.

La segunda nos concierne más directamente. Si la idea de globalización, que se quiere el mito fundacional de la sociedad capitalista mundial, no es más que una construcción ideológica, recuperaremos, en el caso de que la hagamos estallar, la conciencia de nuestras posibilidades de actuación, de nuestras responsabilidades y de la pertinencia de nuestros debates de opinión y de nuestras decisiones políticas.

La irracionalidad del movimiento de capitales no puede ser combatida más que por medio de intervenciones voluntaristas y políticas. El desarrollo tecnológico, el aumento del consumo, la lucha contra la fracturación social y en favor de un desarrollo sostenible deben ser nuestros principales objetivos. Nuestra primera tarea ha de ser la de identificar las fuerzas que pueden actuar positivamente y no confundir la crítica activa del capitalismo financiero y de la irresponsabilidad gubernamental con la denuncia global de la economía moderna, tan falsa como lo que ataca, y que preconiza el retorno a soluciones del pasado. Estas cosas deberían liberarnos de los irracionalismos de toda laya.

Poco importa saber si tales populismos buscan deslumbrar a la opinión pública, y en particular a las clases más desfavorecidas, o si ellos mismos se deslumbran y se invisten de la sagrada misión de convertirse en profetas de la desgracia en un mundo en el que el mal se extiende por todas partes, de forma, según dicen, inevitable. Se hace preciso en cualquier caso poner término a semejantes ilusiones, a esos errores y a esas denuncias. Se hace necesario, para ir en una dirección por completo opuesta, devolver la prioridad al análisis de los hechos y sobre todo a los debates de opinión y a las propuestas de actuación, pues nuestro margen de libertad es sin duda amplio. Casi se podría decir que no cesa de aumentar a medida que el crecimiento, como consigna la admirable expresión «crecimiento sostenible» (*sustainable growth*), depende de factores cada vez más indirectos, puesto que no se trata solamente, con tal de alcanzar la modernización, de acumular trabajo y capital, o de disponer solamente de carreteras, de escuelas, de una administración pública y de ordenadores, sino que también resulta imprescindible asegurar la supervivencia de unos frágiles sistemas sociales, cuyas fronteras han de permanecer abiertas, establecidos en un ambiente cambiante y poco previsible. Ciertamente, debemos dejar de lado las ruinas y las ilusiones configuradas a imagen del desarrollo voluntarista de posguerra; pero debemos, aún más, recuperar el sentido de posibilidad de la acción y las exigencias sociales y morales sin las cuales no habrá esperanza de resistir

la formidable presión de un sistema capitalista que se extiende al conjunto del planeta.

En este contexto adquiere toda su significación la pregunta que da título a este libro: ¿cómo escapar del liberalismo?

Por desgracia, algunos países, y en especial Francia, han de resolver al mismo tiempo dos problemas diferentes. Deben, efectivamente, escapar del liberalismo, aunque se dé el caso de que no tengan puesto en él más que un pie (¿no resulta ridículo oír hablar de liberalismo radical en un país en el que el Estado administra más de la mitad de los recursos de la nación, sea directamente, a través de los sistemas de protección social, o, incluso, interviniendo en la economía?). Los países que todavía no han dejado atrás el viejo sistema de control social de la economía, y que dudan en crear uno nuevo, se encuentran en la situación más delicada. Sobre ellos pesa la amenaza de hundirse en el capitalismo salvaje, incluso si se produce el caso de que vean cómo se desarrollan dentro de su seno cierta oposición radical que rechaza de pleno la modernización ofrecida por el capitalismo, oposición que confunde la comprensible revancha de los excluidos del sistema con la perpetuación de los corporativismos y de los intereses heredados. Los populismos de cualquier signo, entre los cuales destaca como más significativo y peligroso el del Frente Nacional (si bien algunos otros tienen origen también en el apoyo de la extrema izquierda), enmascaran y hacen insolubles las actuales dificultades, pese incluso a que la sociedad francesa se comporta, tal y como demuestran sus actos, de manera más creativa que sus pseudoteóricos, viéndose capaz de conciliar la eficacia económica y esas nuevas reivindicaciones susceptibles de reconducirnos hacia una nueva forma de entender la sociedad.

Por el hecho de que todavía vivimos, desde el punto de vista de la práctica y sobre todo del espíritu, bajo el síndrome de aquel viejo Estado reconstructor de posguerra (pese a que estamos comprometidos ya de manera irreversible con un nuevo ambiente internacional y con otro espacio cultural), nos encontramos en una posición de equilibrio inestable. Seguramente nuestras prácticas económicas y la opinión pública se han transformado lo suficiente como para insuflar cierto dinamismo satisfactorio en la sociedad francesa. Pero la ausencia, durante largo tiempo, de alguna acción política que combinara la búsqueda de beneficios económicos con determinados objetivos sociales, ha dejado intactas todas las formas de adhesión al pasado y todas las variantes de populismo,

como si sólo tuviéramos que elegir entre un capitalismo apátrida e impersonal y cierto jacobinismo en abierta contradicción con las prácticas y la vida cotidiana.

Si no dispusiéramos de ningún otro porvenir salvo la caída en el capitalismo salvaje, yo elegiría unirme a los viejos republicanos o a los populistas de izquierda. Pero tan sólo el descaro intelectual más extremo puede hacernos creer que hemos de enfrentarnos a semejante elección. El final del siglo XIX, en pleno empuje capitalista, vio la aparición de una legislación social, y por extensión de una democracia industrial, de la cual las sociodemocracias de comienzos del XX fueron sus herederas. Durante esa época la vida intelectual no se redujo nunca al mero y obstinado rechazo de la civilización industrial. ¿Por qué algo similar no podría pasar también en la actualidad? La respuesta surge al punto: porque los poderes políticos nacionales no pueden hacer más que dar muestras de impotencia y porque las instituciones europeas sólo son eficaces cuando se ponen al servicio de la libre circulación de capitales y de la integración de un espacio económico tan vasto como el de Norteamérica. Ahora bien, vuelvo a repetir, tal visión no posee el menor fundamento. Entre la economía internacional y nuestras vidas personales continúa interponiéndose cierto espacio político que en modo alguno se encuentra vacío, incluso si, como es el caso, parece lento y difícil pasar de los arreglos de los problemas de la sociedad industrial a los de la sociedad de la información, de los problemas de la economía administrada a los de la economía de mercado.

Las elecciones determinantes que hemos de hacer, competitividad económica o protección social, construcción europea o identidad nacional, nos dejan sumergidos en la desesperanza y en la confusión, pues no queremos renunciar a ninguno de esos objetivos que, según se nos dice, son incompatibles. Liberémonos de tales discursos catastrofistas, de estas dicotomías artificiales.

¿Quién podría creer que el producto de nuestras actividades sólo se destina al comercio internacional, por una parte, y a la Seguridad Social, por la otra? La mala gestión de las empresas públicas, el fracaso escolar, la segregación urbana, el reclutamiento inadecuado de las élites políticas, las trabas administrativas a la innovación; semejantes aspectos, ¿deben ser protegidos al precio que sea? La innovación tecnológica, la ampliación del mercado interior, los tipos impositivos y de la cotización social, ¿tienen verdaderamente tan poca importancia para la competitividad de

la economía francesa? ¿Cómo si estas cosas sólo pudieran ser gestionadas y dirigidas desde el exterior, desde esos dichos mercados internacionales! Por lo mismo, ¿hace falta recordar una vez más que las dos terceras partes por lo menos de nuestro comercio exterior se realizan en el interior de la Unión Europea y en proporciones todavía más elevadas, por consiguiente, en ese conjunto compuesto por la Europa Occidental y los Estados Unidos?

Que por gusto a la polémica se le achachen todos los males habidos y por haber a la burocracia francesa, o que otros discursos, igualmente extremistas, expliquen nuestras miserias recurriendo al aperturismo de los mercados internacionales, quizá satisfaga a quienes de continuo tropiezan con disparates administrativos o que se han visto abocados al paro por culpa de la desterritorialización de sus empresas. Pero estas reacciones perfectamente comprensibles se convierten en absurdas cuando con ellas se pretende explicarlo todo. Incluso pueden convertirse en escandalosas para una inteligencia media: ¿con qué derecho se condena por ejemplo a todas las empresas multinacionales, cuyas políticas han desempeñado papeles de relevancia en la aparición de nuevos países industrializados (gracias a lo cual, por otra parte, nuestro comercio exterior sigue siendo excedentario)? ¿Verdaderamente cabe defender la Seguridad Social sin defender al mismo tiempo, una vez vistos los mediocres resultados que son de dominio público, la necesidad de adoptar ciertas reformas en pequeños hospitales que apenas muestran actividad suficiente como para adquirir los medios y competitividad adecuados?

No se trata tanto, como se habrá comprendido, de hundirse en el centrismo como de rechazar elegir entre un «absoluto mercado» o un «absoluto Estado».

¡Dejemos de dar miedo a la opinión pública para que así no haga nada! No son pocos los riesgos, pero tampoco faltan posibilidades de elección. Mientras intentamos desembarazarnos al mismo tiempo del pensamiento único y del contrapensamiento único, distingamos igualmente entre las buenas y las malas maneras de salir de la actual transición liberal, de este recorrido doloroso y necesario que va de un tipo de control social de la economía a otro nuevo, de un espacio político a otro distinto.

Capítulo 2

LAS CUATRO FORMAS DE SALIDA

No vale la pena insistir más sobre ello. Aunque podemos felicitarnos de que las fuerzas del mercado han contribuido a hacer volar por los aires cualquier proteccionismo económico y social de carácter pernicioso, no se debería sin embargo reducir la sociedad al mercado y permitir la desaparición de algún control político y social de la economía. De nada sirve apelar a esa confusa idea de globalización si se enmascaran los perjuicios del capitalismo salvaje, cada vez más de tipo financiero y amenazador para el crecimiento económico, los intentos de autocorregirse de numerosos países y el resurgimiento de ciertas aspiraciones largo tiempo ahogadas por la ausencia de esperanza.

Esta postura no es la meta a que aspiro llegar: se trata por el contrario de mi punto de salida, pues ya se sabe que el debate político e intelectual de hoy día no pasa por efectuar la condena del liberalismo. El más que liberal Tony Blair no piensa, en modo alguno, que el mercado pueda resolver todos los problemas de la sociedad, como tampoco lo piensa el centrista brasileño Fernando Henrique Cardoso o el gobierno chino. El triunfo del capitalismo resulta tan costoso y tan insostenible que en todas partes se buscan puertas de salida al actual momento de «transición liberal». Pero existen remedios que son aún peores que la enfermedad; otros se demuestran inoperantes. Se trata de encontrar la mejor salida.

HACIA ATRÁS

La primera reacción a los cambios cada vez más veloces del mundo contemporáneo —que por otro lado tienen tantos aspectos positivos— consiste en atrincherarse en la identidad, en la historia, en la lengua. Es una reacción en donde lo verdadero y lo falso, lo útil y lo peligroso se encuentran tan íntimamente mezclados que se hace imposible tanto su

aceptación como su rechazo. Nadie tiene derecho a pedirle a los franceses que disuelvan su conciencia o su organización nacional en virtud de cierta hipotética sociedad mundial. Pero esta defensa de la nación sólo puede considerarse positiva si, en lugar de exaltar determinada sociedad, se apela a una gestión democrática y nacional de la economía y de los cambios sociales. En efecto, la tendencia actual hacia la dualidad en nuestras sociedades, lo que las hace progresivamente más similares a las sociedades latinoamericanas, ha de ser contenida; y es que la defensa de una identidad nacional saludable y de la acción del Estado nacional es parte integrante de eso que se suele llamar el desarrollo.

Todavía haría falta construir otro nuevo sistema de control de la economía, que no debería parecerse prácticamente en nada a éste que amenaza ruina desde hace veinte años, y dejar atrás la oposición retórica entre «absoluto mercado» o «absoluto Estado». En primer lugar sería preciso renunciar a conservar tal cual los residuos degradados de la economía dirigida. La defensa de las clases más desfavorecidas no ha de pasar por aprobar las huelgas de los pilotos de Air France, con lo discutible que resulta que éstos integren tal categoría. En cuanto a los sindicatos de funcionarios, mayoritarios en Francia, se mezcla en éstos la defensa de intereses legítimos con cierto lenguaje revolucionario y el mantenimiento de unos privilegios que contribuyen a acrecentar la división de la sociedad entre quienes gozan de protección y todos los demás.

Lo que intento combatir aquí no es tanto la resistencia a los cambios o las discordancias entre un discurso incendiario y algunas prácticas puramente defensivas; es esa apelación al Estado para subordinar los problemas económicos, sociales y culturales a cierta lógica propiamente estatal, y al mismo tiempo nacional y burocrática. Este recurso no es nuevo, y explica en gran parte el retraso francés en el capítulo de modernización económica, social y cultural.

A finales del siglo XIX, Francia se ocupó bastante poco de la cuestión social, es decir, de la explotación de los obreros, mientras andaba preocupada por el reforzamiento del Estado republicano frente al poder de la Iglesia. Una acción justificable por otro lado, de hecho, y que permitiría poner fin al clericalismo y a la escandalosa condena de Dreyfus, aunque hizo olvidar la necesidad de organizar un poderoso movimiento obrero. Anticlerical y colonialista, la izquierda olvidó la preocupación por los aspectos sociales. De este modo, Francia experimentó un gran retraso con respecto a Gran Bretaña y a Alemania en materia de sindica-

lización y de legislación social. Hasta 1936 y 1945 no se votaron en Francia un conjunto de leyes sociales, a iniciativa del Estado más que por la presión de las fuerzas sociales. Las guerras mundiales reforzarían esta tendencia, y la co-gestión gaullista y comunista de la Francia de la Liberación desembocó en el punto más álgido de oposición entre el Estado, considerado como agente de lo universal y de la ciudadanía, y la sociedad civil, reducida a la defensa de algunos intereses particulares. Este discurso se hace patente cada vez que el sector público se reafirma como el lugar de la libertad, y explica que su función principal consiste en proteger a los ciudadanos de las desigualdades y del excesivo provecho. Por espacio de largo tiempo, tal vez hasta el episodio de Vilvorde, Renault ha aparecido como una empresa de distinta naturaleza a la de Peugeot, y la distribución del gas se ha beneficiado de una consideración más alta que, por ejemplo, la producción de pan.

Lo que se ha de cuestionar es la idea, tan extendida en Francia, de que los asuntos políticos son más importantes que los asuntos sociales. La concepción republicana afirma que la sociedad se debe ver subordinada con respecto al mundo de la política, por lo mismo que la sociología ha de estar subordinada a la filosofía. Y no obstante, esta idea ha ido cargándose progresivamente de consecuencias negativas. Tan cierto es que ninguna sociedad puede ser libre ni democrática sin recurrir al recurso superior, previamente establecido, de la igualdad, como es el de la igualdad ante la ley, como que tal principio se arriesga siempre a permanecer en desconexión con la realidad social.

Francia es el país que ha promulgado con más celeridad los derechos políticos, pero no ha sido capaz de aplicarlos con sabiduría en situaciones sociales concretas. ¿A santo de qué, debieron pensar los obreros de los Ateliers nationaux, hemos de ser considerados ciudadanos si tenemos que trabajar en condiciones inhumanas o si nos privan de empleo? Eso fue lo que desembocó en la gran crisis social de la industrialización capitalista, en las jornadas de junio de 1848. Fueron seguidas, después, por la Comuna de París y por la represión, aplaudida por numerosos republicanos, que ahogaría la revuelta. El mejor observador de los sucesos franceses de 1848 y 1871, Karl Marx, criticó con razón el «espejismo político» de los franceses, que condujo por ejemplo a la joven Comuna de París a expulsar de su seno a los representantes de la Internacional.

Este modo de pensar adquiere formas diversas y se manifiesta en casi todos los sectores de opinión. Se trata, en primer lugar, de situar todas

las responsabilidades, los conflictos y las soluciones en la esfera del Estado. Nada resulta más común que la crítica a los tecnócratas, acompañada hasta el punto de apelar al... mismo Estado, para que se oponga a las fuerzas del mercado. Se viene escuchando habitualmente, y en especial desde el año 1995, cómo se critica a la burguesía de Estado en nombre de la pequeña burguesía de Estado, para retomar la expresión de Pierre Bourdieu, como si esta última no perteneciera también al Estado o no deseara implantar sus propias categorías dentro de la realidad social, tal y como se advierte en la enseñanza y en las administraciones que disponen de alguna influencia sobre la esfera económica.

Si nos limitamos a la recurrencia exclusiva del Estado, nos exponemos a ciertas contradicciones: ¿es el Estado anticapitalista o tecnocrático, y por lo tanto estatista? En períodos de paro y de precariedad la intervención destacada del Estado, ¿está encaminada siempre a ayudar eficazmente a los más débiles o, por el contrario, favorece a los miembros del aparato de Estado, a todos los niveles? Y si no resulta contradictorio, tal como pienso, el querer mantener la Seguridad Social y el reforzar al mismo tiempo el sector productivo, ¿la persecución de estos dos objetivos no supondrá una clara rebaja del número de intervenciones de Estado destinadas no a mejorar la eficacia económica, sino la justicia social?

Aquellos que sólo hacen referencia al Estado, ya sea para atacarlo o para defenderlo, son los últimos representantes de una forma de gobierno de posguerra en la que, en casi todos los países, por entonces en ruinas o de reciente formación, el papel jugado por el Estado se suponía necesariamente fundamental. Entre los críticos más radicales al Estado y sus defensores más arrogantes existe gran similitud de puntos de vista y una misma incapacidad para comprender que el papel del Estado, agente esencial a la vez de la modernización y de las reformas, ha sido reemplazado desde hace bastante tiempo (con éxito en numerosos países) por la pareja, al mismo tiempo conflictiva y dinámica, formada por una economía concurrencial y determinados movimientos sociales que buscan librarse del patronazgo del poder público, a la vez que se enfrentan con quienes se conforman con cierta lógica propiamente capitalista. Apelar de continuo al Estado debilita considerablemente los sectores económicos y dificulta de forma todavía más espectacular la aparición de nuevos agentes sociales. Se puede comprender a los ferroviarios cuando defienden sus privilegiados derechos; pero no deja de resultar peligroso tomarlos como representantes de todos los excluidos.

Los conflictos sociales de posguerra expresaban su preocupación por cómo se iban a repartir los beneficios del crecimiento. En los actuales se reconocen dos objetivos primordiales: la resistencia a la polarización de la sociedad, por una parte, y por otra la reivindicación de los derechos culturales en esta nuestra sociedad, no sólo progresivamente más multicultural, sino en la cual los derechos personales adquieren cada vez mayor relevancia en relación con la búsqueda de la distribución equitativa de los recursos.

El espíritu republicano se resistió durante largo tiempo a las demandas de derechos culturales, a tomar en cuenta a las minorías y cuanto supone diferencia, es decir, que no prestó debida atención a lo que sería la aplicación de los derechos humanos en el campo de la cultura. Por contra, se ha hecho el panegírico de la Francia una e indivisible, muy a menudo con el único fin de aniquilar por completo cualquier rasgo de identidad particular. Al menos, hoy día cabe constatar que semejante rigor comienza a atenuarse y a abrirse por medio de prácticas mucho más respetuosas con la diversidad. Anteriormente, valga como ejemplo, a la escuela de la República se la denominaba la escuela del pueblo, aunque durante bastantes años la enseñanza pública mantuvo dos ramas distintas, la primaria-profesional y la secundaria-superior, para servirnos de las expresiones de Baudelot y Establet. Por otra parte, ministros considerados muy republicanos han adoptado medidas represivas en contra de los extranjeros. De hecho, esta reacción republicana no es de derechos ni de izquierdas, sino que se trata, simplemente de un paso atrás.

El concepto de igualdad sólo dispone de fuerza si se enfrenta con firmeza a las desigualdades, lo que la pone al mismo nivel que la idea de equidad. Durante décadas, la izquierda republicana ha alabado la tarea igualitaria de la escuela pública, pese a que en Francia algunos sociólogos, de Naville a Girod, de Bourdieu a Boudon, de Baudelot y Establet a Prost y Dubet, demostraron que ésta mantenía las desigualdades en lugar de atenuarlas, y, más recientemente, que además aumentaba tales desigualdades, por lo que era erróneo descargar de responsabilidad a la escuela, como si solamente fuera mera transmisora de ciertas desigualdades de nacimiento. Estas observaciones han llevado a admitir la necesidad de una política «niveladora», es decir, que llamamos «discriminación positiva» y que los norteamericanos denominan «acción afirmadora», si bien sería más sencillo designarla con el término de «equidad». Los dogmatizadores del pensamiento único acusan a esta palabra de traicionar

el espíritu de la República. ¿Será necesario, por lo mismo, señalar con el dedo el pensamiento de John Rawls, en cuya base se encuentra una noción de equidad que, por extensión, está vinculada con la tradición socialdemócrata? ¿Acaso supone una aberración el fijar por debajo de la media la edad de jubilación de los mineros, puesto que, como otros tipos de asalariados que ejercen tareas físicas o mentales muy duras, su esperanza de vida es inferior a la de otros trabajadores? Las medidas niveladoras puestas en práctica han sido inspiradas por la noción de equidad, cuando apelar de manera general a la igualdad no reduce en nada las desigualdades reales. Es fácil afirmar que los extranjeros que llegan a Francia deben ser acogidos si su vida está amenazada en su país de origen y que han de acceder con facilidad, e incluso automáticamente —por lo menos los niños nacidos en suelo francés— a la nacionalidad, pero este noble discurso, que proclama que Francia es el país de la libertad y que la identifica con toda una serie de valores universales, ha desembocado en la asimilación impuesta, o dicho de otro modo, en la renuncia a cualquier rasgo de identidad particular, como si integración y defensa de la identidad fueran dos lógicas enfrentadas. Para decirlo claramente, Francia se permite rechazar cada vez con mayor rudeza a los extranjeros que se encuentran en su suelo por el motivo de que la mayor parte de los franceses creen que, si no tienen ambos pies dentro, es necesario dejarlos fuera. Y, sin embargo, somos demasiado conscientes de que las sociedades, a diferencia de las puertas, deben estar al mismo tiempo abiertas y cerradas.)

La realidad francesa se ha desarrollado por fortuna al margen de tales declaraciones de principios, aunque éstas la han preparado mal para entender el conjunto de reivindicaciones actuales más relevante, a saber, la de ser a la vez igual y diferente, un derecho que las mujeres han sido las primeras en exigir, pese a las dificultades en obtenerlo. Apelar a la República una e indivisible, en una situación en la que, por el contrario, sería preciso combinar diversidad y unidad, en la que ya no es posible esconder la propia identidad dentro del ámbito privado, puesto que ha invadido la vida pública, nos suena actualmente como una especie de retórica antimoderna caracterizada por la obsesión por el pasado.

Francia es el único país europeo que se percibe a sí mismo en crisis desde hace veinte años. No sin alguna razón, ya que hace cuanto está en su mano para protegerse de cualquier idea novedosa, de las nuevas estrategias económicas, de las soluciones pertinentes requeridas por las

eclosión

nuevas necesidades educativas.) Eso no significa de ningún modo que debamos entregarnos al liberalismo, sino que resulta absurdo el mantenimiento de cualquier aspecto que parezca guardar la menor relación con la llamada «excepción francesa».

El espíritu republicano se manifiesta también de otra manera, menos extremista, pero que contribuye igualmente al agravamiento de la crisis social.) Este espíritu se obstina, en efecto, en mantenerse alejado de los conflictos más serios y en situarse a parecida distancia de la pretendida eclosión del liberalismo, más verbal que real por otra parte, y de las muy radicales acciones y críticas en relación con esa política. Se identifica en especial con un centrismo preocupado sólo por el restablecimiento del orden y de la seguridad y en hacer respetar la ley, tanto por los más poderosos como por los más débiles. Esto encuentra evidente traducción en medidas más concretas y más represivas contra los segundos más que contra los primeros. El espíritu republicano renueva así una larga tradición de indiferencia o de desconfianza en lo relativo a la lucha en favor de los derechos sociales y culturales, una tradición que ha llevado siempre a los movimientos reivindicativos a la adopción de lenguajes revolucionarios e incluso a situarse en la órbita de partidos de signo revolucionario fuesen grandes o pequeños.

En la actualidad, se advierte claramente que el debate a favor o en contra del pensamiento único aburre a la opinión pública. Este cansancio puede traer como consecuencia el deseo muy positivo de que se adopten medidas sociales concretas, quizás parciales, pero de efectos patentes; pero puede conllevar igualmente el olvido de los problemas sociales más serios y a conceder prioridad a la defensa de la ciudadanía y a la lucha contra la diferencia.

Son muchos los que sugieren que, aunque se conceda prioridad al restablecimiento del orden público, de la autoridad y de la seguridad, estos objetivos no tienen ninguna connotación represiva o reaccionaria. Pero, ¿cómo no percibir aquí el retorno de aquella vieja concepción que hablaba de ciertas clases sociales peligrosas por las cuales la clase media —por entonces se decía la burguesía—, se sentía intimidada? Y puesto que en el siglo pasado la formación del movimiento obrero restó virulencia al tema de las clases peligrosas, y que la acción del proletariado redujo la violencia del subproletariado, ¿no haría falta hoy día adoptar la misma línea de acción? En razón de la ausencia de nuevos movimientos sociales, de su aparición y reconocimiento, de la ausencia también de re-

formas serias, los discursos sobre la crisis de la autoridad, la entrega a un ocio fútil, el rechazo de la disciplina colectiva y el culto a la diversidad conservan un fuerte regusto de orden moral del que sus autores pueden ser o no concientes. Esto quizás conduzca a cierto espíritu represivo o al desprecio de las positivas reivindicaciones que surgen, mezcladas con conductas propias de momentos de crisis, en las categorías más castigadas por la pobreza, la discriminación y la desorganización social.

Las llamadas de atención de tantos intelectuales, de políticos y de sindicalistas en favor de los valores fundamentales de la República resultarían más convincentes si aceptaran, en el campo de la educación, la constatación de que la educación atraviesa una grave crisis. Ciertamente, ellos mismos no ignoran que la escuela, hoy en mayor grado que ayer, no contribuye a reducir la desigualdad, y que en un mundo incierto el apoyo de la familia resulta más decisivo para los alumnos que su voluntaria entrega a las exigencias del conocimiento. Y sin embargo...

Cuando Philippe Meirieu, en una memoria sobre los liceos y en respuesta a sus detractores, recuerda que es imposible efectuar distinciones entre el aprendizaje y los conocimientos—si de lo que se trata es de evaluar la escuela, el papel de la enseñanza y la toma en consideración de las condiciones sociales e individuales en las que se mueve el alumno—se expresa con tal rigor que no se entiende cómo se podrían contestar sus análisis. Cuando se denuncian ciertas prácticas dejatorias, ¿quién podría renunciar a condenar junto a él esas dos formas de incomunicación que hoy son una espontaneidad mal entendida y el atrinchamiento del enseñante tras un estatuto de sabio que le impele a instruir antes que a educar?

La exasperación, e incluso la indignación, que suscita las reflexiones y propuestas sobre la escuela no toma en cuenta que el valor universal de saber no se impone por sí mismo y que éste, en todo caso, solamente ha logrado tener virtudes liberadoras directas cuando la sociedad se encontraba en estado de fragmentación y dominada por poderes y jerarquías heredadas de antaño. En nuestra sociedad, en la cual el placer por un lado y el éxito profesional por otro, juegan papeles tan significativos, la referencia a la importancia del saber se debilita si no pone esas motivaciones al mismo nivel que las obligaciones que lleva aparejadas todo aprendizaje, lo que se resume en el esfuerzo. Los «húsares negros» llevaron a cabo su misión, como era la de hacer añicos las fuerzas locales y clericales de control social y la de vincular la confianza en la ciencia con

la construcción de la nación republicana. Pero estos objetivos, que tan nobles nos siguen pareciendo hoy día, no podrían ser alcanzados si no se sitúa la comunicación pedagógica, y por tanto al alumno, en el centro de la práctica educativa.

Yo mismo participé no hace demasiado tiempo en cierta asamblea de enseñantes, alumnos, representantes de padres de alumnos y sindicalistas que, en la academia de Orléans-Tours, discutió los resultados de la gran consulta propuesta por Philippe Meirieu y por los miembros de su comisión. Sólo se pusieron reparos a dos de los asuntos sobre los que habían girado las respuestas de los alumnos: éstos pedían mayor autonomía personal y una comunicación más fluida con el profesorado. ¿Cómo es posible afirmar que estas demandas se oponen al acceso al saber y a la disciplina que éste exige?

De hecho, quienes se escandalizan porque se ponga al niño en el centro del sistema escolar expresan cierta inquietud real, la del desbordamiento—o incluso el derrumbamiento—del viejo sistema escolar y de la imagen que éste ha adoptado frente a las transformaciones culturales y las crisis sociales que ahora experimentamos, razón por la cual se prefiere a veces aferrarse a la imagen idílica de un modelo gravemente amenazado por el miedo a la descomposición (descomposición que, efectivamente, puede ocasionar el desarrollo de la espontaneidad, por un lado, y del comunitarismo, por el otro).

Pero, ¿cuál es la razón de semejante pesimismo? No hace falta recurrir al catastrofismo y a la creencia en nuestra impotencia frente a las fuerzas del mercado o del Estado burocrático. Por el contrario, es necesario afirmar que en materia educativa, como antaño, lo esencial es considerar a los individuos y a los grupos como posibles actores sociales, y no solamente como víctimas manipuladas o sin recursos. A partir de tal convicción será posible poner en acción algunas reformas gracias a las cuales se podrán reducir verdaderamente las desigualdades, eliminando la marginación y acrecentando la capacidad de iniciativa de cada uno. Tres objetivos que no hay por qué ver en lucha entre sí.

HACIA ABAJO

Puesto que la globalización es la ideología de las fuerzas dominantes, de todos los que sueñan con sistemas de comunicación cada vez más

alienado

efectivos, aniquiladores a su paso de cualquier forma de subjetividad, de la protección social, de la memoria colectiva y de los proyectos individuales, la salvación llegará de los dominados y a su amparo. »

La idea de que sólo los esclavos, y no los amos, se encuentran en situación de comprender esa misma relación y de transformarla es tan cierta hoy como lo era en tiempos de Hegel. Es necesaria, en efecto, la formación de nuevos movimientos sociales susceptibles de desencadenar las reformas políticas. Todavía hace falta que los dominados tengan alguna cosa que defender y, al mismo tiempo, que hablen en nombre del conjunto de la sociedad, que sean y se perciban a sí mismos como los defensores de la igualdad, del derecho al trabajo, a la diferencia o a la seguridad. Pues aquellos que sólo se pueden caracterizar por eso de lo que son privados no han sido nunca a lo largo de la historia los protagonistas de su propia liberación. Todo lo más, su revuelta hizo surgir las contradicciones del sistema dominante, pero fueron las nuevas élites políticas e intelectuales las que se sirvieron de la fuerza de agitación y de la miseria de los dominados para instaurar un nuevo poder definido, solamente por tales élites, como más racional, más nacional o más conforme con la voluntad divina. De este modo, los poderes nacidos de la toma violenta del poder en nombre de un pueblo dominado, explotado o alienado se fueron convirtiendo en totalitarios. El Estado que conquistaron condenó al silencio a ese pueblo y a esa sociedad en nombre de los cuales hablaba, y pronto se declaró la guerra interior y exterior contra quienes serían designados como enemigos del pueblo, solamente porque rechazaban su poder absoluto sobre el pueblo real. »

Cada vez que el infortunio de los dominados, de los explotados o de los marginados aparece en la escena de la historia, ésta duda entre la formación de un movimiento social o la irrupción de ideologías y de fuerzas políticas que devuelvan a los dominados a su miserable situación inicial. ¿Qué es lo que distingue ambos procesos? En el primero, los dominados defienden intereses positivos, que el conjunto de la sociedad percibe como tales y que reconoce como legítimos. No fueron los proletarios, los albañiles de obra o las mujeres de los talleres textiles quienes levantaron el movimiento obrero y acabaron por imponer su idea de los derechos sociales; fueron, por el contrario, quienes tenían un empleo que defender contra la sumisión a las normas de producción impuestas por la lógica del beneficio. Del mismo modo, tal como ha puesto de manifiesto Frantz Fanon, no serían los colonizados más alejados de la me-

ensalmo

trópoli, los más fuertemente anclados en su cultura, los que iniciarían los movimientos de liberación nacional, sino quienes habían recibido instrucción, en general en el mismo país colonizador, y que eran ahora conscientes de sus derechos.

En la actualidad, el peligro de que los dominados no puedan constituir nuevos movimientos sociales es agudo, puesto que se caracterizan por verse excluidos, por la carencia de empleo o de papeles que debieran permitirles desarrollar existencias normales dentro del país. Por tal razón, nuestro principal problema es y será durante largo tiempo el siguiente: ¿cómo pasar de la marginación a la protesta, del aislamiento a la defensa de los derechos por todos reconocidos, de la revuelta ocasional a una acción política constante?

Este cambio profundo, el de la aparición de los nuevos movimientos sociales, sucede ante nuestros ojos, y a ellos consagraremos el tercer capítulo del libro. Pero antes de llegar a las acciones de carácter liberador, será necesario salvar una serie de obstáculos. Y en especial escapar de quienes dirigen la vista hacia el pasado, de quienes quieren defender al precio que sea los intereses y valores de la pequeña burguesía de Estado en un universo en el que la mundialización de la economía, al igual que el aumento de la marginación y de la pobreza, y el auge de los nacionalismos, amenazan lo que ellos llaman la República.

Es el momento de señalar el segundo peligro que amenaza con destruir los movimientos en período de formación, y por lo tanto la misma democracia: el populismo. Éste ha vehiculado siempre, en los países y en las épocas más diversas de la historia, el rechazo de todas las instituciones y los sistemas de representación, pero también de cualquier intento de libre pensamiento, y todo en nombre de la esencia del pueblo. Populista resulta así la apelación como portensalmo de las fuerzas populares a las que, sin embargo, se trata de reducir al silencio mediante la puesta en funcionamiento de un sistema de dominación absoluta. El pueblo necesita de guías, individuales o colectivos, que le liberen de quienes le utilizan en su propio beneficio y que han de permitirle recuperar su identidad y la conciencia de su fortaleza; tal es el credo de los populistas.

El populismo no es de derechas ni de izquierdas, puesto que se sitúa fuera de las categorías de representación política. Aunque se hace muy ostensible en el espacio que se abre más allá de la derecha, se puede percibir también en ese otro que hay más allá de la izquierda. Se le suele encontrar, pues, tanto a la izquierda de la izquierda como a la derecha de

importante

fascistas
populistas

la derecha.) En la Francia actual, el Frente Nacional propone la forma más organizada de populismo. Este partido se constituye a partir de grupos fascistas, de cristianos tradicionalistas y de populistas, aunque se nutre igualmente, por un lado, de la desesperanza e inquietudes de las clases populares de la sociedad industrial y, por otro, de la crisis de la derecha parlamentaria, que se ha desestructurado y vuelto a ordenar a partir de una especie de pared maestra, como en cierto nacionalsocialismo heredado del gaullismo, mientras ponía en marcha al mismo tiempo una política económica liberal. El Frente Nacional pretende dar voz al rechazo, a la marginación y a la exclusión, antes que poner en pie algún programa de gestión de esas transformaciones que hoy experimentan todas las sociedades.

Por el lado de la extrema izquierda, ésa que lucha contra la izquierda plural tanto como contra la mundialización, han surgido otras formas de populismo, que consisten en la denuncia de los dominadores pero sin favorecer la acción autónoma de los dominados; además, desconfían de las instituciones representativas y consideran necesario el recurso a la violencia. Atacan alevosamente a los intelectuales convencidos de la importancia de los nuevos movimientos sociales, tal y como antaño hacían los comunistas que perdían el tiempo luchando contra los socialistas tildados de «social-traidores», cuando lo obligado hubiera sido aliarse con ellos para frenar el auge de los fascismos durante los años veinte y treinta.

La capacidad de acción de los dominados se ve debilitada cuando se definen solamente por esa identidad de la que son privados. Eso conduce a la proliferación de minipopulismos, a los que no hay que confundir con las actuaciones que, por el contrario, se dan como principal misión el incrementar la capacidad de intervención de las clases dominadas o marginadas. Estas políticas de denuncia y de rechazo han cortado a menudo el paso a la formación de nuevas fuerzas. Recordemos un ejemplo que luego volverá a aparecer. Mientras que Aides logró hacer de los homosexuales aquejados de sida los protagonistas de excepción en lo que a transformación de hábitos y gestión de su enfermedad se refiere, Act Up se concentró en la denuncia y alcanzó una mayor resonancia. Intentemos, sin embargo, no sacar conclusiones apresuradas. Decir que Aides es una organización moderada y que Act Up puede considerarse radical no tiene el menor sentido, pues ambas siguen caminos distintos, la segunda rechazando por completo lo institucional y la primera intentando

tildados

agitar la conciencia pública y transformar al mismo tiempo las leyes y los hábitos sociales. Pese a que la voz de Act Up se ha escuchado más, la tarea de Aides es la que ha obtenido mayores resultados, ya que la opinión pública, en pleno momento de auge de la enfermedad, cesó de fustigar a los «maricones» y reconoció el derecho de los homosexuales a vivir libremente.

fustigar

¿Cómo no pensar, a partir de este caso relativamente limitado aunque ejemplar, en el Mayo del 68, el cual se acaba de conmemorar, con un consenso inquietante, por su aportación liberadora? Han sido necesarios, en efecto, treinta años para que el movimiento antiautoritario simbolizado por la figura de Daniel Cohn-Bendit sea reconocido como el principal protagonista de Mayo del 68, a pesar de que en aquel momento y durante una larga década fuera la revolución proletaria de trotskistas y maoístas lo que parecía la esencia de aquel movimiento estudiantil y popular. Un contrasentido histórico que se explica por la gran resonancia de las ideologías revolucionarias en este país que, como he dicho antes, da la impresión de estar siempre más interesado por el Estado que por la sociedad, por la acción política que por el sindicalismo, por la llamada a la unidad que por el reconocimiento de las diferencias.

Hoy, los grupúsculos vuelven a estar de actualidad, y algunos veteranos de 1968 regresan a la superficie. Destaquemos no obstante que el más conocido de ellos, Alain Krivine, está dando prueba de clarividencia y prudencia. Acción directa, rechazo de cualquier forma de representación, políticas mediáticas, denuncia de los intelectuales; estas facetas del populismo se manifiestan también en la actualidad y amenazan con dificultar la formación de unos movimientos sociales, importantes desde un punto de vista tanto material como político, basados en la defensa universalista de ciertos derechos que habrán de ser reconocidos por todos.

grupúsculos

El movimiento de los «sin-papeles» merece que le dediquemos nuestra atención porque ha sabido poner al servicio de quienes son perseguidos por la policía, y que se les ha llegado a perseguir incluso en el interior de una iglesia, el apoyo de gran número de ciudadanos que han comprendido que por medio de sus acciones, minoritarias por definición, estos marginados defienden los derechos fundamentales de todos nosotros. Y si las movilizaciones alcanzaron su punto álgido en el momento de pedir la retirada del proyecto de reforma del artículo 1º de la ley Debré, ello se debió al hecho de que los franceses que disponían de papeles se sintieron amenazados a su vez por los ataques efectuados con,

alzado

tra quienes, al estar privados de los mismos, no disponían de los menores derechos, como son el aspirar a un empleo o a disfrutar de la protección que garantiza la Seguridad Social.

Abramos un paréntesis a propósito de lo dicho. Creo indispensable hablar de exclusión y de lucha contra la exclusión pese a la pertinencia de algunas críticas, como las que Robert Castel ha lanzado en relación con cierto empleo de la palabra «exclusión». Yo mismo la utilizo, pero sin olvidar que se refiere al acto de excluir, mientras que la marginalidad no designa más que determinada situación. Hablar de exclusión implica nombrar, o por lo menos buscar, un adversario, pues se precisa de la acción para evitar la exclusión. De este modo la palabra se utiliza con propiedad, pues está cargada de espíritu contestatario y de ira, como también lo está la palabra «injusticia». Exigir justicia supone acusar a quienes han causado daño a una víctima, la cual, por el sólo empleo de esta palabra, se transforma ya en actor reconocible. Oponerse a la exclusión implica también reclamar cierta concepción de ciudadanía, el derecho a participar de la vida política, económica o cultural. Esta palabra encuentra, por tanto, su lugar de una manera tan natural en la perspectiva que yo mismo definiendo aquí que su utilización me parece indispensable.

La fuerza de estos movimientos de base, apoyados en una serie de iniciativas democráticas, entre las cuales cabría citar las peticiones efectuadas por cineastas, artistas e intelectuales, ha podido hacer pasar desapercibida momentáneamente la profunda oposición que se establece entre esa ideología populista que apuesta por el rechazo radical y la defensa de unos derechos universales. Vemos ahora aparecer algunos escritos, y se oyen también discursos, impregnados de un populismo puro y duro, cargados de denuncia si bien vacíos del menor análisis. Resulta más sencillo, en efecto, atacar a los intelectuales o a los periodistas que analizar la situación económica. En este sentido, el libro de Viviane Forrester *L'Horreur économique* ha llegado a amplias audiencias gracias a sus ataques al funcionamiento de la economía mundial y a la denuncia de situaciones ciertamente injustificables, pero no aporta ningún análisis ni realiza el menor tipo de propuesta.

Lo que de algún modo limita los estragos que podría causar este populismo, tanto hoy como a principios de los años setenta, es la capacidad de reacción de la izquierda política. De la misma manera que el llamado Programa Común nos sirvió para escapar del terrorismo, que fue, por cierto, una forma radical de populismo que sacudiera a Alemania y en

especial a Italia, la formación de la izquierda plural ha impedido hasta el presente que lleguen a estructurarse, a partir de movimientos sociales actualmente en formación, ciertos movimientos políticos de extrema izquierda, propiamente populistas.

La amenaza populista es mayor en el movimiento de los «sin-techo» y en el que conforman los parados que en el de los «sin-papeles», ya que se basa en la apelación a la conciencia moral. ¿Se puede resolver la crisis de falta de vivienda por medio de la ocupación de inmuebles deshabitados? Resulta evidente que no, y nadie, por otra parte, ha pretendido semejante cosa. Pero hay quienes participan de la idea de que la denuncia, efectuada de manera espectacular, bastará para solucionar el problema. La movilización contra el paro atraviesa ahora una situación todavía más complicada, puesto que la falta de empleo es producto al mismo tiempo tanto de los cambios acaecidos en la economía mundial como de la inadecuación de las políticas francesas de gestión, educación y explotación de los recursos. Por eso, siguiendo la estela de las iniciativas adoptadas por Maurice Pagat, las iniciativas de Assedic han buscado alcanzar un fuerte impacto; claro que, paralelamente, acciones espectaculares concretas, como la ocupación de la École normale supérieure, de enorme contenido populista, no se han visto acompañadas de ninguna solución práctica.

La tentación populista se encuentra ausente, por lo menos, del movimiento formado por los profesores de Seine-Saint-Denis, que ha contado con el sólido apoyo de los padres de alumnos y del movimiento de liceistas. Partiendo de una reivindicación a favor de la igualdad, como es que el Estado paga menos por alumno en los departamentos pobres que en los más ricos (cosa que es cierta), este movimiento, defendido por cuadros comunistas tan destacados como el señor Braouezec, alcalde de Saint-Denis, ha desembocado en la necesidad de cierta discriminación positiva para dar más a los que tienen menos; se trata de una búsqueda de la equidad que se encuentra en las antípodas del populismo. Los alumnos de los liceos, en el otoño de 1998, protestaron también contra cierta desorganización que en especial castiga a los más desprotegidos.

¿Habrá que concluir de manera optimista afirmando que el populismo (el de extrema izquierda tanto como el de ultraderecha) se haya consolidado menos de lo que pudiera creerse y que sus diferentes variantes no impedirán formarse nuevos movimientos sociales y que se renueve la vida política? Yo así lo creo.

El principal peligro proviene, evidentemente, de la ultraderecha, aunque bien cabe esperar que el Frente Nacional encuentre su límite en la propia impotencia política, haciéndose antipático a muchos de sus propios militantes. En lo relativo a la extrema izquierda el pronóstico es más difícil de realizar, hasta tal punto las categorías que promueven resultan frágiles y dispersas. La tentación populista, que encuentra explicación a causa de la extrema desorganización de la acción política que padecemos desde hace un cuarto de siglo, sólo se debilitará si la izquierda política, tanto en Francia como en el exterior, logra evidenciar que la apertura económica mundial no nos reduce a la inacción política y que la mundialización únicamente implica el crecimiento de la exclusión si no somos capaces de oponerle nuestra voluntad política.

En el momento en que se está produciendo la creación de la moneda única, operación titánica que trastoca los modos tradicionales de acción del Estado, la idea de una hipotética impotencia con respecto a la actuación política atrae naturalmente a algunos personajes, tanto a los que creen posible la vuelta al voluntarismo de De Gaulle y del comunismo como a quienes no perciben más soluciones que rechazar los cambios en curso, la denuncia de aquellos que los dirigen y el desprecio de los intelectuales que no se resignan a la desesperanza y a la autoflagelación. El tumulto populista da la bienvenida, a su particular manera, a este cambio de época caracterizado por la liquidación de unas intervenciones públicas convertidas en inoperantes, cuando no en francamente negativas, y por la formación de nuevos actores sociales y nuevas estrategias políticas que tienen por finalidad garantizar la integración social, la modernización económica y el respeto de los derechos culturales de las minorías.

HACIA ARRIBA

El nuevo salto tecnológico emprendido por nuestras sociedades sólo se puede considerar de forma positiva. Y aunque resulta legítimo evaluar los riesgos del mal uso de la ciencia, y en particular de la biología, nada justifica la pérdida de confianza en la investigación científica. Podemos efectuar un número importante de críticas a la televisión, pero a nadie se le ocurriría, pienso yo, reservar a los sabios, sean éstos religiosos o laicos, el monopolio de la información. Somos concientes de que la es-

cuela incrementa antes que disminuye las desigualdades, pero, ¿quién osaría oponerse al aumento general del nivel de escolarización?

Tal confianza en el futuro y la conciencia de que es preciso renunciar a los modelos heredados del pasado no contaban con demasiada aceptación hace todavía pocos años, por lo que aún era necesario insistir en ese sentido. Pero actualmente se ha invertido la situación, convirtiéndose en una prioridad la crítica a cierta adhesión descerebrada a la modernidad, una modernidad que olvida tomar en consideración las formas de poder y de conflicto que están en activo en nuestra sociedad. Así, aunque sigue siendo indispensable romper con el pasado, se hace necesario igualmente rechazar el pensamiento de que las innovaciones técnicas y la aceleración de los cambios económicos mundiales generarán por sí mismos nuevas formas de democracia, en esta ocasión a escala mundial, puesto que el concepto de nación queda desbordado, como se repite hasta la saciedad, por la misma naturaleza de las redes multinacionales y de los cambios económicos (que son en esencia transnacionales).

La idea de construcción de un modelo social europeo cabe ponerla en el haber de Jacques Delors. Desgraciadamente, es bastante sabido que esta declaración de intenciones pasó al olvido después de su partida y que, desde entonces, los debates acerca de la construcción de Europa han girado casi exclusivamente sobre temas de carácter monetario y financiero. Es cierto que el gobierno francés ha insistido para que se constituya un verdadero gobierno europeo y que recientemente se ha opuesto, cabe decir que con no poca razón, a que el gobernador de la Banca Central europea sea designado por los presidentes de los bancos centrales nacionales. Pero, ¿cómo no ver que los mayores esfuerzos para la construcción europea se están dedicando a la libre circulación de capitales, que la coordinación de los sindicatos a escala europea no ha tenido grandes efectos y que el Parlamento Europeo se encuentra bien lejos de jugar el mismo papel de privilegio a escala de la Unión que los Parlamentos nacionales en sus países? Como el republicanismo y el populismo, el mundialismo es una de las principales enfermedades infantiles de la nueva sociedad en la que acabamos de entrar. Y, ciertamente, el mundialismo resulta incluso más peligroso que las otras dos en lo que se refiere a la renovación de la democracia, puesto que está claramente al servicio de las fuerzas económicas (y sobre todo financieras) dominantes.

La democracia no alumbrará mañana, como por ensalmo, una todavía hipotética sociedad mundial. Por el contrario, permanecerá vincula-

7/10

da a las instituciones nacionales y se consolidará a escala local gracias a las asociaciones, establecidas habitualmente con tal de alcanzar objetivos locales. El renacimiento de la vida pública, al cual estamos asistiendo, traerá aparejado, si no sucumbe antes a la tentación populista, el incremento de los factores indirectos de desarrollo, en especial si la reanudación del desarrollo permite a los gobernantes consagrar los recursos más importantes a la mejora de la protección social y a las nuevas iniciativas en favor de la modernización de hospitales y de escuelas.

Pretender escapar de las actuales dificultades por arriba, o pasar por encima de ellas, se revela mera ilusión. No cabe esperar de la tecnología o de las fuerzas económicas que resuelvan por sí solas los problemas sociales. De hecho, incluso los convertirán en insolubles si la opinión pública acaba por pensar que el progreso económico únicamente precisa de libertad y de flexibilidad para mejorar las condiciones de vida de la población.

No insisto más aquí sobre la ilusión modernizadora porque actualmente ha perdido mucho vigor. Por otra parte, no se había extendido nunca más que por círculos muy limitados, puesto que la opinión pública estaba demasiado preocupada por la crisis como para dejarse embaucar por semejante sociología-ficción. De repente, hoy da la sensación de que nos atrae demasiado la idea de condenar globalmente la modernización. Pero esta crítica no se habría de efectuar sin acompañarla al mismo tiempo de la denuncia a cierta creencia muy extendida, como es que las transformaciones técnicas y económicas han de traer aparejadas naturalmente la abundancia, la libertad y la felicidad.

HACIA LO POSIBLE

La unificación monetaria de gran parte de Europa no resolverá los problemas económicos y sociales de los países que en ella participan, pero ayudará a poner fin a debates periclitados, cerrará las puertas del pasado y nos obligará a pensar y a organizarnos para el futuro. No debe hacernos soñar en radiantes porvenires, sino más bien en la reconstrucción de nuestra existencia política y social.

Los tres peligros que nos amenazan — el republicanismo, el populismo y la mundialización — son por fortuna tan diferentes entre sí que no se pueden asociar con la intención de proponer a los franceses una política

general. Aunque, ocasionalmente, los republicanistas y los populistas se unieran, contra el tratado de Maastricht por ejemplo, ambos tendrían de continuo en mente que no hay acuerdo lo suficientemente sólido que pueda aproximar a quienes piensan que el liberalismo económico resolverá todos los problemas sociales y a los que quieren subordinar, al precio que sea, la economía a un Estado concebido a manera de déspota ilustrado o, lo que viene a ser lo mismo, a manera de monarquía republicana. Pero si nos situamos en el punto de vista de los movimientos sociales actualmente en formación, parece claro que estas tres tentaciones tienen en común el interés por paralizar y desviar de sus objetivos a los actores sociales.

Debemos salir, y estamos ya a punto de hacerlo, de un momento de transición liberal. Pero esta salida no se producirá si nos dirigimos hacia atrás, ni hacia abajo, ni hacia arriba; no puede producirse más que si caminamos hacia adelante, hacia la reconstrucción de nuestra capacidad de acción política, lo que pasa, primeramente, por la formación de nuevos movimientos sociales.

Francia acaba de escapar a la catástrofe. Lo que nos ha conducido al borde del abismo no ha sido la situación de la economía, la crisis de la Seguridad Social o la de las pensiones de los jubilados. Desde hace unos veinte años, se ha convencido a los franceses de que nuestra política de Seguridad Social y el sistema económico mundial se habían convertido en aspectos incompatibles. Unos pensaban así porque veían en la globalización una forma de gestión económica que inevitablemente tendía a reducir el empleo, la Seguridad Social y el nivel de los salarios, y otros porque sólo contemplaban las tensiones propias del mercado como único medio para acabar con el corporativismo, la burocracia y los déficit presupuestarios.

Mientras ha predominado la idea de que había una contradicción insalvable entre los costes económicos y los objetivos sociales, Francia ha avanzado dando tumbos camino hacia la catástrofe. El estancamiento y el desempleo, la debilidad de los programas de gobierno; todo ello condujo de manera acelerada, entre 1991 y 1995 y luego en 1997, a una degradación de nuestra capacidad de actuación. A partir de la gran crisis de 1995, y hasta el repentino fracaso de la derecha en 1997, dio la impresión de que el país iba a la deriva, y el pesimismo se fue incrementando a medida que la creación de una moneda única parecía inevitable.

Pero este período ya ha pasado. No porque hayan sido adoptadas finalmente ninguna serie de medidas eficaces, sino porque la coyuntura económica internacional ha mejorado (puesto que Francia no ha acusado gravemente las crisis originadas en Asia y en Rusia, incrementándose a la vez el consumo y las inversiones interiores), y porque al fin algún gobierno se ha atrevido a señalar que progreso social y realismo económico no sólo no eran incompatibles sino que podían, y hasta debían, ir de la mano; el hecho es que Francia ha dado un salto gracias al cual ha alcanzado el pelotón de los países europeos que, desde hace ya algunos años, estaban demostrando con cierto éxito que tal combinación resultaba posible.

Y es que ya desde su primer año de gobierno, los esfuerzos de Lionel Jospin, Martine Aubry y Dominique Strauss-Kahn, con su voluntad de salir del punto muerto, nos parecieron convincentes. Al final de este período, aupado por sus éxitos y popularidad, el Primer ministro se manifestó de manera más clara, formulando abiertamente su intención de combinar los objetivos sociales y los medios económicos; de participar plenamente en el sistema económico mundial aunque rechazando al mismo tiempo la destrucción del sistema de protección social que, con sus votos, pretendían los liberales. Se puede, se debe criticar al gobierno cuando da muestras de debilidad, pero no es justo ignorar que ha vuelto a abrir un espacio político pleno de posibilidades.

Y sin embargo, este nuevo espacio requiere como condición que la amplia mayoría de la opinión pública reconozca que el futuro sigue estando abierto, que no nos vemos arrastrados a una caída inevitable y que aún podemos participar con eficacia en la formación de nuevos actores sociales. El actual gobierno, salvándonos *in extremis* de las contradicciones y de las convulsiones que antes nos paralizaban, ya ha contribuido en gran medida a dotar de sentido los análisis planteados en términos de actores y conflictos sociales. Sería aún más conveniente que ese mismo gobierno, pese a haber cortado el nudo gordiano que nos sofocaba, diera pruebas de dejar de lado sus reservas, e incluso cierta hostilidad, en relación con los movimientos sociales actualmente en formación.

Esta hostilidad debería cesar ahora por completo y las reivindicaciones en favor de los derechos ciudadanos ser escuchadas. Pero las resistencias de la acción del gobierno deben ayudar a recordarnos también que este tipo de movimientos han de actuar por sí mismos, sin servir de «base» a ningún partido político, sea éste el que sea.

Capítulo 3

¿NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES?

CONTRASENTIDOS

No es posible, tres años después de la gran huelga de diciembre de 1995, dirigir los instrumentos del análisis a ningún movimiento social, antiguo o nuevo, sin reflexionar previamente sobre esta movilización. No solamente en razón de su importancia, sino porque supuso el punto de partida de cierta construcción ideológica que se desarrollaría con inusitada rapidez, teniendo en cuenta que partía de cero. Esto es algo más sorprendente y lamentable si se advierte que en ese mismo momento estaban tomando cuerpo una serie de movimientos sociales reales que, a decir verdad, se encontraban en proceso de formación desde hacía bastante tiempo. El contrasentido que señalo es doble: una percepción errónea sobre la verdadera naturaleza del movimiento huelguista de 1995 y cierta incapacidad a la hora de advertir la novedad de unos movimientos sociales en proceso de formación.

Quienes veían en el apoyo masivo de la opinión pública a la huelga de diciembre de 1995 cierto signo de renovación de la lucha de clases, o incluso del espíritu de lucha sindical, tomaban sus deseos por realidades. Aunque es cierto que la opinión pública, angustiada e irritada por el nivel de desempleo y por la precariedad apoyó por esa época todas las huelgas, y ésta aún con mayor firmeza que cualquier otra, con el fin de manifestar su descontento, el verdadero sentido de la huelga de diciembre de 1995 viene dado por el agotamiento y la descomposición de eso que Guy Groux ha llamado el bloque social, es decir, de la gestión por parte del Estado de la dinámica social, y en particular a cuanto se refiere al mundo del trabajo. Se trata de un modelo típicamente francés que ha tenido como consecuencia la excepcional debilidad de nuestros sindicatos, puesto que señala al Estado como el principal garante de un progreso social que debe incrementarse (y que en efecto se ha incrementado), sin tomar en verdadera consideración la situación económica

subvenciones

ni la capacidad de negociación de los asalariados. Tal modelo, que siempre ha hecho triunfar a las fuerzas políticas, y sobre todo al Estado, sobre las fuerzas sociales o económicas, está agotado desde hace tiempo. De hecho, ahora el Estado no es el principal dinamizador de la economía. Ya en 1981 era un espejismo pensar que las nacionalizaciones en bloque pudieran favorecer la modernización económica, pero en los años noventa, mientras las empresas francesas progresan en los mercados internacionales, resulta evidente que la acción económica del Estado ha de consistir primordialmente en administrar (cada vez peor) sus propios sectores de acción.

Paralelamente, en el plano social las tareas del Estado, después de haber apostado por una política dinámica de empleo y de creer en el papel igualitario de la educación, se reducen desde hace bastante tiempo a la protección de los sectores bajo su control, a imponer al conjunto de la nación la mayor parte de los costos de jubilación del sector público y de las subvenciones a las empresas de ese sector, y a permitir, al igual que el sector privado, la penetración del trabajo temporal e interino. Un Estado como éste no concede a la educación más que un papel secundario en la formación y en la reconversión de los asalariados, y consolida los mecanismos conservadores que sirven para el reclutamiento de las élites políticas.

Por esta razón Francia se encuentra privada casi por completo de sindicatos y gobernada por un Estado debilitado. Desde este punto de vista, la huelga de 1995 no significó un nuevo momento de desarrollo del sindicalismo, como en seguida quedó demostrado, sino que en todo caso esa huelga sancionó el fracaso de un sistema de gestión de la economía y de las relaciones laborales que desde hacía mucho tiempo se demostraba ineficaz e incluso perjudicial. Sobre todo, resquebrajó la creencia de que la apertura económica y la integración social son dos ideas absolutamente contradictorias.

Esta interpretación no cuestiona ni por un instante las motivaciones de todos aquellos que, mayoritariamente, apoyaron con firmeza la huelga, ni por supuesto la voluntad del Estado por acabar con el deterioro de la situación social (ni tampoco el punto de vista moral de la opinión pública). Pero se opone a esa otra interpretación de quienes en ese momento pretendieron incrementar la responsabilidad del Estado en tanto que gestor de la economía y de la sociedad, lo que no se podía hacer sin poner en peligro la actuación de los actores económicos y sociales.

Por otra parte, sostengo que, entre 1995 y 1998, ha quedado cada vez más claro que los conflictos más significativos se han desplazado del terreno de los derechos sociales al de los derechos relacionados con los factores culturales. Sobre estos dos asuntos versará el siguiente capítulo.

DE LAS LUCHAS CLÁSICAS A LAS NUEVAS LUCHAS

Cuando se habla de movimientos sociales sin más precisiones, se suele sugerir que las luchas sociales demuestran tener cierto rasgo común y que éste encuentra fundamento en el rechazo de cierta política liberal cuyas consecuencias son bien conocidas: subordinación de la vida social a la lógica aplastante de esa globalización que asedia a los trabajadores, aumento del paro, una Seguridad Social amenazada y el debilitamiento de la capacidad de acción del Estado. ¿Quién, desde luego, no defendería la Seguridad Social o el mantenimiento de los salarios? ¿Quién no se opone al paro y a la precariedad laboral? Pero tales declaraciones de principios no sólo no suponen por sí mismas ninguna solución al problema, sino que ignoran el número de movilizaciones populares que, sin ser indiferentes a estos objetivos, presentan otra naturaleza: *algunas de tales movilizaciones pretenden que sean reconocidos los derechos culturales.*

No trataremos aquí de algunos movimientos que se podrían denominar como clásicos, que serían aquellos que concentran sus esfuerzos en la defensa de las condiciones laborales y salariales. En los últimos años, el movimiento de los camioneros ha sido el más relevante de entre éstos, y ha contado con el apoyo de la población, a pesar de los inconvenientes que le ha causado, puesto que el número de horas de trabajo pasadas en las carreteras parece escandaloso en un país en el cual el tiempo semanal oficial es de treinta y nueve horas, aunque pronto se verán reducidas a treinta y cinco. En resumen, que el hecho de que este movimiento se pueda encuadrar dentro del tipo clásico no reduce en nada su importancia.

Otros muchos movimientos se han puesto en marcha dentro de las empresas y de los servicios públicos, sin relación alguna con la lógica liberal: han entrado en actividad dentro de la RATP y de EDF. En el caso de la SNCF, las causas han sido el sistema de jubilación de los ferroviarios y la reforma de financiamiento de la Seguridad Social. El movi-

LOS CLÁSICOS

miento de internos y de directores de clínica estaba todavía menos dirigido contra determinada política liberal, puesto que se proponía la mejora no tanto de las condiciones laborales de los médicos en los hospitales (bastante lamentables, por cierto) como sus niveles de remuneración por la Seguridad Social en el sector privado. Nada que comentar, por otro lado, sobre la naturaleza de los movimientos surgidos en Air France. El movimiento de parados resulta ser, por último, casi el único que tiene relación con la situación económica, y ya volveré sobre él, pero su importancia y resonancia se ha ido reduciendo en parte. J

Por el contrario, lo que resulta sorprendente desde comienzos de los años ochenta es que los movimientos que han impactado con mayor fuerza a la opinión pública por su contenido, y no sólo por su contexto, han sido habitualmente los movimientos formados en defensa de los derechos relacionados con la cultura. Por eso comenzaré por recordar los movimientos de los *beurs* y de los militantes antirracistas, y después los de los homosexuales, vinculados con la lucha contra el sida. Entre los movimientos de los «sin», destaca evidentemente por su importancia, y con mucho, el de los «sin-papeles», y a él volveremos más tarde. J

¿Qué significa esta evolución? Significa claramente que los problemas laborales y salariales han perdido relevancia, pero que la formación de nuevos actores, y por consiguiente el renacimiento de la vida pública, pasa a menudo por la reivindicación de una serie de derechos culturales, y que ese género de luchas, más que los movimientos directamente opuestos a la lógica liberal, es el que merece el nombre de «movimientos sociales», si bien es cierto que no existe movimiento social alguno en el cual la reivindicación que contiene no se acompañe de un rechazo.

¿Pueden construirse acciones colectivas, o mejor aún, movimientos sociales sobre la base de la privación, de la dependencia o, sencillamente, sobre la miseria? Hay quien responde que es evidente que sí, y añade: ¿sobre qué otra cosa podrían fundarse? ¿No fue acaso la explotación laboral el origen del movimiento obrero, la dominación colonial la que hizo surgir los movimientos de liberación nacional o el imperio de lo masculino el que suscitó el movimiento feminista?

Tales posturas, que se prodigan al abrigo de la evidencia, sin embargo no resisten el menor análisis. Para que se originen esos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por contra, que reivindiquen también determinados atributos positivos. Los sindicalistas han defendido el trabajo y el empleo en contra

de la explotación capitalista; cierta conciencia de identidad nacional o cultural ha animado a los movimientos anticolonialistas; la afirmación de una personalidad propia impulsó a las mujeres en su lucha contra la dependencia masculina. Hace falta, por consiguiente, que la lucha no esté dirigida solamente contra el orden imperante, sino que actúe en nombre de valores considerados esenciales por el conjunto de la sociedad. En nombre del progreso y de la sociedad industrial el mundo obrero se opuso a los patronos; en nombre de la autodeterminación, y por tanto de la libertad, fue combatida la dominación colonial. En nombre de la liberación del cuerpo y de la sexualidad el movimiento feminista causó impacto en toda la sociedad. Pero más allá de estas posiciones sobre la naturaleza de los movimientos sociales, se hace preciso preguntarse por sus mecanismos de formación y por las «enfermedades infantiles» que les son propias, y al mismo tiempo por cuáles son los obstáculos que se oponen a su maduración.

El recurso a la violencia y una dependencia extrema en lo referente a sus apoyos exteriores son los dos principales peligros que amenazan la formación de los nuevos movimientos sociales. No resulta sencillo proteger a estos movimientos en período de formación de los grupos exteriores que buscan utilizarlos en su propio beneficio o de la violencia que los puede destruir desde su interior. Estas debilidades y enfermedades están presentes en todos los movimientos de los «sin»: «sin-techo», «sin-trabajo», «sin-papeles». Pero aún más fundamental resulta intentar reconocer, a la inversa, en ciertas actuaciones que parecen fundadas sobre la simple privación de una cualidad, la presencia de algunas reivindicaciones positivas, y por lo tanto de conflictos importantes que les sirvan en el corazón de la sociedad y de la cultura, cosa que no ha de ser óbice para denunciar las posibles desviaciones, y en especial cualquier manipulación política o ideológica como ésas de las que suelen ser víctimas estos movimientos, todavía poco autónomos. J

En las movilizaciones contemporáneas lo más notable y característico proviene de su voluntad de ruptura, de rechazo y de denuncia. Estos movimientos de repulsa están dirigidos contra la injusticia, contra lo intolerable. Pero a partir de ese rechazo de un orden por naturaleza excluyente se ven obligados a elegir entre dos caminos distintos: el primero es el que conduce a la formación de actores sociales autónomos, si es que, como grupos en general minoritarios que son, logran asociar sus reivindicaciones particulares con la defensa de ciertos principios reco-

óbice

nocidos por la sociedad, y más concretamente con determinados derechos; el otro puede llevarles a depender de fuerzas políticas o ideológicas que no confían en la posible formación de actores autónomos y que se arrojan ellas mismas la función de vanguardias cuya tarea consiste en dotar de sentido, y en ocasiones incluso de organización, a simples «fuerzas» o «masas» incapaces de acceder por sí mismas a su propia conciencia. En las acciones colectivas que se han desarrollado en el curso de los últimos años se pueden distinguir tres componentes: las primeras revueltas, el recurso a un principio general de legitimidad y, en dirección opuesta, la instrumentalización de la acción colectiva por parte de esas vanguardias poderosas y experimentadas.

Es fácil arrojar luz sobre el primer y el último de estos componentes. El primero es el más diáfano: todas sus acciones van acompañadas de actos de transgresión y del rechazo de la regla general (se ocupan edificios vacíos y despachos administrativos, se convocan manifestaciones en la calle). El último, la dependencia, se caracteriza por la debilidad de sus actuaciones: tanto hoy como ayer, los grupos con una ideología, ya sea de intelectuales o religiosos, se atribuyen la misión de definir su sentido. Pero resulta más complejo y también más importante intentar explicar eso que, a partir de ciertas acciones, autoriza al analista a hablar de movimientos sociales, ya que su novedad y originalidad suele ser grande.

Los movimientos de las sociedades industriales, y el movimiento obrero en primer lugar, solían hablar como representantes de la historia, del progreso, de la sociedad de la abundancia o de la sociedad comunista; en otras palabras, de un porvenir deseable e incluso necesario. Pero el siglo XX se ha visto demasiado dominado por regímenes totalitarios que anunciaban una sociedad perfecta y un hombre nuevo para que, ahora, se pueda continuar creyendo en tales utopías de tan catastróficas consecuencias. Por el contrario, contamos con una viva conciencia de la fragilidad que rodea a nuestras sociedades, amenazadas tanto por su propio desorden como por la destrucción de su entorno. Estamos en oposición con la proliferación de ciertas técnicas y con el liberalismo desenfrenado, pero, al mismo tiempo, con la obsesión identitaria de algunos comunitarismos que se quieren imponer en nombre de la resistencia a la dictadura del mercado. *La defensa de los derechos culturales y sociales de los individuos y de las minorías es, actualmente, el objetivo primordial de los movimientos sociales que se oponen tanto al imperio del mercado como a la dominación de los movimientos de inspiración comunitarista.*

Estos movimientos ya no hablan en representación de la sociedad perfecta, ni miran tampoco hacia el porvenir: más bien luchan por la defensa del derecho de todos a una existencia libre y «humana». Tal es la forma que adquiere hoy día el principio general sobre el que descansan todos los movimientos sociales: el derecho a la igualdad cultural.

De las diversas acciones colectivas que hemos tenido ocasión de conocer durante los últimos años, y más allá de los momentos iniciales que conforman una movilización, vamos a intentar analizar ahora dos aspectos: por un lado, la influencia ideológica que los deforma y los sofoca, y por otro esa nueva reivindicación de los derechos de individuos y de ciertos grupos despreciados por el (des)orden dominante, castigados por la desigualdad y la exclusión. No es difícil darse cuenta de la debilidad que amenaza a tales acciones; aunque, por contra, se hace necesario comprender las innovaciones sociales y políticas que portan en su interior, por limitadas y escasas que parezcan o, como a menudo sucede, estén dirigidas por grupos ajenos o exteriores a ellas.

LOS BEURS

A partir del momento en que los inmigrantes, llegados sobre todo del Magreb, dejaron de ser considerados trabajadores y en el que Francia comienza, en 1974, a limitar la inmigración y a cerrar sus fronteras, estos inmigrados (y en especial los de segunda generación, los hijos nacidos en Francia) conocieron un proceso de integración bastante rápido, aunque chocaron no obstante con el rechazo de importantes segmentos de la población, que rebasaba ciertamente el número de simpatizantes con que contaba el Frente Nacional. Teniendo en cuenta esta situación, se podía prever la formación de algún tipo de movimiento social que ligara la defensa de la identidad cultural, étnica o religiosa de la minoría conformada por los inmigrantes con la lucha contra la xenofobia y el racismo, llevada a cabo en nombre de los derechos (culturales) del ser humano.

Tal movimiento se formó en efecto, aunque se descompuso con bastante rapidez para dejar paso a otras movilizaciones más puntuales, al mismo tiempo políticas y mediáticas, contra el Frente Nacional. Repasemos los principales acontecimientos. A poco de los incidentes, a menudo violentos, acaecidos en Minguettes, en uno de los suburbios de la ciudad

escepticismo

de Vénissieux, se origina un movimiento de *beurs*, los jóvenes franco-argelinos que suelen vivir en los barrios más conflictivos de las grandes urbes. Poco después del atentado contra Toumi Djadja, presidente de SOS-Avenir Minguettes, la idea de una marcha contra el racismo y la desigualdad, que contaba con el decidido apoyo de un sacerdote, Christian Delorme, triunfa sobre el inicial escepticismo que en principio había suscitado y reúne en París a más de 100.000 manifestantes, apoyados por numerosas personalidades y en especial políticos, que fueron recibidos por el presidente Mitterrand (que les iba a procurar cartas de residencia con validez de diez años). Alrededor de este núcleo central se organiza SOS-Racismo, fundada en concreto por Julien Dray y Harlem Désir, que se expresa en términos de fraternidad («No toques a mi amigo») y de reconocimiento al movimiento *beur* (la pequeña mano amarilla del logotipo de la organización era una «mano de Fatma»). SOS-Racismo emprendió una reflexión colectiva que, en los primeros momentos, se orienta hacia el reconocimiento de la identidad cultural de los inmigrantes, mediante la apelación a la necesaria apertura de un anquilosado espíritu republicano que, en general, se mostraba hostil hacia las minorías.

Sin embargo, muy rápidamente la situación se invierte. La mayor parte de la izquierda, así como toda la derecha en bloque, se sentían intimidados por el islamismo militante y agresivo que se estaba desarrollando en el mundo y por la amenaza que éste podía representar para las libertades públicas. Este cambio de dirección quedó manifiesto en el momento del incidente de los «velos». Aunque la mayor parte de las muchachas que llevaban el *hidjab* en la escuela deseaban integrarse en la red educativa y en la sociedad moderna sin que eso supusiera necesariamente la ruptura con su identidad original —tal como demostraron claramente Françoise Gaspard y Farhad Khosrokhavar, que se entrevistaron con ellas— y que el ministro de Educación, Lionel Jospin, y el Consejo de Estado adoptaran actitudes tolerantes, algunos intelectuales, sindicalistas y personalidades políticas expresaron su malestar en relación con algo que les parecía incompatible con el espíritu republicano y laico.

SOS-Racismo, atacado ahora por el apoyo que había prestado a los *beurs*, se desdijo progresivamente, orientándose hacia la lucha *contra* el racismo, que sustituyó a las iniciales movilizaciones *a favor* de los *beurs*. Con rapidez, las acciones de éstos cayeron en el olvido y algunos de sus líderes, decepcionados, se refugiaron en la religión, y otros en la violencia. Desde entonces, la lucha contra el Frente Nacional, partido que no

ha dejado de crecer durante estos años hasta alcanzar el 15% del electorado y que ha dividido a la derecha, no ha dejado de imponer su lógica, convirtiendo en imposible el reconocimiento de las identidades culturales. Mientras las asociaciones de inmigrantes desfilaban por París en favor de la causa kurda o kabila, en nombre de cierto republicanismo cada vez más restrictivo se organizaba la lucha contra el Frente Nacional que, por su parte, se aprovecha del miedo y del rechazo expresado hacia los extranjeros (rechazo suscitado por el aumento del paro y por la desestructuración social de los suburbios del extrarradio). Esta evolución se produjo de manera tan rápida y compleja que el recuerdo de la marcha de los *beurs* de 1983 desapareció casi por completo, y los espíritus más liberales se consolaron observando que, una vez más, la sociedad francesa parecía ser capaz de absorber nuevas olas de inmigrantes tras medio siglo de agitaciones. Sin embargo, ya se veía progresar la reislamización de los jóvenes de origen árabe o africano.

Se pueden comprender las razones políticas por las cuales el miedo al terrorismo islámico y la denuncia del Frente Nacional pasaron a ocupar el centro de interés. Pero lo que ha quedado en el camino es un posible actor social y cultural en formación, apeado de la ruta hacia su consolidación, y una Francia que, por miedo al multiculturalismo, se ha permitido obliterar el reconocimiento de los derechos culturales de los inmigrantes y de otras minorías. Nuestro país había sido el primero en Europa en proclamar los Derechos del Hombre, pese a reconocer los derechos sociales de los trabajadores con retraso; pero ha sido muy lento en reconocer los derechos culturales, a pesar de las actuaciones positivas que, en ese sentido, desarrollan algunos defensores declarados de la laicidad, como la Liga de la enseñanza. *

CONTRA EL SIDA

El balance se muestra más positivo en este ámbito, porque las acciones se vincularon desde el principio al reconocimiento público de los homosexuales en tanto que agentes sociales y políticos. Un éxito tanto más notable por cuanto, como ha puesto de manifiesto Frédéric Martel, los representantes de los homosexuales, desde el FHAR o periódicos del tipo *Gay Pied* hasta los comerciantes ligados al mundo *gay*, recusaron durante mucho tiempo la idea de movilizaciones con carácter propiamente *

apeado
obliterar

homosexual contra el sida, y ello a causa del miedo, muy republicano por otra parte, a señalarse a sí mismos como «colectivo problemático». No fue, finalmente, hasta el momento en que se reconoció la necesidad de alguna política de prevención que exigiera la participación activa de los grupos sociales más concernidos —homosexuales, drogadictos, receptores habituales de sangre— cuando hizo aparición cierta corriente de conciencia de colectivo, y ello gracias en especial a Aides, asociación creada por Daniel Defert. Sus actividades, orientadas hacia la consecución de objetivos concretos, se revelarían eficaces: prevención, pero sobre todo ayuda a los enfermos, y lucha contra la discriminación y contra las reticencias por parte del mismo cuerpo médico. Únicamente las limitaciones que la propia organización se impuso le impidieron convertirse en instrumento de la afirmación homosexual, un objetivo en relación al cual se expresó siempre con reservas.

Esta afirmación homosexual se operará a la vez bajo los efectos de las estrategias más agresivas de Act Up, especialmente difundidas por los medios de comunicación, y a través de espectaculares acciones y manifestaciones de carácter más festivo y comercial. Las actividades de Act Up, tanto en Francia como en los Estados Unidos, es un claro ejemplo de vanguardismo, cuyo espíritu de provocación encontraría amplio apoyo, si bien éste contribuyó algo menos que la actuación más instrumentalizada de Aides a forjar cierta conciencia de actores colectivos. Por otra parte, los homosexuales obtendrían finalmente su reconocimiento en tanto que *guys* por el hecho de que el conjunto de la ciudadanía se sintió acongojada al ver morir a tantos jóvenes, y también a causa del debilitamiento general de las tradicionales normas morales. El *Gay Pride* fue durante algunos años el principal órgano de expresión de esta conciencia homosexual que ahora se reivindicaba, antes de decidirse por una serie de operaciones con carácter más comercial.

El resultado final parece positivo. Los homosexuales han logrado ciertos derechos —aunque continúan luchando para obtener otros— y han adquirido cierta conciencia cultural como colectivo. Pero existen diversos elementos de ese movimiento que permanecen aislados entre sí: Aides actúa con firmeza para alcanzar esa necesaria conciencia de sí mismos; Act Up, sobre todo, combate a sus adversarios, aunque sus acciones menos organizadas (pero muy apoyadas desde el exterior, en particular por el Partido Socialista) han logrado cierto reconocimiento de los derechos culturales de los homosexuales. Se trata de un éxito a me-

dias que puede juzgarse como satisfactorio, puesto que los *guys* y las *lesbianas* buscaban reconocimiento más que la transformación del conjunto de la sociedad.

Nos aproximamos sin embargo al momento en el que, con el nacimiento del PACS —que concede cierto reconocimiento a las parejas homosexuales, en particular en materia de herencia— se produce un debate que pone sobre el tapete la discusión sobre algunas actitudes fundamentales (¿hay que reconocer a las parejas homosexuales el derecho a adoptar niños?), como antes se hiciera con temas como la contracepción y la interrupción del embarazo. Recuerdo estos anteriores debates porque tienen en común con éste que, la mayoría de quienes defendían el derecho al aborto, por ejemplo, estaban convencidos de que en principio era necesario hacer lo posible para evitarlo. Pero en el caso de los y las homosexuales la discusión se planteaba en términos más profundos: ¿no supone esta alteración del fundamento de nuestra concepción sobre la personalidad el ir contra la pareja compuesta por el padre y la madre, separar por completo al niño de la presencia complementaria de un padre o de una madre? Y no a causa de ningún suceso irremediable, sino por mera elección deliberada.

Habría que partir aquí de otro principio, de ése que afirma la necesidad de la dualidad hombre/mujer en el plano de las instituciones políticas, es decir, en el espacio de expresión de la soberanía popular. Según esta concepción, no existe manifestación del género humano más general que la dualidad formada por el hombre y la mujer. Tal posición impone la distinción de los hombres y de las mujeres en tanto que seres sexuales, iguales en lo relativo a los derechos humanos pero diferentes por naturaleza. En razón de ser iguales en cuanto a disfrute de derechos, y al mismo tiempo diferentes, hombres y mujeres disponen del derecho a decidir la construcción de sus papeles sexuales, y en especial sus relaciones de parentesco, admitiéndose que la complementariedad del padre y de la madre se debe seguir considerando como una de las condiciones esenciales de la formación de la personalidad. Las concepciones minoritarias de la familia pueden acabar generando situaciones desviadas, si bien quizás también refuercen el parentesco, la presencia activa de parientes alrededor del niño.

Lo que es cierto es que el niño de una pareja de homosexuales se arriesga a tropezar con determinadas actitudes de rechazo. Pero esto sería más bien un argumento a favor del reconocimiento del matrimonio

homosexual: este matrimonio significaría un golpe contra la perjudicial discriminación del niño. Pero se puede objetar a tal proposición que los homosexuales que viven vinculados por uniones de hecho, reguladas por el PACS, estarían en la misma situación que gran número de parejas heterosexuales, ya que si algo se le puede reprochar al PACS es que resulta demasiado semejante a un concubinato, ahora reconocido legalmente. El caso de los homosexuales debe, pues, tener carácter distinto, pues de lo que se trata es de respetar la igualdad de sus derechos; por eso el matrimonio homosexual ha de ser reconocido del mismo modo que el de los heterosexuales.

La importancia de esta polémica, que Francia se plantea con cierta distancia, proviene del hecho de mostrar que, en el campo político, las cuestiones relativas a la cultura y a la personalidad ocupan lugares de privilegio, como confirman, en alguna medida, los movimientos de defensa de los «sin».)

LOS «SIN»

Cuando cierto número de «sin-papeles», de entre los cuales algunos se encontraban en huelga de hambre, son brutalmente perseguidos y agredidos en el interior de una iglesia en la que habían buscado refugio, cuando las ocupaciones espectaculares de locales vacíos llaman la atención de los medios de comunicación y del público sobre el elevado número de gente «sin-hogar», o cuando los parados ocupan los locales de la ANPE o de ASSEDIC, se hace evidente que se asiste a una serie de luchas de gran relevancia. Gracias a los medios de comunicación, estas luchas han movilizado a gran parte de la opinión pública. Mas, ¿estos movimientos son la vanguardia de nuevos actores sociales o, por el contrario, simbolizan el signo de la actual crisis social?

La idea que defenderemos aquí es que un verdadero movimiento social se encuentra actualmente en vías de formación, aunque se encuentra de continuo amenazado por ciertas ideologías periclitadas o por el radicalismo que suele conllevar el ímpetu contestatario.

Ningún acontecimiento posee una significación unívoca, como se aprende en las escuelas. Basta en principio con recordar los comentarios efectuados diez o veinte años después de Mayo del 68, tan diferentes de los que solemos escuchar hoy día, para percatarse de cuán absurdo re-

sulta pensar que los acontecimientos hablan por sí mismos. Pero si el análisis histórico o sociológico no se reduce más que a la mera descripción de los sucesos y a hacer surgir *el* sentido general de los mismos, esto no supone ninguna razón para renunciar a buscar la significación principal, la más clarificadora, o el sentido que se trasluce en una nueva acción colectiva.

Generalmente, en este tipo de movimientos se pueden advertir dos sentidos principales. Según dicen algunos, la globalización triunfa como antes había triunfado el capitalismo financiero de comienzos de siglo, y frente a la fuerza desplegada por este capitalismo la protesta radical y la acción revolucionaria se oponen a la destrucción de la capacidad de la sociedad para actuar por sí misma, es decir, a la destrucción de la democracia, que comienza con la liquidación de los derechos sociales tan difícilmente alcanzados a lo largo de este siglo. Participa de esta misma sensibilidad la idea de que solamente el Estado y una política voluntarista son susceptibles de contener la oleada liberal.

Otros analistas afirman en primer lugar que existen posibilidades de frenar el triunfo del mercado, y que las acciones políticas no son del todo inútiles; en segundo lugar, que no es la acción del Estado, sino el despertar de los movimientos sociales, lo que puede conducir a la transformación de ciertas situaciones que, nos parece, no admiten el menor cambio.

Por un lado, pues, tenemos una postura que cree en la globalización, en su carácter inevitable, y que lucha desesperadamente en su contra apelando al Estado republicano; por el otro, existe otra opción, la de quienes no creen en la completa interdependencia de las diferentes transformaciones de la economía y de la sociedad, y que piensa, por consiguiente, que todavía existe terreno para la acción política, aunque a condición de que nuestras sociedades escapen a la vez tanto de la ilusión neoliberal como del conservadurismo estatista que parece su eco.

En el primer capítulo de este libro, en el que se ha criticado la ideología de la globalización, ya he dado a entender que personalmente me sitúo entre quienes defienden la segunda opción.

Existen diferencias, nada difíciles de advertir, entre los pesimistas que invitan a la sublevación desesperada sirviéndose de la cólera y de la miseria, y aquellos otros a los que se llama reformadores, porque se niegan a afirmar que «no es posible hacer nada» y buscan, por el contrario, poner de relieve que aún hay espacios para la actuación, para la reforma.

y para la construcción de nuevas formas de orden social y político de la economía.

La posibilidad de aparición de movimientos sociales parece en general remota a quienes describen la situación de manera puramente negativa, al igual que hacen los «sin» (hogar, trabajo o papeles). Sin embargo ahí, en especial entre los «sin-papeles», es donde se ha creado lo que da sensación de ser lo más similar a un movimiento social; pero también es ahí donde el control del movimiento por parte de ciertas vanguardias ideológicas o políticas pesa como una amenaza constante. *importante*

LOS «SIN-HOGAR»

La crisis de vivienda, como la de empleo, tiene su origen en causas tan generales que parece no poder ser combatida más que por acciones políticas y sindicales de gran envergadura. Ahora bien, estas acciones no acaban de tomar forma. Por lo mismo que en 1954 el abad Pierre intervino directamente, al sentirse concernido, en el problema de vivienda por medio de una serie de acciones impactantes transmitidas por la televisión, Derecho a vivienda fue creado en 1990 tomando como referencia directa aquel invierno de 1954. Este grupo organizó una serie de ocupaciones de inmuebles o de lugares públicos, ganándose las simpatías de una parte de la ciudadanía, y se fue haciendo progresivamente más mediática gracias a la participación de diversas personalidades y de artistas en sus iniciativas. En el centro de su actuación colocó la afirmación del derecho a una vivienda reconocido por la ley Besson, votada durante el gobierno Rocard. Pero entre la presión a la autoridad y la movilización de los militantes, la síntesis fue y sigue siendo difícil, y tras el éxito que conllevó la ocupación del inmueble en la *rue du Dragon*, seguido por la transformación del vecino *cours Désir* en espacio de solidaridad, de creación y de intercambio de conocimientos, la disociación de esos dos elementos se fue agravando. La escisión de *Droits devant!* (DD!), algunos de cuyos militantes crearon DAL, es reflejo de esta situación.

La presión de las realidades económicas y las intervenciones políticas y administrativas resulta tan formidable que este movimiento, a despecho de su gran popularidad en determinados momentos, no ha sido llamado a ejercer una gran influencia real sobre las políticas de vivienda ni a la formación de nuevos actores sociales. Todo lo más, represen-

ta la base de partida de distintos movimientos de «sin», es decir, de protesta contra la miseria y la exclusión, asuntos que por algún tiempo han interesado a la opinión pública pero que nunca demuestran ser carburante suficiente para alimentar ningún movimiento. Tales acciones han revelado sobre todo las dificultades existentes si de lo que se trata es de traspasar el horizonte de las operaciones mediáticas y descubrir nuevos campos para la acción colectiva. Sea como sea, la reivindicación del derecho a vivienda, incluso si su formulación ha pecado de demasiado general, muestra en qué dirección puede llegar a constituirse un nuevo actor social. *importante*

LOS MOVIMIENTOS DE PARADOS

Las acciones organizadas de parados no son ninguna novedad. En Francia, en el período de entreguerras, la CGTU, de inspiración comunista, contaba con numerosos afiliados (aproximadamente un 10 %), y una gran marcha de parados, que fue de Lille a París, pudo reunir a 60.000 participantes en el momento álgido de la crisis económica de los años treinta. Y más recientemente, Maurice Pagar ha intentado crear un sindicato de parados.

Tales precedentes nos ayudan a situar el tema central: el de las relaciones entre la acción de los parados y el sindicalismo. Encerrado en sí mismo, el movimiento de los parados oscila entre las actuaciones de urgencia, en unas ocasiones violentas y en otras de carácter humanitario, y el debate planteado en términos demasiado generales sobre la reducción de horas de trabajo y el modo en que éste habría de ser repartido.

La principal organización, AC! (Agir ensemble contre le chômage!; «¡Acción conjunta contra el paro!»), ha estado desde sus comienzos vinculada a la acción sindical, pese a dar muestras de gran autonomía en relación con su principal compañera, la CGT, que también ha adoptado importantes iniciativas. Del mismo modo, Claire Villiers, que pasara de la CFDT a Sud-PTT, o Christophe Aguiton, llegado de la LCR y activo en el mismo sindicato, han buscado constantemente combinar acciones independientes, en particular las marchas en Francia (durante 1994) y más tarde en Europa, con iniciativas diseñadas en común con las organizaciones sindicales, en especial en Bouches-du-Rhône. Pero en AC! surgieron pronto fuertes divergencias con unos sindicatos que por encima

de todo querían defender el empleo, en concreto cuando la organización pretendió hablar en representación de los jóvenes parados cuyo futuro estaba en entredicho y que expresaban sus dudas sobre la actual sociedad del trabajo.

Esto condujo al movimiento a cambiar radicalmente de discurso, en especial durante la campaña electoral de 1995, y a emprender por su cuenta las reivindicaciones de todas las clases de excluidos: «sin-hogar», «sin-papeles», etc. Estas iniciativas prolongaban, utilizando medios más radicales, el tema más genérico de la lucha contra la fractura social y en favor de nuevas maneras de comprender la ciudadanía, tema que había encontrado suficiente eco en la población. Ésta había acogido en principio favorablemente el movimiento de ocupaciones del ASSEDIC y de los despachos de ANPE a finales de 1997. Pero el gobierno volvió a tomar en seguida cartas en el asunto, obligando a evacuar los locales ocupados y al mismo tiempo preparando una ley en contra de la exclusión. ¿De qué manera un movimiento que reunía a varios miles de militantes y de parados cuyas situaciones, actitudes y objetivos eran tan diversos, se podía sostener sin desmembrarse?

Este movimiento cuenta con dos aspectos diferentes. En primer lugar, ha contribuido a dotar de nuevos contenidos la acción reivindicativa, poniendo en lugar bien visible la noción de derechos, pero sobre todo ha intentado transformar a las víctimas en actores de la vida social, demostrando que los parados, como antes de ellos los *beurs*, eran capaces de organizar una acción, de hacer oír su voz, incluso en el caso de que sus palabras fueran difícilmente comprendidas por los trabajadores sindicados. Ningún movimiento se ha encontrado en una situación más difícil que éste para hacer surgir un nuevo actor colectivo, lo que dice mucho en favor de su importancia, pero lo que explica también la fragilidad que le ha conducido a emprender acciones de carácter puramente mediático, como la ocupación de la Escuela Normal Superior a iniciativa de algunos alumnos, acciones que han proporcionado al movimiento una imagen negativa. Pero estas desviaciones, que han contribuido a reforzar la posición del gobierno cuando éste hizo evacuar los locales ocupados, no deberían hacernos olvidar que este movimiento ha propuesto innovaciones en el ámbito de la formación de nuevos actores sociales y que su actuación se puede volver a reemprender.

EL MOVIMIENTO DE LOS «SIN-PAPELES»

Mientras los «sin-techo» y los «sin-trabajo» han agotado sus fuerzas con protestas en contra de situaciones que no admiten fácilmente cambios, puesto que cuestionan a la misma organización de la sociedad económica, el movimiento de los «sin-papeles», que podría haber sido más marginal, se ha transformado por sí mismo en movimiento social. Ha sabido constituirse como actor autónomo; su adversario, el gobierno, se ha declarado como tal; por último, ha encontrado una resonancia considerable, en ciertos momentos incluso mayoritaria, en la opinión pública, porque aquí la defensa de los derechos de unos pocos se ha asociado a la defensa de los derechos de todos, en especial cuando el artículo 1º del proyecto de ley Debré fue contemplado por mucha gente como un atentado a las libertades personales.

Esta fuerza y esta autonomía del movimiento explican que en ningún momento haya estado dominado por intervenciones dirigidas desde el exterior. El grupo de mediadores se ha contentado con la posibilidad de intentar hacer posibles determinadas regulaciones que hasta entonces habían sido rechazadas o muy limitadas, y en ningún instante ha pretendido dirigir el movimiento o imponerle determinado sentido. Éste se ha constituido como agente autónomo, en parte porque se ha apoyado sobre una organización colectiva más antigua, la de los *Maliens* al comienzo o la de los *Chinos de Wenzhou* en fases posteriores. Finalmente, han sido los senegaleses, Ababacar Diop y Madjiguène Sissé, los principales dirigentes y figuras emblemáticas, y entre ellos se ha entablado el debate interno más relevante del movimiento.

Este movimiento, desde la ocupación de la iglesia de Saint-Ambroise, seguida de la detención de Ariane Mnouchkine en el teatro de la Cartoucherie, y sobre todo después de la expulsión violenta de los huelguistas de hambre de la iglesia de Saint-Bernard, ha movilizado en su favor una fuerte solidaridad, que por otra parte se ha visto alimentada por cierto sentimiento político más dinámico: el miedo al Frente Nacional y el rechazo activo de sus tesis racistas. En realidad, se trató de una serie de acciones independientes en defensa de los derechos de los «sin-papeles» a vivir en Francia con absoluta normalidad lo que se vio luego transformado en un vasto movimiento que, de repente, ocupó un lugar altamente significativo en la vida política, en especial al poco de la manifestación en Estrasburgo contra el congreso del Frente Nacional.

et al
ONG
Falacia.

Este movimiento no ha sido «recuperado». Si bien se ha visto apoyado por grupos de extrema izquierda, por asociaciones humanitarias o por determinadas personalidades, no ha perdido el control de sus actos y no se ha agotado en una serie de operaciones espectaculares o en gestos puramente mediáticos. ~~Su intención no es la transformación de la sociedad; su único objetivo consiste en la regularización de la situación legal de los «sin-papeles».~~ Este mismo nombre, que ha reemplazado al de clandestinos, nos indica a las claras que su voluntad de integración social no tiene nada de revolucionaria, pero ha suscitado un gesto reflejo de miedo en el gobierno y en un segmento de la opinión pública que temen la presión migratoria originada por la situación económica mundial. Más concretamente, el encuentro del movimiento de los «sin-papeles» y del levantamiento ciudadano contra la ley Debré ha otorgado carta de naturaleza a ciertos actores que podrían haber quedado en posiciones tan marginadas como los «sin-hogar». Sería por entonces cuando fueron llamados a jugar un papel en la nueva reestructuración del espacio social e incluso en el fracaso de la derecha durante las elecciones legislativas de 1997.

Ciertamente, las imágenes difundidas por los medios de comunicación favorecieron la extensión del movimiento. Pero sería injusto pretender que las acciones emprendidas por los «sin-papeles» se hayan visto orientadas principalmente por los *media*. La actividad autónoma de los interesados y la invocación a los principios fundamentales de la República han sido desde siempre los resortes principales de la acción colectiva.

Se objetará que, como en el caso de los *beurs*, una acción en principio limitada se ha transformado en acción política tras recibir el apoyo masivo de gente para quien la lucha contra el Frente Nacional, e incluso la defensa de sus propios derechos personales, era más importante que la mera solidaridad con los «sin-papeles». Tal objeción no es de recibo, puesto que si el movimiento de los «sin-papeles» se ha transmutado en lucha contra de las leyes Pasqua y el proyecto de ley Debré (que, necesario es recordarlo, manifestaba la influencia del Frente Nacional sobre la derecha en el poder), y si el movimiento ha tenido influencias políticas impensables en otros similares hasta la fecha, es porque su verdadera razón de ser ha seguido siendo la defensa de ciertos derechos muy precisos y la búsqueda de soluciones concretas.

Todas las huelgas de hambre que han caracterizado su actuación confirman que el compromiso personal ocupa en él un lugar esencial.

quever movimiento social suscita el sacrificio y la acción ejemplar; pero aquí están puestos al servicio de los derechos de los individuos, y por lo tanto han tenido una orientación moral más que política. Y la política, que estuvo durante tanto tiempo ligada a la economía, se ha visto transformada a causa de la introducción de las exigencias morales en la esfera pública.

Cuando las acciones se establecen sobre la base de la privación (de trabajo, de vivienda, de papeles, etc.) y no sobre el reconocimiento de alguna función o de alguna cualificación, la creación de actores sociales y la denuncia política e ideológica de un orden injusto amenazan siempre con ir por su lado. Estos dos componentes habían caminado unidos en los movimientos sociales de la época industrial por efecto de un principio universalista de referencia, el progreso por el concurso de la razón. Pero, puesto que ha dejado de existir semejante principio «objetivo», portador dentro de sí de toda una filosofía de la historia, se afirma la recurrencia al concepto de derecho: los Derechos del Hombre tal como fueron definidos en 1789, pero también, y de manera más concreta, el derecho al trabajo, a una vivienda y a la seguridad. Actualmente haría falta añadir los derechos culturales, amenazados por el espíritu jacobino cuando éste rechaza la diversidad y pretende la imposición de su norma.

Ahora bien, justamente la referencia a los derechos de los individuos, a los derechos de las minorías tanto como a los de la mayoría, es lo que confiere a estos nuevos movimientos sociales una importancia tan grande, ya que aportan la contestación al orden dominante, y más todavía, la liberación de las víctimas que alcanzan, por lo menos en alguna medida, a transformarse en actores de los cambios sociales. A la inversa, existe un peligro real, e incluso creciente, de ver que esta acción «afirmativa» la desbordan y manipulan ideologías que tienen como único contenido la denuncia del orden establecido sin creer posible la formación de nuevos actores.

Hoy esta subordinación de la protesta social a la acción política e ideológica no dispone del mismo efecto dinámico que tenía cuando los partidos comunistas apoyaban las luchas obreras y anticolonialistas, si bien utilizándolas para la construcción de su propio proyecto político totalitario. En todo caso, nos recuerda el caso de las guerrillas latinoamericanas de los últimos treinta años. Éstas, en efecto, no mantenían más que relaciones indirectas con las poblaciones rurales en nombre de las cuales tomaban las armas, sin olvidar que sus bases provenían de los jó-

venas de las clases medias urbanas radicalizadas que se consideraban a sí mismas la vanguardia de la liberación de los pueblos; eso ha conducido a trágicas situaciones sin salida. Ha sido necesario el hundimiento de los sistemas soviético y cubano para que en América Latina se originen movimientos indígenas de distinto signo, como los de Rigoberta Menchú en Guatemala o de los zapatistas del subcomandante Marcos en México, o también el de los kataristas bolivianos y el de los indios de Ecuador. Todos esos movimientos han renunciado a las políticas de ruptura y se basan en la afirmación de alguna identidad cultural, adoptando al mismo tiempo líneas políticas activamente democráticas.

delinencia
Francia se ha sentido siempre atraída por los extremismos políticos, en detrimento de la formación de nuevos actores sociales. Se trata de una tendencia característica que no tiene fecha de hoy y que no se circunscribe al Hexágono, puesto que ya fue el trasunto de la oposición entre los bolcheviques y sus adversarios mencheviques que dominaron los sindicatos en Rusia hasta el año 1913. Durante la década de los setenta los movimientos que por entonces yo denominé «nuevos movimientos sociales» se agotaron precisamente porque se presentaban como de inspiración leninista. Se trataba de vino nuevo en odres viejos, que pronto se convertiría en vinagre. Ahora no debería suceder lo mismo: el *espíritu* de Mayo del 68 (y no su vocabulario político) renace con mayores energías, desembarazado ya del viejo vocabulario y de las formas de pensar arcaicas, en particular en las acciones de los «sin-papeles» tanto como en las de Aides, que me parecen las más cargadas de contestación creadora y liberadora.

La reivindicación de ciertos derechos, según cada uno los entiende, viene a ser un signo democrático que se opone a la voluntad de «tomar el poder» o de romper completamente con las instituciones. El colectivo de Saint-Bernard y quienes lo han ayudado ponen dique al peligroso proyecto de ley Debré mediante la apelación al derecho de los individuos a vivir conforme a sus deseos, a sus necesidades y a su cultura. Ahí nunca hubo intención de hacerse con el poder o iniciar la revolución.]

También es mérito de estos movimientos haber reducido la distancia que separa a quienes se llaman republicanos de los que se sienten antes que nada demócratas. Pues el reconocimiento de los derechos culturales presupone el apoyo de unas instituciones capaces de combinar la unidad de la nación con la diversidad de los intereses, de los valores y de las herencias. En Francia, como en todo el mundo occidental e incluso más

allá, se ve retroceder al mismo tiempo la confianza en los mercados y en las políticas comunitaristas. Se habla una vez más de nación, de ciudadanía y de derechos sociales y culturales. Estos términos no se oponen entre sí, sino que son complementarios. La ciudadanía ya no puede volver a consistir en la fusión de todas las identidades en una sola conciencia nacional unificadora, para lo cual se recurre a la represión cuando se cree oportuno; más bien se ha de fundamentar en el incremento de la diversidad, del debate y de la representación política en el interior de una colectividad que se propone como principal objetivo la consolidación de los derechos de cada uno antes que su subordinación a la unidad y a intereses nacionales omnipresentes e intolerantes.]

Pero estos movimientos demuestran por contraste la degradación del sector asociativo, cuyas llamadas a la solidaridad y a la igualdad, aunque basados en sentimientos sinceros y generosos, son cada vez más aprovechadas por un aparato de Estado que busca en primer lugar aligerar sus cargas confiando parte de sus tareas a personas voluntaristas. El movimiento asociativo se convierte entonces en la extensión de una administración, sobre todo local, más preocupada por el clientelismo político y las acciones espectaculares que por la transformación de las víctimas en actores sociales.]

LOS MOVIMIENTOS CULTURALES

No habrá ningún movimiento social con la suficiente entidad en el conjunto de la sociedad y en la política hasta que la defensa de las víctimas esté claramente vinculada con las nuevas orientaciones culturales y sociales. Una confluencia de intereses semejante está a punto de producirse, y constituye la mayor respuesta a la dominación capitalista. Vale la pena estudiarla con atención.]

La modernidad occidental se consiguió gracias a la concentración de medios de actuación en manos de cierta élite que se definía a sí misma como racional, y a que ésta afirmó su papel dirigente en contra del resto de fuerzas supuestamente irracionales. Una vez alcanzada, proporcionó a Occidente la supremacía durante siglos, aunque al precio de la escisión de la sociedad, de su polarización en todos los aspectos: empresarios autoproclamados racionales contra trabajadores considerados como rutinarios o perezosos; colonizadores portadores de la Ilustración contra

embrutecidos «salvajes» que rechazaban las ventajas del progreso; adultos que saben contenerse contra niños que ceden a sus instintos; hombres racionales contra mujeres juzgadas irracionales, traducéndose este último fenómeno en el dominio de lo público masculino sobre lo privado femenino. »

Ahora bien, desde hace ya mucho tiempo, y en la actualidad más todavía que antaño, se asiste a la superación de estas polarizaciones, de estas oposiciones establecidas entre dominadores y dominados. Ya he hablado antes de recomposición del mundo. El movimiento obrero supuso la primera manifestación: el desarrollo económico no se redujo a la mera racionalización autoritaria y a la acumulación de los recursos; ha exigido igualmente la participación de cada vez un mayor número de individuos en la producción, consumo y gestión de la sociedad moderna. Al poco se vio a los movimientos de liberación de las colonias rechazar un poder que no sólo se apoyaba en la fuerza, sino también en la arrogante confianza de unos colonizadores embutidos en su papel modernizador.

Durante la segunda mitad del siglo XX dos grandes formas de recomposición del mundo se han añadido a las anteriores. La primera es el pensamiento y la acción ecologista, que han sustituido el poder que el hombre ejerce sobre la naturaleza por la responsabilidad de éste en relación con un medio ambiente natural y cultural amenazado y explotado por las intervenciones tecnológicas y económicas de la sociedad, una sociedad subida al carro de la modernización económica. Que este ecologismo haya tomado en ocasiones peligrosas formas antihumanistas, tal como ha señalado Luc Ferry, no debe hacer cuestionar el vuelco profundo de perspectivas que ha operado. »

Más importante todavía es el movimiento feminista, puesto que la pareja complementaria hombre/mujer ha dominado siempre, y bajo formas diversas, nuestra cultura. Al principio, las mujeres exigían igualdad de derechos, el fin de la discriminación y el derecho a disponer libremente de su cuerpo. En gran parte estas exigencias fueron obtenidas, en nuestro país, por medio de la promulgación de ciertas leyes, aunque pese a ello, no desaparecieron de hecho todas las desigualdades, como demasiado pronto se había querido anunciar. En especial a causa de las resistencias del antiguo modelo jerárquico, pero también porque en el tema de la igualdad se descubre un sesgo peligroso: propone a las mujeres ser iguales que los hombres, el poder acceder al género de vida, de poder y de autoridad que disfrutaban los hombres. Y parte de los fracasos

qualitarismo provienen de que muchas mujeres han buscado géneros de vida, diferentes a los que ostentan los hombres más comprometidos con la carrera por la competitividad y el poder; en pocas palabras, han intentado dar un contenido a la identidad femenina. Pero esta búsqueda ha ido a parar a un callejón sin salida, como todos los movimientos basados en lo identitario, y a veces ha tomado la forma de cierta automarginación que las lesbianas norteamericanas más radicales, las del movimiento Queer, han sabido denunciar oportunamente. Esto ha desembocado, más recientemente, en un movimiento mucho más significativo, que ataca los mismos principios de nuestra cultura polarizada, establecida sobre la desigualdad.

El movimiento por la paridad, cuyo apoyo por la opinión pública se puede considerar todo un éxito y que probablemente conducirá en Francia a reformas de carácter constitucional, va dirigido hacia una política de cuotas que busca restablecer la equidad dentro de una situación de desigualdad. Éste afirma que el hombre para el que fueron instituidos los Derechos del Hombre sólo existe bajo la forma dual hombre/mujer y que, por lo tanto, el pretendido universalismo de los derechos —que se ha de defender a cualquier precio— es inseparable del reconocimiento de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Ellas quieren ser al mismo tiempo iguales y diferentes. De este modo el modelo de la modernización occidental se encuentra cuestionado en su componente más esencial, como es la creación de la identidad y la producción de cultura. No se pueden analizar las transformaciones de nuestra sociedad sin introducir la dualidad de las experiencias propias de lo masculino y de lo femenino. Francia ha tardado mucho tiempo en darse cuenta. »

Es necesario añadir que se ha abierto un nuevo frente en la lucha por la recomposición del mundo. Hoy se habla de los derechos de los niños y, más allá de los casos de abuso de menores, se oye expresar el deseo, tanto en la escuela como en el seno de la familia, de reforzar la autonomía de los niños y de la capacidad de disfrute propia de su experiencia vital.

Las distancias son todavía importantes entre estos grandes movimientos culturales y las acciones de defensa de las clases sociales más directamente castigadas por la organización económica y social. Sin embargo, y como es sabido, los movimientos sociales han de presuponer, para estar contruidos sólidamente, que la defensa de las víctimas y la transformación de la cultura son asuntos que se tocan. En este punto la

escena política se puede animar de nuevo, mientras que todavía ayer la mayor parte de la sociedad se apartaba de la agitación confusa que percibía en estos movimientos y que tanto la defraudaba. β

Uno de los principales obstáculos para la formación de estos grupos es la intervención de quienes no creen en la existencia posible de actores sociales capaces de definir objetivos positivos. Éstos, ya se sabe, no ven en ellos más que a víctimas que sufren un destino inevitable y que dan testimonio con su sufrimiento de las injusticias del orden social. Esta ideología retrasa la formación de nuevos movimientos sociales, y eso cuando no les dota ella misma de cierto discurso que, piensa, no son capaces de elaborar por sí mismos. Por esta razón requiere ser combatida.

La tarea de reconducir los movimientos de rechazo hacia movimientos de afirmación parece compleja. Se trata, para los excluidos —*beurs* víctimas de la discriminación, «sin-techo», «sin-trabajo», «sin-papeles», enfermos de sida y minusválidos, entre otros— del intento de afirmar sus derechos personales, al mismo tiempo que de combatir los aparatos que dirigen y utilizan en su propio provecho la sociedad de la información y cierta flexibilidad (es decir, cierta precariedad) que nos es presentada como condición indispensable de la competitividad (y por lo tanto del crecimiento).

Lo que comparten estos dos tipos de movimientos es que ambos defienden colectivamente los derechos personales: el derecho al trabajo y a una cierta continuidad laboral tanto como los derechos culturales. Decir que tales referencias a los derechos individuales niegan cualquier posibilidad para la acción colectiva resulta sorprendente en nuestro país, cuyo texto más importante, de entre los inspirados por la Revolución francesa, fue la Declaración de los Derechos del hombre, en la cual se apela no solamente a la soberanía del pueblo sino, aún más, a la defensa de los derechos personales. Precisamente, lo que no es ninguna novedad es la referencia a la libertad de opinión, de reunión o de organización; más bien, la originalidad proviene de la invocación del derecho a una identidad individual, si por ésta se entiende la unidad, de continuo construida y transformada, que engloba a toda experiencia concreta de la vida individual. Que esta defensa en clave «ética» aparezca en numerosas acciones colectivas supone la evidencia de que éste es el sentido que encierran muchos de los movimientos que se desarrollan frente a nosotros. Pero tales acciones colectivas no son posibles más que al abrigo de la protección institucional. Se trata, por tanto, de una acción política y no de un

individualismo abstracto, autista en lo relativo a las relaciones sociales y en concreto a las relaciones de poder.

De ahí la importancia del movimiento de los *beurs* durante los años ochenta y el de los «sin-papeles» durante los noventa. Son ellos los que tienen más fácil el paso de una acción de defensa a otra de afirmación de derechos, de protesta contra las injusticias a un compromiso que podría definirse con el término de orgullo (del mismo modo que se ha hablado de una conciencia orgullosa en el movimiento obrero) en lo que se refiere a los atributos personales y colectivos, ya sean éstos profesionales, lingüísticos, morales o religiosos. Por su parte, el movimiento de los homosexuales no lucha exclusivamente contra la discriminación: representa también cierta concepción gay del lugar de la sexualidad dentro de la sociedad y de la existencia humana. Por último, y pese a que el movimiento puramente defensivo de las feministas ha declinado después de sus victorias legislativas y pese a que la búsqueda de un modo de ser estrictamente femenino sólo ha conducido a la marginación, la acción de las mujeres, incluso cuando ha tomado cuerpo en movimientos de opinión más que en movimientos políticos organizados, se significa como un actor fundamental en la tarea de «recomposición del mundo». Tras el movimiento obrero y los movimientos de liberación nacional, y del mismo modo que éstos, dicho movimiento lucha por la superación de las oposiciones jerarquizadas entre el polo racional masculino, burgués y occidental, y el otro polo irracional femenino, popular e «indígena».

Si la aproximación entre los movimientos de rechazo y los movimientos de afirmación no acabara de producirse, los primeros se agotarían con rapidez por culpa de las divisiones internas y de la facilidad con la que los poderes públicos pueden manipularlos. En conclusión, ¿cómo es posible no ver que a través de estas acciones, a menudo limitadas a breves espacios de tiempo y en su capacidad de movilización, se está operando la formación de nuevos actores sociales? Nadie nos puede asegurar que estos grupos acaben por federarse o que se unan para conformar el equivalente a lo que se dio en llamar el movimiento obrero. Y es que lo que ellos atacan son los problemas ligados a la modernidad capitalista y a la cultura masificada; son las formas principales de poder lo que se cuestiona. Tal vez el gobierno considere que estas acciones tienen carácter minoritario, pero lo más importante no es que sean reconocidas por el Estado y por las fuerzas dominantes de la sociedad, puesto que su labor es imponerse a éstas y transformar en

profundidad la organización de la sociedad y la representación que de ella nos hacemos. J

El reciente movimiento de los liceistas (octubre de 1998), los escolares de secundaria, muestra bien a las claras la transformación de nuestras ideas tradicionales acerca de la escuela y la educación. No ha sido ésta la primera vez: en muchas otras ocasiones los alumnos de los liceos han nutrido con su presencia inquieta las manifestaciones de estudiantes. Pero en este caso el tono es nuevo; quizá porque la organización del movimiento es tan frágil que los discursos que están de acuerdo con las estrategias sindicales clásicas no han tapado inmediatamente la voz de estos alumnos (y alumnas). Ahora bien, también lo que dicen resulta novedoso. Lo que cuestionan, más allá de sus condiciones materiales de trabajo, de seguro mejorables, es su lugar dentro de los liceos. Éstos siguen manteniendo una cultura y una autoridad propiamente colegial, aceptables para quienes creen que la escuela supone el paso previo de un futuro previsible, pero que van contra los individuos que disponen de un porvenir menos asegurado y de aquellos cuya personalidad casa mal con sistemas que exigen la conformidad con las normas antes que la propuesta de nuevas ideas o el mantenimiento de puntos de vista originales. Estos estudiantes desean ser actores sociales no solamente dentro del mundo de la enseñanza que se les inculca, sino también en los cambios que por aquí y por allá asoman, desde el campo de las leyes hasta el de las instituciones. Y dado que tales reivindicaciones no se pueden considerar estrictamente políticas, muchos observadores las han juzgado moderadas en exceso. Se oponen a ellas quienes querrían cambiar la sociedad a su antojo y participar más directamente en esos cambios. Eso implica cierta contradicción, puesto que no se trata de que los alumnos impongan su imagen de la sociedad, sino de que surja la nueva representación que ellos se hacen tanto de sí mismos como de su ambiente social. La formación de sus proyectos personales independientes, sus relaciones con los amigos de orígenes bien diversos, la exigencia de una comunicación más directa con los enseñantes, su acercamiento a determinados principios morales —la dignidad del otro y su libertad— conducen al análisis clásico de la escuela como unidad administrativa y económica. Su proyecto se puede llamar propiamente democrático, ya que ha sido elaborado por los propios interesados, cuyos discursos están a salvo de cualquier influencia externa y manifiestan una profunda experiencia que hasta entonces permanecía cubierta por ciertos discursos, ya

fueran éstos mediáticos o de cualquier otro tipo, que alertan sobre una juventud encerrada en su narcisismo y satisfecha con su particular cultura. Muchos de estos estudiantes han sabido combinar el respeto a su propia diferencia con el acercamiento a la lengua francesa, instrumento indispensable de comunicación y de integración. J

La espontaneidad y la debilidad de la organización de este movimiento lo han llevado con demasiada rapidez a efectuar una serie de reivindicaciones cuantitativas que enmascaran su sentido. Pero éste ya había alcanzado su principal objetivo. La opinión pública, si hemos de juzgar por el apoyo que le ha demostrado, ha dado a entender que ya estaba comprometida con la revisión en profundidad de las condiciones establecidas para la enseñanza, que no debe estar centrada solamente en el valor del conocimiento, al cual los profesores han de lograr que accedan los alumnos, o en las mismas normas de la sociedad escolar. La enseñanza se debe poner al servicio de la libertad creadora de los estudiantes y tomar en consideración su situación y su personalidad concreta, a falta de ésto la búsqueda de cierto igualitarismo pretencioso sólo conseguirá reforzar las desigualdades dentro de la escuela. A

Pocas veces habían sido planteadas, después de 1968 —y era en contextos bien distintos—, demandas basadas en proyectos individuales antes que en críticas objetivas de la sociedad. Se trata, desde luego, de un movimiento social, puesto que hunde sus cimientos en la afirmación positiva de sí mismo y en la lucha contra el sistema escolar y contra sus rigideces, en nombre de una cultura de la originalidad y de la innovación. Hace quince años ya esperábamos y anunciábamos el «retorno de los actores sociales». En estas manifestaciones de estudiantes, incluso cuando se ven alteradas por las provocaciones de los alborotadores, los actores hacen oír sus voces, unas voces en las que se mezclan los proyectos de futuro y las críticas, en lugar de limitar su acción a la mera defensa corporativista o al rechazo global, de carácter ideológico y destructor más que anunciador de cualquier actuación real.

COMENTARIO

Frente a los comentarios de quienes exigen la identificación acrítica con las luchas sociales (o al menos con las que ellos mismos han decidido apoyar) se escuchan opiniones opuestas. ¿Por qué, dicen éstos, ha-

bría que concederles tanto crédito a una serie de movimientos que destacan, algunos, por su debilidad y por ser dirigidos por militantes políticos más que por categorías sociales, y otros, por el hecho de haber puesto en marcha movilizaciones, más liberales que contestatarias, a favor de una serie de derechos garantizados por la República? Los verdaderos problemas sociales, ¿no se encuentran acaso en otro ámbito, en el que se sienten antes que en la contestación? Por una parte, en la corrupción y en la especulación, y por otra, en la convivencia incívica; así pues, ¿los problemas no provendrán más bien de la enorme debilidad que aqueja a los códigos sociales y al espíritu cívico?

Pero, ¿por qué mezclar realidades tan diversas, por qué considerar sobre todo la existencia de la sociedad desde el punto de vista del orden, por legítimo que éste sea, y no desde el punto de vista de la justicia o de los derechos que adquieren forma en las luchas, incluso cuando no demuestran tener toda la solidez que cabría esperar? Existe de hecho cierta complementariedad entre dos tipos de intervenciones públicas que parecen ser igualmente necesarias. Resulta obligado contener estos actos contestatarios cuando no desembocan en ningún movimiento social y tan sólo son la expresión de un rechazo; pero, al mismo tiempo, haría falta reprimir igualmente las conductas de los grupos más poderosos, capaces de acarrear consecuencias todavía más graves, cuando éstos contravienen la ley.

Haría falta, ciertamente, prestar gran atención a las medidas de saneamiento de la vida pública, pero al mismo tiempo es preciso conceder una atención equivalente a la positiva transformación de las conductas autodestructivas de las víctimas en capacidad de acción colectiva ilusionante. La consecución de esos dos objetivos, ambos de tan múltiples implicaciones, se intentó en el pasado y se debe intentar de nuevo en el presente. Para algunos, el peligro principal es que el orden legal llegue a estar amenazado; a otros, en cambio, les preocupa ante todo los riesgos que se ciernen sobre el espacio de lo social; los hay por último, y entre ellos me cuento, que afirman la necesidad de que se consoliden nuevos actores y nuevos movimientos sociales. Pero no hay ninguna razón que justifique la oposición de estas tres maneras de enfrentarse a una crisis que demuestra tener múltiples ramificaciones; a condición, claro está, de no dejarse arrastrar hacia una política del miedo, del rechazo generalizado y del desinterés, política que no parece atraer solamente a los electores del Frente Nacional.

Capítulo 4

ORDEN SOCIAL Y LA EXTREMA IZQUIERDA

La constatación es penosa y se comprende que haga perder la cabeza a algunos. El paro no deja de aumentar, los articulistas más torpes no dejan de repetir día tras día que en una economía mundializada los poderes nacionales no tienen nada que hacer, que las naciones se están diluyendo por mor del sacrosanto mercado y que lo que antaño fuera nuestra sociedad no es ahora más que el simple y acelerado flujo de cambios tremendamente imprevisibles. Ciertas ideologías han alabado las excelencias de la liberación producida por la apertura de los mercados, y otros, los populistas de ultraderecha o de extrema izquierda, al igual que determinados políticos, vociferan que los antiguos países amenazan ruina y que es necesario salir de la nueva Europa antes de que sea demasiado tarde.

La realidad es que la moneda única nos hace padecer fuertes contratiempos, pero no estamos condenados en modo alguno a la regresión social o al declive. A condición, en todo caso, de renunciar a la absurda idea de nuestra impotencia y de intentar encauzar ciertas actuaciones contra las tempestades financieras, pues éstas tienen también un origen nacional.

Algunos países se dejan morir de inanición; otros cometen graves imprudencias financieras, tal como ha pasado en Japón o en Corea a pesar de sus grandes avances económicos; los hay por el contrario, sobre todo en Europa, que disponen de los medios requeridos para iniciar nuevos procesos de crecimiento y que combaten con eficacia, al mismo tiempo, la miseria y las desigualdades; por último, tenemos el caso de aquellos países que, como los Estados Unidos, confían en su propio dinamismo económico para hacer soportables las crecientes desigualdades. Tal diversidad de reacciones pone de manifiesto hasta qué punto la política se encuentra imbricada con la economía.

Es necesario por encima de todo salir de ese largo período de confusión y de perturbación que diera comienzo a mediados de los años se-

tenta, cuando la derecha y la izquierda, el RPR y el Partido Socialista por igual, se volvieron sordos y ciegos a los cambios de la economía mundial. En 1981 la política de la izquierda supuso el colmo de la irresponsabilidad, y desde entonces los gobiernos, tanto los de derechas como los de izquierdas, siguen adoptando políticas económicas realistas que no logran convencer, no obstante, a la mayoría de los ciudadanos, ni quizá siquiera a sí mismos, de que la adaptación a la economía mundializada no convierte en prácticamente imposibles las políticas de protección social. Solamente Michel Rocard, aprovechando un momento de calma de la coyuntura mundial, demostró que se podía a la vez modernizar la economía, crear el RMI, cambiar en profundidad el sistema fiscal e incluso restablecer la paz en una Caledonia a la cual la política de Bernard Pons había llevado casi al abismo.

En pocas palabras, a menudo tenemos la impresión de que no existen más posibilidades de elección que, por una parte, una política condicionada por el paro, representada por los bajos salarios y el desmantelamiento de la Seguridad Social, y, por la otra, el mantenimiento a cualquier precio de la gestión estatista de la economía, que lleva del déficit a la corrupción pasando por la mala administración. Entre un pasado insostenible y un porvenir insufrible, ¿cómo no se podía vivir el presente a manera de vísperas de la catástrofe? ¿Cómo, cuando toda política adquiere visos de imposible, podría dejar de denunciarse la situación y no parecer agoreros?

Fue suficiente sin embargo con que el nuevo Primer ministro apareciera como garante de una compatibilidad que hasta entonces se tenía por incompatible —como es la aceptación de la economía mundializada y la consolidación del espacio económico europeo, por un lado, y al mismo tiempo por otro el planteamiento de importantes proyectos sociales— para que el clima cambiara por completo. La cordura, la inteligencia y la esperanza volvieron entonces a considerarse de nuevo importantes. Y además, ¡una determinada victoria deportiva confirma que los franceses han recuperado la confianza en sí mismos!

Pero como sucede a menudo, la conciencia lleva retraso en relación con la experiencia: a lo lejos se escucha un confuso guirigay que no deja de recordarnos los viejos temores. Ese griterío da testimonio de la pérdida de confianza en las instituciones políticas y nuestra incapacidad para analizar determinadas situaciones que, con demasiada facilidad, son definidas como sin salida, a falta de haber buscado y encontrado la sali-

da correcta del actual momento de transición liberal. De este modo, Francia continúa sin creer del todo en la aplicación de nuevas políticas sociales capaces de operar en una economía abierta, aunque, como es el caso, muchos otros países europeos, de Dinamarca y los Países Bajos a Portugal, Italia o incluso Gran Bretaña, han sabido elaborar ya estas políticas.

Este retraso político e intelectual no merecería demasiada atención si no nos impidiera comprender correctamente las reivindicaciones, las protestas y las revueltas actuales que, por su parte, no sólo tienen sólidos fundamentos, sino que deben ayudar a alumbrar nuevos movimientos sociales y nuevas fuerzas políticas, sin las cuales nuestras instituciones más representativas no volverán a dinamizarse y nuestra democracia seguirá estando enferma. Además, en estos momentos estamos viendo cómo una parte de la izquierda comienza a virar, en nombre de la República, hacia una derecha más preocupada por el orden que por luchar contra las desigualdades.

Cuando la política no hunde sus raíces en la realidad social surgen movimientos extremistas que sólo buscan oponerse a un centrismo abúlico. Tal escisión tiene efectos negativos, tanto para las luchas sociales como para la actuación política. Pero justo es reconocer el derecho al extremismo cuando los instrumentos políticos que deberían atender las demandas sociales se encuentran averiados. Lo que se ha dado en llamar la excepción francesa se caracteriza en buena medida por la impericia casi congénita del poder político para comprender las situaciones sociales y hacerlas evolucionar de la manera más adecuada. ¿Quién podría haberles reprochado a los estudiantes de Mayo del 68 el no haber esperado absolutamente nada de la Francia de Pompidou? Pero en la actualidad ha desaparecido la razón de ser de la extrema izquierda, y haría falta trabajar en la indispensable aproximación de las protestas sociales y de las acciones políticas. Pues semejante desvinculación nos deja desamparados, sin poder hacer nada, frente a las locuras del capitalismo financiero.

Sería deseable hoy día disipar la polvareda levantada por las opiniones de carácter populista y sustituirlas por el análisis riguroso de las situaciones, de las posibilidades y de los actores sociales del período en el que nos disponemos a entrar, período que no presenta las mismas características que el de las Treinta Gloriosas ni el de la transición liberal que se inició a mediados de los años setenta.

La interpretación que personalmente defiendo no supone la sustitución de la fascinación revolucionaria por la apelación a la buena voluntad del gobierno. Más bien, consiste primeramente en el intento de advertir, en la mayor parte de los actuales movimientos populares, la expresión de una voluntad propia de liberación y de reconquista del derecho a constituirse en actor de la lucha contra la desigualdad y la exclusión. Lo esencial, repito, es que frente a una globalización pretendidamente incontrolable se llegue a percibir cierta voluntad de actuación, incluso en las circunstancias más desfavorables, y en especial cuando los niveles de paro muestran índices muy altos, una situación que, siempre se había dicho, condena a quienes la padecen a la impotencia o a convertirse en peones de demagogías autoritarias.

La huelga de hambre llevada a cabo en la iglesia reformada de Bagnolles por un grupo de «sin-papeles», a los cuales la administración se negó a regularizar su situación, y por el antropólogo Emmanuel Terray, ha puesto al descubierto la voluntad de actuación de aquellos que no quieren ser considerados exclusivamente como víctimas, sino más bien como manifestantes activos, atentos a velar por la dignidad de sus semejantes y tanto como por la suya propia. Por su lado, los espíritus humanitaristas que han efectuado la crítica de su propia actuación y los virajes de la *charity business*, han sido tan lúcidos como valientes, pero no han dejado tampoco de reafirmar el derecho de injerencia para defender a las víctimas, para hacerlas aparecer como tales en su sufrimiento, en la violencia sufrida, en su dignidad pisoteada. Del mismo modo, quienes han mostrado (a la televisión en especial) a enfermos de sida, y quienes, como Jean-Paul Aron, han dado a conocer ellos mismos su enfermedad y anunciado que su muerte estaba próxima, han ayudado a la opinión pública a considerar a los enfermos como lo que son, seres humanos que viven una dramática experiencia vital y que exigen ser tratados con comprensión. Ya en el siglo XIX, mientras algunos se contentaban con la denuncia del carácter destructor, envilecedor, del trabajo industrial y de la existencia de los obreros, otros creyeron en la posibilidad de que las víctimas se transformaran en actores sociales, en particular con la ayuda de la educación popular y la formación impartida por los sindicatos.

Cuanto más despersonalizada y global sea la naturaleza del poder dominador, mayor sensación de impotencia producirá en quienes son dominados y manipulados, y la idea de movimiento social parecerá más ilusoria frente a la patente intervención de las vanguardias políticas e

ideológicas. De este modo, desaparecerían del escenario los movimientos sociales, ahogados por aquellos que se han erigido en sus representantes. No parece entonces posible, en ese momento, la existencia del menor espacio político entre la extrema izquierda y el centro derecha. Pero el surgimiento de movilizaciones de protesta y de rechazo puede también, a veces, colaborar en la defensa, más allá del mero ciudadano o del trabajador, del ser humano en relación tanto con sus derechos universales como con su experiencia e identidad particular.

No deja de crecer el abismo existente entre quienes lanzan discursos que denuncian un dominio progresivamente encubierto y los que apelan, en contra de esta despersonalización ejercida por el capitalismo, a la experiencia personal y positiva de los individuos y de los grupos que se definen por el desempeño de un oficio, por su cultura, historia o experiencia vital. El terreno de las luchas sociales parece que se acorta poco a poco, dicen los primeros, mientras que para los segundos tiende a alargarse. Si la economía se globaliza, los movimientos de defensa también se globalizan al mismo tiempo, puesto que apelan a la experiencia vital y al deseo de darle sentido.

La oposición entre las dos formas de interpretación de los movimientos populares y de intervención política resulta ser corolario, a fin de cuentas, de la oposición misma entre revolución y democracia. Pues el espíritu revolucionario se apoya en la supuesta impotencia de los actores sociales, en el papel central atribuido a la crisis y en la apelación a las vanguardias políticas organizadas, mientras que la concepción democrática exige que todos los hombres y todas las mujeres sean considerados posibles actores políticos, capaces de actuar con suma responsabilidad a pesar de la indiferencia y la fuerza del poder dominante.

Pero, ¿quién podría creer todavía en la revolución y esperar su advenimiento? En los países en los que la acción política se desenvuelve libremente, la verdad es que, pocos años después del hundimiento del sistema soviético, casi nadie lo creía. Es cierto que durante los años negros de principios de esta década la derecha y la izquierda apenas se diferenciaron la una de la otra y que la política más monetarista la puso en marcha Pierre Bérégovoy, por entonces Primer ministro, miembro del Partido Socialista. Pero precisamente la situación política ha cambiado, y las peroratas contra el pensamiento único han demostrado su vacuidad, al mismo tiempo que acrecientan los riesgos de acciones antidemocráticas. La escuela de la denuncia cultiva el extremismo, pues ésta es la única

manera de enmascarar su ausencia de análisis y su nula comprensión de las transformaciones que se están produciendo.

No vale la pena recordar aquí la confrontación entre revolucionarios y reformistas: la confrontación entre revolucionarios y demócratas es lo que importa, y también esa otra que, cada vez más, enfrenta a quienes piensan que la acción todavía es posible y a los que no, la que opone a quienes subordinan la sociedad al Estado y a los que, por el contrario, quieren conceder autonomía a los actores sociales. El estatismo más radical se vio preconizado, en particular en 1995, cuando la defensa del sector público fue elevada a la dignidad de deber democrático con tal de resistir a los ataques de una sociedad civil (y en concreto de una economía) abocada, según se decía, a la sola búsqueda del interés particular. ¡Qué imagen tan absurda! ¡Las gigantescas pérdidas de *Crédit Lyonnais*, la huelga entablada en *Air France* por pilotos bien pagados, el profundo déficit de la *SNCF*, pero también el masivo fracaso de los estudiantes de primer ciclo universitario o la mala gestión de muchas sociedades públicas, han sido convertidas de golpe en joyas de la corona y en conquistas populares! Y ni siquiera se ha planteado esta cuestión: ¿no son acaso el inmovilismo y la mala gestión del sector público las razones que han agravado la crisis económica? La inflexibilidad de ciertas situaciones profesionales y de ciertos modos de gestión, ¿no ha tenido nada que ver con la excesiva flexibilidad que es impuesta a otros trabajadores? La influencia del Estado en la economía, la todavía poderosa fuerza de la economía administrada, ¿no contribuyen acaso, de alguna manera, a dificultar la creación de empleo y la innovación tecnológica?

¿Hay que concluir por eso que sería conveniente dejar al mercado la gestión de los recursos? Seguramente no. Pero lo que necesitamos no es conceder más importancia al Estado ni al mercado, sino menos Estado y menos mercado, precisando ambos en todo caso mayor capacidad de iniciativa, de negociación, de proyectos, de atención a los conflictos sociales propiamente dichos, a través de los cuales han de construirse las indispensables relaciones (de continuo cambiantes) entre las realidades, las posibilidades, de la economía y las demandas o reticencias de los actores sociales. No deja de ser cierto que la opinión pública juzga demasiado severamente a la «clase política»: ni el Parlamento, ni los sindicatos, ni los debates de opinión, parecen haber jugado en efecto ningún papel destacado en una historia que se resume en el lento desmoronamiento de la economía dirigida, desmoronamiento que se produce a cau-

sa de los golpes de la competencia internacional y de las innovaciones tecnológicas. Todas las luchas sociales, desde las más defensivas a las más originales, son positivas en la medida en que hacen más amplio el terreno propio de la política, entendida ésta en sentido lato, es decir, en cuanto a espacio público. Ahora bien, uno de los principales obstáculos a tal ampliación proviene de apelar —de forma en apariencia revolucionaria, cuando en realidad es conservadora— a una mayor intervención del Estado, tal como hacen los intelectuales convertidos en perros guardianes de la pequeña burguesía de Estado.

Que el breve período que acabamos de conocer no nos lleve a engaño. Los movimientos en defensa de las empresas públicas que lo han acompañado son seguramente muy importantes y su capacidad de protesta no se desvanecerá. Pero no sería justo considerar que las ideologías populistas han sido las encargadas de descubrir y expresar su sentido real. Lo contrario es lo verdadero.

A medida que los países de Europa salen de la larga transición liberal, en el curso de la cual se han visto aniquilados o debilitados sus sistemas económicos y sociales de posguerra, se hace más notoria la aparición de nuevas demandas y reivindicaciones. Pero se pueden dar pasos atrás —y surgir formas de resistencia a una evolución económica y social en gran parte ya efectuada— o, por el contrario, hacia adelante. La formación o el mantenimiento de un partido de extrema izquierda es un modo de reforzar situaciones que han quedado periclitadas. Es algo que puede constatar en España con Izquierda Unida o, de manera diferente, en Italia, en donde *Rifondazione Comunista* ha hecho caer al gobierno de Romano Prodi, o en Francia, con los últimos fieles de *Georges Marchais*.

Una segunda solución sería la organización de una extrema izquierda social más que política, aunque orientada también hacia el rechazo. Sería esa extrema izquierda social que se ha manifestado tan ruidosamente y que ha hecho creer a muchos que era expresión de recientes movimientos populares, si bien por el momento sólo ha dado interpretación ideológica a ciertos movimientos todavía poco elaborados, aunque enraizados en sólidas experiencias colectivas. Esta izquierda que ataca a la izquierda terminará necesariamente por inscribirse en un movimiento político de extrema izquierda, en realidad muy frágil, puesto que, a diferencia de España, estará conformado por múltiples orientaciones y organizaciones, desde comunistas a trotskistas diversos, pasan-

do por una parte de los Verdes. A decir verdad, esta salida parece muy poco probable.

Otra solución, opuesta a las dos anteriores, consiste en otorgarle confianza absoluta al gobierno de la izquierda plural, dando prioridad en la oposición a una derecha que se ha revelado incapaz de salir de la crisis. Esta solución no es más aceptable que las precedentes. En principio, porque aunque el gobierno socialista se ha ganado la confianza de un segmento mayoritario afirmando y demostrando que competitividad económica y reformas sociales resultaban compatibles, se ha mostrado sordo a las exigencias sociales de los movimientos salidos de los más excluidos. Ello quizá sea debido a razones electorales, pero también a causa de cierta concepción republicana que ha llevado a la izquierda a comportarse, en este punto, igual que la derecha. Como sus vecinos, Francia se ha visto duramente castigada por el paro y la precariedad, y se encuentra aún tan debilitada como podría suponer el cálculo de un gobierno sensible al estado de la opinión pública, y en particular de la opinión de las clases medias y de los grupos que se sienten amenazados por los movimientos reivindicativos de quienes padecen principalmente los efectos de la crisis. Pero entender no significa aceptar. Parece necesario entonces que se adopte la única solución adecuada a la actual situación: la formación de actores sociales capaces sólo de ejercer, incluso aislados o con carácter intermitente, una fuerte presión sobre el gobierno de izquierda, e incluso prestarle su apoyo contra una derecha que un día u otro saldrá del estado de descomposición en el que se encuentra en la actualidad. Es necesario igualmente tomar conciencia de que la crítica de izquierda al gobierno puede ser más vigorosa de lo que hasta ahora ha sido, mientras la derecha se encuentra fragmentada, y que *es tarea prioritaria tanto de los actores sociales como de los actores políticos durante los próximos años el acercamiento de unos a otros para permitir a la sociedad francesa abandonar del todo este momento de transición liberal, reconstruyendo al mismo tiempo la política social.*

¿Qué forma tomarán mañana los movimientos sociales? Seguramente no la de los movimientos obreros de antaño: puesto que los agentes sociales reconocen y reivindican la necesaria separación entre la acción política y los movimientos sociales, pese a reconocer sus necesarios vínculos, no podemos pensar en la creación de nuevos partidos socialdemócratas.

La consecuencia directa de la reivindicada separación entre la acción social y la acción política es que la primera no entiende de unidades or-

ganizacionales, mientras la segunda cuenta con ellas por su misma naturaleza, puesto que de lo que se trata en su caso es de acceder al poder. Los movimientos sociales actúan hoy, por el contrario, por medio de *campañas* discontinuas, tan separadas entre ellas que muchos están tentados de negar la existencia de *un* movimiento social, al comprobar la irreductible pluralidad de los conflictos y las posiciones que expresan. Esto es así porque los mismos actores sociales, y más todavía los intelectuales, deben poner al día las orientaciones comunes de tales campañas y su profunda unidad.

Estas campañas buscan oponerse ante todo al Estado, en la medida en que éste se pone al servicio de las fuerzas económicas dominantes. La apuesta social que realizan en conjunto estos movimientos es la del individualismo, interpretado por fuerzas dominantes como la libertad de los compradores en los mercados y que los movimientos de oposición definen en términos de autodeterminación, la afirmación del derecho de todo individuo y de todo grupo a la singularidad, con la condición de que este derecho se les reconozca a todos.

El espacio entre las intervenciones sociales organizadas y las decisiones de Estado está ocupado desde hace largo tiempo por los partidos políticos, que sirven de mediadores entre los ciudadanos y el Estado. Que tal mediación no funcione siempre todo lo bien que debiera no ha de conducir al rechazo de la democracia representativa. Más vale constatar que ésta es incapaz de acceder a las realidades sociales propiamente dichas, y que la acción social organizada es, muy a menudo, ajena a los sistemas políticos. Nuestra definición de movimientos sociales nos sugiere incluso que han de ser, por naturaleza, independientes de las fuerzas políticas. Antaño la situación era diferente: contra el Estado solamente estaban algunos aristócratas o intelectuales, que hablaban como representantes de la razón o incluso del pueblo, pero que estaban alejados de ellos. Esta doble oligarquía, la del Estado autoritario y la de una élite intelectual, ya no posee fundamento, aun en el caso de a que determinados intelectuales les gustaría conservar el monopolio de la palabra y el sentido.

Actualmente, el Estado interviene en todos los aspectos de la vida privada y pública, y la opinión pública ya no se reduce al juicio de ciertos intérpretes: ésta se ha extendido al conjunto de la población, sobre todo por vía de los sondeos y de los medios de comunicación. Éstos no son neutrales, pero tampoco se encuentran sometidos a ningún poder di-

También publicado por Paidós

UNA IDEA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
FERNANDO ESCALANTE GONZALBO

Vistas a fines del siglo XX, las ciencias sociales presentan un panorama abigarrado y a menudo confuso, de una complejidad que parece inmanejable, como si fuesen campo exclusivo de los profesionales. La idea de este libro es que no es así: que para ver con claridad conviene tomar distancia y que, en lo importante, la reflexión de las ciencias sociales está al alcance de casi todos. En un sentido, se trata de un manual: propone una manera ordenada de aproximarse a las diferentes disciplinas y a los temas fundamentales del pensamiento social. Es también una meditación personal y una invitación a la curiosidad: un paseo que va del mito del minotauro al complejo de Edipo, a las efusiones sentimentales de Rousseau, a la empeñosa ambición científica de Comte, a la imaginación de Wittgenstein, Weber y Maquiavelo. Es el relato de una experiencia docente larga: una mínima memoria de lecciones impartidas a varias generaciones de estudiantes. Es, sobre todo, una invitación a leer otros libros, una cartografía elemental para la literatura de las ciencias sociales.

rigente. No se expresan las mismas ideas en *Le Figaro* o en *Libération*, en France 2 o en Canal+. Y aún más, ciertas investigaciones han demostrado que los mensajes emitidos por televisión, en general a causa de su misma sencillez, son recibidos e interpretados de maneras muy variables según sea el espectador, ya que cada uno percibe a su modo los mensajes que se difunden.

En materia de medios de comunicación, existen tres planteamientos claramente erróneos. El primero es el que pretende que presentan los «hechos» de forma tan «objetiva» como les es posible; esta afirmación no es exacta, porque los programas que se ven por televisión —como por otro lado las clases impartidas por un profesor—, no se contentan con una mera descripción de los hechos; el discurso que los anima participa de la capacidad de elección de unos materiales por encima de otros.

Y sin embargo, no se puede decir que los medios de comunicación expresen la opinión de los periodistas y sus intereses colectivos, puesto que sus opiniones ofrecen un carácter bien diverso y sus intereses otro tanto.

Según el tercer planteamiento, los medios de comunicación están al exclusivo servicio del poder; así, seleccionan las informaciones y eligen las formas de diversión con el fin de eliminar la presencia de determinadas situaciones y de actores sociales reales, o de descontextualizar sus mensajes. Esta idea contiene la misma parte de verdad y de error que las otras dos anteriores. El espacio de los medios de comunicación está, en efecto, atravesado por las mismas relaciones de poder, las mismas evoluciones culturales y los mismos procesos de profesionalización (o incluso de intelectualización) que cualquier otro tipo de espacio público. La diferencia concierne en la actualidad no tanto a la naturaleza de este espacio como a su importancia. Los filósofos del siglo XVIII, los escritores políticos del XIX o los intelectuales y periodistas del XX han difundido de manera creativa las nuevas ideas y sensibilidades; han impuesto sus modos de análisis y de expresión, y finalmente se han sometido en efecto a las situaciones de poder o a las presiones ejercidas por una parte de la opinión pública. Como la vida política en general, desde los partidos a los sindicatos y de éstos a las asociaciones de ámbito civil, el espacio mediático se encuentra atravesado por ciertos conflictos; dispone también, y esto cabe tenerlo en cuenta, de mayor libertad en relación con cuanto supone innovaciones culturales que a los juicios de carácter político propiamente dicho; aunque participa siempre de las relaciones de poder, no

se ve nunca reducido a la tarea de mero portavoz de los poderes dominantes.

Sin los medios de comunicación, sería de mayor magnitud la incompreensión y el conflicto entre el omnipresente Estado y una población por completo aturdida por los cambios acelerados en materia social y cultural. Si los *media* están absolutamente en manos del poder dominante, ya sea privado o público, lo que es el caso en países con regímenes totalitarios, pierden toda credibilidad. Frente a tal situación, se convierten en un lugar de encuentro privilegiado entre el sistema público y la sociedad, encuentro que permite la constante confrontación de ideas, opiniones e intereses diversos.

La general condena de los medios de comunicación no puede tener más que un sentido: la afirmación de que solamente algunas mentes privilegiadas deberían gozar del derecho absoluto a definir el sentido de los acontecimientos y a informar a la opinión pública, porque hablan en nombre de Dios, de la nación o de la ciencia; semejante paso atrás sólo sería posible a condición de una fuerte represión. Con todo; «la gente» tiende a pensar que los *media* la aliena y manipula por completo, pese a que parece complacerle la mala calidad de los programas que se emiten. En cuanto a los movimientos sociales, son lo suficientemente hábiles como para aprender a servirse de los medios de comunicación.

Resulta evidentemente más sencillo denunciar la hipotética y absoluta sumisión de la sociedad o de los medios de comunicación que efectuar el análisis de situaciones reales para así descubrir su sentido y definir el espacio que pueden estar llamados a ocupar unos actores sociales independientes. Lo importante aquí es constatar que se encuentran confrontadas, tanto en relación con los *media* como a las mismas luchas sociales, cierta concepción en exceso pesimista que ve por todas partes señales abrumadoras de esa sumisión y que no reconoce la menor posibilidad para la acción y la expresión autónoma de los actores, y otra, demasiado optimista, que no cree más que en la ley y el orden, y que abandona a su suerte a quienes no se conforman con esa situación, y aún una tercera concepción, que yo invoco, que afirma que si bien el campo de la política y el de los medios de comunicación no son nunca independientes de las fuerzas sociales dominantes o de las intervenciones del Estado, no se encuentran sin embargo del todo privados de alguna autonomía e iniciativa. ¿Cómo, quienes rechazan esta última postura, pueden creer en la idea de democracia?

TRES IZQUIERDAS Y UN SOLO GOBIERNO

El fin de la ilusión liberal ha debilitado y desorientado a la derecha, claramente abandonada por las urnas que está al mismo tiempo paralizada por culpa del Frente Nacional, puesto que se ve en la tesitura de no poder gobernar con él ni sin él. Lógicamente, hoy el debate no es tanto el que enfrenta a la derecha y a la izquierda como el que divide en dos a ésta última. Se trata de hecho de dos debates por el que se definen tres izquierdas.

El debate más sorprendente es el que enfrenta a quienes quieren volver a conceder prioridad al buen funcionamiento de las instituciones y del orden público por encima de unas dinámicas sociales a las que tienen por confusas, desorientadas o peligrosas, con aquellos otros que pretenden, por el contrario, otorgar un papel de privilegio a los actores sociales; a sus conflictos y a las situaciones que atraviesan. Los primeros se autodenominan *republicanos*; cada vez son más numerosos y están animados hasta el punto de llegar a publicar ciertos textos que algún lector circunstancial podría considerar como de derechas, de una derecha civilizada ciertamente, pero preocupada ante todo por el respeto a la ley y al orden.

Su principal fuerza proviene quizá del sentido de irrealidad que embarga cada vez más claramente a la *extrema izquierda*, ya sea ésta que se define como la izquierda de la izquierda o aquella otra que está a la izquierda de la izquierda. Esta segunda fórmula es la que me parece más justa, puesto que izquierda viene a ser un término político antes que social, y porque esta extrema izquierda se establece en contra del gobierno, al que acusa de haber claudicado ante el pensamiento único. Muchos son los que piensan que esta extrema izquierda es la única que habla con realismo en este país, tan castigado por el paro y la precariedad. De hecho, se moviliza sobre todo en defensa del sector público, y se hace cada vez más difícil creer que la crítica de la mala gestión del Estado pueda conducir necesariamente a formas radicales de liberalismo. A decir verdad, el «pueblo» al cual se refieren estos intelectuales se parece progresivamente a un constructo ideológico.

¿Existe algún espacio político entre los republicanos y los populistas de extrema izquierda? La respuesta puede parecer afirmativa en un primer momento, aunque bien cabe dudar cuando se piensa en la práctica. Ya he mostrado aquí que los «sin-papeles» y los homosexuales de hoy, al

igual que los *beurs* de ayer, o las feministas u los ecologistas de ayer y de hoy, han creado movimientos culturales que defienden al mismo tiempo la igualdad y la diferencia y que reivindican el reconocimiento de los derechos culturales de las minorías. Será necesario reconocer que la tendencia de los gobiernos europeos a instalarse en espacios de centro izquierda o de centro derecha es una sólida realidad. Lo que de hecho buscan estos gobiernos es unir las conquistas sociales con la realización de objetivos políticos. ¡Qué tontos parecen hoy día quienes afirman que tanto da derechas como izquierdas, que son el mismo perro con diferente collar! ¿Y en nombre de qué toman ellos por estúpidos a los que se interesan por las elecciones democráticas que enfrentan a derechas e izquierdas? Estos gobiernos no son solamente republicanos en el sentido tradicional del término: cuestionan también las reformas sociales, y la reforzada unidad europea que hace progresar la Europa de las conquistas sociales concebida por Jacques Delors. Se trata más bien de acciones políticas antes que sociales. Por otra parte, al menos en Francia hemos conocido manifestaciones de extrema izquierda. Incluso aunque, como es mi caso, se pueda pensar que se han interpretado en sentido contrario las crisis y las protestas de la sociedad francesa, tales manifestaciones se producen, no obstante; todos las conocemos, sobre todo por los medios de comunicación. Se plantea por tanto la siguiente cuestión: entre unos republicanos cada vez más centristas y la extrema izquierda, ¿hay lugar para otra cosa que no sea un gobierno de centro izquierda?

Acabamos de mencionar cierto número de movimientos sociales y culturales; reconozcamos que poseen carácter parcial, discontinuo, a menudo dependientes de apoyos exteriores. Debo pues admitir que esta *izquierda social*, que al mismo tiempo reclama la igualdad y la diferencia, existe de manera más difusa que organizada. Las encuestas de opinión les otorgan más relevancia que a los mismos acontecimientos. Manteniendo al margen de los debates por el gobierno, cuenta sin embargo con fuertes apoyos tanto de los socialistas como de la CFDT, y sobre todo de numerosas asociaciones. De algún modo está presente en una sociedad civil casi privada por completo de expresión política, más que en los grandes o pequeños partidos, o también incluso entre grupos de extrema izquierda. Escribo estas páginas con el fin de ayudarla a reconocerse a sí misma y a actuar.

El camino más fácil para que se comprenda en qué consiste es el compararla con la extrema izquierda. Estas dos izquierdas, la izquierda

social y la extrema izquierda, se encuentran separadas por un conflicto de ideas y por la manera de entender lo que son las acciones tradicionales. La extrema izquierda habla de poder y de dominación en términos que no permiten el menor espacio a la acción autónoma de las víctimas. Los antiguos y los modernos «proletarios» tienen por tarea hacer estallar las contradicciones del sistema imperante. ¡Los dirigentes políticos y los intelectuales tienen la de revelar a las víctimas el sentido de la opresión y el combatir ésta con el apoyo del Estado o apoderándose de él! Tal es la lógica de la acción revolucionaria.

La izquierda social parte por el contrario de la idea de que todo movimiento social se conforma alrededor de la defensa activa a favor de alguna realidad social o de algún derecho. Antes de ayer se trataba de la nación contra el rey, ayer de los trabajadores contra los patronos; hoy se trata de la defensa de los derechos culturales de todos (y en especial de las minorías) contra la integración obligatoria, por más que ésta sea emprendida bajo la bandera de la cultura de las masas oprimidas por el mercado o la de un poder comunitarista. Tales acciones de defensa y de nuevas propuestas pueden ser autónomas, y por lo tanto ejercer una influencia directa en las decisiones políticas. Y no se contentan con la mera denuncia: participan de cierta esperanza y su inspiración es, pues, democrática.

En el tipo de sociedad en el que vivimos, diez años después del hundimiento del sistema y del imperio soviético, el pensamiento revolucionario sólo cuenta con el apoyo de débiles minorías. Por el contrario, la extensión de la democracia desde el ámbito público a los problemas sociales (que se produjo de forma lenta y compleja), y en la actualidad a la democracia cultural (que todavía encuentra fuertes reticencias tanto entre la izquierda como entre la derecha), aparece como la apuesta más exigente de la vida pública. Resulta, en relación con ello, altamente paradójico el pretender que sólo la extrema izquierda sigue con atención el despliegue de los movimientos populares: en efecto, mientras ésta está ocupada en la defensa de la economía pública contra la mundialización de la economía, la otra izquierda se esfuerza a la vez en defender a los trabajadores más amenazados por el paro y en la tarea de hacer reconocer los derechos culturales de las minorías. La encarnizada propaganda de algunos para dar a entender lo contrario no puede más que fracasar frente a la evidencia.

Capítulo 5

DOS POLÍTICAS POSIBLES: TERCERA VÍA O POLÍTICA DOS Y MEDIO

La cada vez más peligrosa contradicción entre unas demandas sociales incompatibles con la situación económica y cierta política económica que parecería aniquiladora de los más legítimos intereses sociales, condujo, en el otoño de 1995, a una tremenda crisis y al enfrentamiento, aparentemente sin salida, entre un gobierno sin política social y un sector público a la defensiva. El apoyo concedido por la opinión pública a una huelga en la cual ha participado «en representación» explica que los objetivos económicos y las exigencias sociales hayan parecido en ese momento incompatibles. De ahí la gran depresión de la sociedad francesa y esa obsesiva idea de su declive: si construimos la moneda europea y nos dejamos llevar por la mundialización de la economía, veremos ensesguir bajar nuestros salarios, dismantelada la Seguridad Social, extenderse la precariedad y el paro. Riesgos, todos ellos, perfectamente reales, que han tomado cuerpo con enorme vigor en Gran Bretaña y que son contemplados por buena parte de los dirigentes económicos alemanes como positivas evoluciones. Pero la distancia continúa siendo inmensa entre el reconocimiento de tales riesgos y esa conclusión pesimista según la cual nos encontramos cogidos en la trampa y privados de los medios de actuación a nivel nacional sobre una economía internacionalizada cada vez en mayor medida.

Hoy, por fin, justo en el último momento, antes de caer al vacío, hemos llevado al poder a un gobierno de izquierdas que, desde sus primeros pasos, ha afirmado la posibilidad e incluso la necesidad de seguir a la vez una política económica liberal y una política social efectiva. Desde este mismo momento, los admiradores más ingenuos de la «sociedad de mercado» se han encontrado aislados frente a los efectos devastadores de las crisis financieras que han estallado en diversas partes del mundo y que se acercan a los Estados Unidos y a Europa. Desde hace ya muchos años, los propagandistas más dinámicos de las políticas liberales, la Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional, desta-

can por voz de sus dirigentes la necesidad de reforzar en todos los países la capacidad de intervención del Estado frente a las conmociones internas y a las amenazas exteriores que no podrían ser controladas espontáneamente por medio del mercado. En esas condiciones, ha aparecido claramente la necesidad de recusar el antiguo sistema estatista de gestión de la sociedad, pues no es una solución liberal lo que hace falta, sino la redefinición del papel del Estado como anticipador, mediador y animador de los cambios en todos los órdenes que se están produciendo en nuestra sociedad.

No es cuestión, evidentemente, de buscar una tercera vía entre el liberalismo y el comunismo, puesto que el segundo está muerto y el primero se dobla bajo el peso de las crisis financieras mundiales, aunque permanece como modelo de referencia para todos quienes desconfían de la intervención del Estado. Las vías intermedias que aquí nos proponemos explorar se encuentran por tanto entre este liberalismo más voluntarista que real y una social democracia aplastada bajo el peso del intervencionismo y de las empresas públicas que han debilitado la economía en provecho de la pequeña burguesía de Estado.

«Tercera vía»: la expresión se ha convertido en bandera de Tony Blair, influido por el sociólogo Tony Giddens, y también ahora del canciller Schröder. El Primer ministro británico organizó incluso en Nueva York una conferencia que reunió a Bill Clinton y a Romano Prodi, quienes, por razones diversas, apenas pudieron demostrarle su apoyo. Pero, ¿de qué se trata? Ante todo de la sustitución de una política de protección por una política de iniciativas que suponga a la vez la flexibilidad de la organización social y la capacidad supuesta a los actores para tomar iniciativas (*empowerment*). Esta concepción política responde al agotamiento del Estado del bienestar, que ralentiza la caída pero que no puede ayudar al restablecimiento, haciéndolo más difícil incluso. La precariedad, que afecta a entre un 20 y un 25 % de los ciudadanos occidentales, se alimenta tanto de las ayudas sociales propias del modelo francés como del empleo a tiempo parcial y de duración determinada, de tipo inglés o norteamericano. Que resulta necesario sostener a los más débiles es cierto, pero esto no se puede lograr, piensan los partidarios de la tercera vía, más que desarrollando las iniciativas, poniendo fin a las rigideces que suponen un obstáculo a la creación de empleo. La política Blair, que concede tan gran importancia a la mejora de las políticas públicas de educación y sanidad, posee el gran mérito de combinar objetivos económicos

y sociales. Pero esta solución, que parece de centro izquierda en la Gran Bretaña postatcherista y que toma el nombre de social liberalismo, adopta en realidad como eje ese mismo liberalismo que intenta corregir por medio de políticas sociales. Se le puede reprochar el conceder los medios de actuación sólo a quienes ya disponen de ellos, o el ayudar a quienes están ya *in* antes que procurar la reintegración social de los que se encuentran *out*.

¿Pero existe todavía otra vía, intermedia, que no nos devuelva a los errores de la política francesa cuando se deja llevar por la defensa de los intereses de los funcionarios, de los empleados de los servicios públicos, de los jubilados y de todos aquellos que dependen de subvenciones públicas? Si debemos rechazar el liberalismo (primera solución) y al mismo tiempo la ex socialdemocracia (segunda solución), ¿no nos quedará más que una solución, la tercera vía de Tony Blair (tercera solución)? Inspirándome en la historia del socialismo europeo, me gustaría proponer una vía «dos y medio», intermedia entre la antigua socialdemocracia y la tercera vía.

Lo que la caracterizaría en relación con el proyecto de Tony Blair es que concede prioridad a la reintegración social de los excluidos y de los marginados por el recurso de medios económicos, es decir, confiriendo al aumento de la producción y del empleo una prioridad confiscada desde hace largo tiempo por los problemas monetarios y financieros. ¿Hace falta recordar el fuerte vínculo que existe entre crecimiento y empleo? ¿Y no cabría esperar que la mejora de los índices de crecimiento provenga de otros factores que no sean únicamente el estado de los mercados internacionales y de la opinión pública? Se hace necesario, en el momento presente, incrementar el consumo interior, potenciar la capacidad de compra bajando los impuestos y reforzando al mismo tiempo, de manera efectiva, las actividades generadoras de empleo, o incluso orientando la enseñanza hacia la innovación. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos experimentaron un gran momento de crecimiento «interior» tras haber privilegiado durante mucho tiempo la importancia de los mercados internacionales. Hoy no es cuestión, ciertamente, de cerrar fronteras, sino de actuar sobre los factores interiores de la competitividad y de reforzar la solidez de una sociedad abierta al exterior.

¿Cabe imaginar, por ejemplo, que el desarrollo de América Latina no pase por la reducción de las desigualdades sociales, por la lucha con-

tra la corrupción y la violencia que gangrena a las administraciones públicas y, en particular, a la policía? En lo que a Francia se refiere, haría falta ciertamente acabar con el corporativismo y el inmovilismo del aparato de Estado, pero es necesario también, y aun por delante de esto, apoyar a los sectores creadores de empleo, relanzar el consumo y adaptar la enseñanza a las necesidades de la actividad económica.

Es verdad que la Internacional 2 1/2, creada en Europa Central a medio camino entre la socialdemocracia occidental y el bolchevismo soviético, no ha producido grandes resultados, aparte de haber generado cierta reflexión sobre la cuestión nacional, pero referirme a ella puede hacer, sin embargo, que se me comprenda mejor. En efecto, mientras que la tercera vía se puede definir como un centro derecha, la vía dos y medio busca definirse como de centro izquierda. Un intento útil pero difícil, por cuanto Francia todavía duda entre un nuevo inmovilismo socialdemócrata y una política de izquierda atenta, a la vez, tanto a la producción como al reparto, a la cual denomino con el término de vía 2 y medio.

La oposición que establezco entre estas dos vías (tercera y dos y medio) o, para expresarlo con mayor sencillez, entre el centro derecha y el centro izquierda, puede parecer paradójica. Gran Bretaña, castigada por la política liberal de la señora Thatcher, hubiera debido girar más hacia la izquierda, mientras que Francia, que dudaba todavía en entrar en el período de transición liberal, habría tenido que desembarazarse sobre todo de sus antiguas formas de gestión estatalista. Y sin embargo, ha sucedido lo contrario. Gran Bretaña se vio arrastrada, por su papel de capital financiera de Europa y por la estrecha alianza que une a Londres con Nueva York, hacia una política favorable a la globalización, mientras que Francia permanece aún prisionera de los grupos de intereses formados en el interior del mismo Estado que desean la prosecución de políticas activamente liberales.

Ésta es la línea divisoria entre las dos vías. Por un lado se privilegia la adaptación del Estado al mercado, produciéndose por tanto el desmantelamiento de la economía dirigida, tarea que se completa con la asimilación de las políticas de educación y de sanidad a meros proyectos económicos; por el otro, la alianza entre Estado y las demandas sociales sigue resistiendo la enorme presión de una economía mundializada. ¿Habría mejor definición de la oposición entre el centro derecha y el centro izquierda? Para ser francos, ambas soluciones están siempre bajo

la amenaza de graves enfermedades: la aceptación de las desigualdades y de las exclusiones sociales en el caso de la derecha; la sobreprotección de las categorías sociales ligadas al Estado en el de la izquierda. Francia, vuelvo a repetirlo, debe combatir en dos frentes: todavía duda en entrar en una etapa de transición liberal, en el momento en que ya resulta necesario salir de la misma. Resulta, por tanto, aceptable que haya de seguir una política al mismo tiempo de centro derecha y de centro izquierda, de liberalización y de lucha contra de la exclusión. Pero su historia y las enseñanzas de años recientes habrían de llevarla a conceder prioridad a cierto intervencionismo de corte antiliberal, y por tanto a una política de centro izquierda, pero a condición de que ese intervencionismo asocie siempre los objetivos de modernización económica con la búsqueda de la justicia social.

Lo importante es reconocer que las políticas económicas y sociales de los países europeos se caracterizan cada vez más por la elección realista que efectúan entre estas dos estrategias. Para los espíritus perezosos, sin duda resulta más interesante inventar otro tipo de posibilidades, tan llamativas como arbitrarias, o incluso oponer el liberalismo radical, criticado de forma poco realista en un país en el cual el Estado apenas gestiona la mitad del producto nacional, a cierto hipotético socialismo que no encuentra correspondencia con la política de ningún gobierno denominado socialista. No confundamos, pues, lo que es la exposición directa (y por tanto justificada) de cierto descontento con el análisis riguroso de la situación o con las propuestas realistas de otra política. No pensemos tampoco que la Europa actual, que está casi por completo dirigida por gobiernos a los que se les llama de centro izquierda, se encuentra sólidamente instalada a este lado del tablero político. La rápida evolución del nuevo gobierno alemán hacia tesis liberales proporciona una imagen de Europa más escorada al centro derecha que al centro izquierda. Francia, en donde el electorado se decanta mayoritariamente hacia la derecha, debe probar doblemente su eficacia en los campos económico y social, antes de que la derecha salga de una crisis que se hará bien en no creer eterna o de que el electorado de izquierda se vea decepcionado por una política en extremo prudente o incluso tímida.

Con esta finalidad presento las tres prioridades que, a mi parecer, han de caracterizar la política dos y medio.

PRIORIDAD AL EMPLEO

Lo primero que hace falta, en materia de política social, es volver a concederle prioridad al problema de la falta de empleo. El objetivo central debe ser combinar una flexibilidad cada vez mayor de las empresas con la defensa de los puestos de trabajo, que no sólo se han de considerar como mera mercadería. Frente al auge de las ideologías que contemplan la flexibilidad del trabajo como la principal condición del éxito económico, es necesaria la elaboración de una política laboral que sea compatible con los nuevos requerimientos de la economía, con la velocidad de los cambios tecnológicos y con la apertura de las economías nacionales, en un mundo en el que se multiplican los países industriales de nuevo cuño y en el que, sobre todo, se desarrolla un capitalismo financiero cada vez más independiente de la vida económica. No es tarea sencilla, ciertamente, el definir y aplicar semejante política de empleo, aunque ya supondrá un paso muy importante reconocer su absoluta prioridad.

Cierta comparación se impone. Por fin se ha reconocido que era preciso disminuir los costes del trabajo menos cualificado sin que, por eso, se reduzcan unos salarios ya de por sí demasiado bajos. Desde la creación de la CSG por Michel Rocard, se han emprendido grandes transferencias de los costes sociales de las empresas hacia ciertos impuestos con bases tributarias más altas que las propias de las rentas del trabajo, pues, aunque los debates oponen a los partidarios de las diversas modalidades de estas transferencias, nadie pone en duda que las empresas no pueden, por sí solas, resolver el problema del paro; sobre todo en la gran industria, donde el empleo disminuye necesariamente por el mismo hecho del crecimiento de la productividad laboral. Del mismo modo, el veloz y masivo desplazamiento del empleo industrial clásico hacia otros sectores ya no está en condiciones de producirse a causa del deslizamiento, como decía Albert Sauvy, de la mano de obra del sector secundario al terciario, de manera similar a como, tras la guerra, se operó del primario hacia el secundario.

Tal transformación del mundo del trabajo requiere organización. La creación de nuevas actividades que, normalmente, reclaman un nivel más alto de conocimientos generales, debe movilizar medios económicos considerables e imponer profundos cambios en la educación nacional. Se tiene también que conceder prioridad a la defensa del trabajo y, por

tanto, además de la ayuda concedida a los parados y a las empresas, cabe contemplar la creación de otras partidas destinadas a la preparación de la población activa para las nuevas formas de producción e intercambio. Los más pesimistas dirán que, en realidad, de lo que se trata es de crear nuevos empleos no cualificados dentro del sector terciario, eso que los norteamericanos han dado en llamar «empleos McDonald's». Francia debería crear muchos más empleos de este tipo en el terreno de la distribución, y en concreto en los sectores de la hostelería, restauración y servicios individuales; pero éstos deberían ser menos numerosos que los propiciados por las nuevas tecnologías, que los norteamericanos denominan «empleos Microsoft» y que aquellos que se deben crear para prevenir los mayores riesgos que amenazan a nuestras sociedades.

No consideraremos aquí más que la segunda categoría. ¿Es factible creer que una sociedad de nivel tecnológico puede funcionar con mano de obra no cualificada? El nivel general de competencia y de educación debe aumentar, por esta razón, rápidamente.

Esta reorientación de las políticas sociales hacia la creación de empleo debe traer aparejado un cierto aumento relativo de los salarios en relación con los ingresos nacionales, puesto que en los últimos decenios han disminuido considerablemente, y esto ha sucedido no tanto en provecho de las empresas y de sus inversiones productivas como en el de los capitales móviles, lo que se demuestra con la subida, todavía verificable a pesar de la grave crisis, de las bolsas y el éxito de las inversiones financieras propiamente dichas. No es cuestión de que sólo el Estado se vea obligado a poner en funcionamiento políticas activas de creación de empleo, tal como ha señalado Jean Boissonnat; son también las ciudades, las regiones y los mismos profesionales, e igualmente el sector terciario, quienes han de intentar asociarse y plantear determinadas iniciativas, que podrían ir desde las acciones humanitarias a la rehabilitación y defensa del medio ambiente.

La realización de una política de empleo de este tipo debe ser el gran reto de las próximas décadas, del mismo modo que la mejora de la protección social fue el objetivo principal de la posguerra. Esto no quiere decir que sea necesario renunciar a la Seguridad Social, hipótesis que, con razón, rechazan todos los países europeos, aunque habremos de mejorar la gestión de la política sanitaria y el sistema de jubilaciones, y en especial reducir el déficit de las empresas públicas a fin de dedicar recursos a la política de empleo.

No acabo de comprender a quienes hablan del fin de la necesidad de trabajar. Si lo que pretenden es terminar con cierta ideología productivista, subordinando por entero todos los aspectos de la existencia a la actividad productiva, entonces tienen razón. Pero la sociedad industrial no ha sido nunca una sociedad orientada al trabajo; más bien ha sido una sociedad de producción y de ganancia. Actualmente, además, concedemos al trabajo cada vez más valores positivos, a pesar de las catastróficas consecuencias del paro en la personalidad y en la vida social, también, quizá, porque la proporción de trabajos interesantes y cualificados no ha dejado de ir en aumento. Una conclusión que en nada se opone al intento de reducción de horas de trabajo, en particular en aquellos empleos no cualificados. En principio porque el reparto del trabajo descansa sobre la idea de que éste posee algún valor, y después porque la tendencia a largo plazo a disminuir el número de horas de trabajo se ha visto fuertemente frenada desde hace unos quince años. En este período, el progreso de la productividad ha beneficiado más al capital que al trabajo. Pero dejemos ya de lado la idea de que hemos pasado de una sociedad de trabajo a otra de consumo y ocio.

Ninguna política como ésta puede llevarse adelante sin contar con amplio apoyo social. Sin el acuerdo de los sindicatos, Dinamarca y los Países Bajos no habrían sido capaces de poner en marcha esas políticas que les han permitido reducir el paro sin poner en peligro su sistema de protección social. Si Francia contara con un sindicalismo tan sólido y capaz como en el caso de Italia, muchos obstáculos que hoy nos parecen insuperables se podrían salvar.

Está claro que la debilidad y la división de los sindicatos franceses, que en lugar de reducirse tiende a aumentar, supone una de las principales razones de la escasa capacidad de iniciativa de nuestra sociedad. Ahora bien, la política económica liberal no ha conducido irremediablemente, siempre, al debilitamiento de los sindicatos. En Suecia, Alemania e Italia son lo bastante fuertes como para contribuir a la creación de políticas económicas y sociales. Éste no es el caso de los Estados Unidos ni de Gran Bretaña, o tampoco, por diferentes cuestiones, de España o Francia. En nuestro país cierta actitud generalmente crítica, la descripción catastrofista de la situación y determinado lenguaje de ruptura ha impedido al sindicalismo jugar un papel mucho más significativo. La disminución de la presión patronal resulta indispensable si lo que se quiere es llevar a cabo una obligada renovación sindical, aunque más urgente

sería todavía el preguntarse, con la CFDT, por las condiciones interiores de reconstrucción de la acción sindical, y en concreto dentro del sector competitivo, de donde prácticamente ha desaparecido.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La política de empleo se debe apoyar también en cierta importante reforma que Michel Aglietta ha definido del siguiente modo: la prioridad concedida a la mayor productividad del trabajo ha de ser sustituida por la búsqueda de una mayor productividad del capital. Se requiere mucho capital para crear un puesto de trabajo dentro de la industria clásica; por contra, no se precisa tanto en las industrias del conocimiento, aquellas que se centran en la búsqueda, la innovación o la enseñanza, y en el sector de los servicios personales. Seguimos estando prisioneros de cierto modelo industrial que quiere crear grandes empresas de alta productividad laboral, apoyadas en grandes bancos y gestionadas en acuerdo con los grandes sindicatos, dentro del marco de los grandes proyectos de un Estado efectivo. Es momento de volver a poner el acento sobre la innovación, la educación y la solidaridad.

Sería preciso cambiar al mismo tiempo nuestro concepto de crecimiento. En una primera etapa, la modernización consiste en la acumulación de trabajo y de capital, cosas que pueden asegurar elevadas tasas de crecimiento. Pero luego haría falta extender la base del crecimiento y reconocer que ésta requiere diversas condiciones, como son una buena educación, medios de transporte eficaces y una administración pública capaz, si de lo que se trata es de obtener un crecimiento endógeno, que se pueda mantener por sí mismo. Pero nos encontramos con que hemos entrado ya en una tercera etapa, la del crecimiento permanente o sostenible, como ha sido denominado por la Comisión Brundtland y la Conferencia de Río. No existe posibilidad de crecimiento permanente si no se dedican esfuerzos a la prevención de los mayores riesgos: ecológicos, nucleares, sanitarios, sociales y culturales. Hemos de reconstruir nuestras ciudades, reducir el paro, facilitar las relaciones interculturales, evitar la marginación de los jóvenes o de los ancianos, etc. Muchos piensan que lo esencial en economía es la mera gestión en función de las exigencias de los mercados internacionales; sin embargo, esto no es así. El crecimiento depende ante todo de la innovación, como lo demuestra los lo-

zón y por el Estado parecerían la mejor manera (o incluso la única) de defender estos valores. Tradición que se encuentra evidentemente reforzada por el justificado horror que inspiran los regímenes totalitarios, y en particular aquellos que se cimentan en fundamentos étnicos, nacionales o religiosos.

Pero este típico jacobinismo francés resulta tan pernicioso y poco realista como el comunitarismo autoritario que, por encima de todo, rechaza la diversidad social. No es cuestión aquí de defender la diferencia cultural o las políticas identitarias que niegan la posibilidad de cualquier comunicación intercultural, sino por el contrario de buscar solución al problema central de los Derechos del Hombre. ¿Se puede mantener el universalismo de los Derechos del Hombre pese a insertarlos en la realidad de unas situaciones sociales y culturales concretas? Hace ya más de un siglo se hablaba del derecho al trabajo, de la promulgación de ciertas leyes y convenciones de exclusiva aplicación a unas clases sociales en concreto, definidas en primer lugar por la forma específica de las posturas que adoptaban en relación con el sistema de dominación social. ¿No comportaba esto el ataque a derechos cívicos reconocidos por todos? Hoy nos parece evidente que la respuesta a tal cuestión debe ser afirmativa. Sin embargo, muchos republicanos del siglo pasado se opusieron a reconocer los derechos de los obreros, porque les parecían en esencia menos universales que los derechos civiles ganados gracias a la Revolución francesa.

De manera similar, en una sociedad en donde triunfa la cultura de masas, en donde las tecnologías comunicativas actúan sobre la cultura y la personalidad de los individuos, en donde las migraciones producen cada vez mayores mezclas culturales, es necesario conquistar para el conjunto de la población el reconocimiento de los derechos culturales, al igual que fueron obtenidos para el conjunto de la población los derechos sociales. No se trata tan sólo de mera cuestión de tolerancia, y no se acaba de ver en primer lugar cómo a partir del diálogo entre culturas se podrían deducir unas condiciones universales de comunicación. Se trataría más bien de conseguir eso que yo he denominado «recomposición del mundo», es decir, la reintegración en la cultura y en la vida social de determinadas categorías, al mismo tiempo sociales y culturales, que han sido percibidas, «inventadas», como inferiores. Si sólo somos capaces de ver en los inmigrantes a unas gentes que huyen de la miseria que les prometen sus retrasadas sociedades y que están ansiosas de

adoptar el género de vida occidental, nos esperan problemas irresolubles. En efecto, ¿qué sucederá cuando esta asimilación no se produzca, ya sea por culpa del paro, de la precariedad o de la xenofobia de la sociedad de «acogida»? Es necesario combinar la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la personalidad cultural de los inmigrantes. Desde luego, ellos requieren un puesto de trabajo, pero también muy a menudo lugares de culto y la posibilidad de gestionar por sí mismos el paso de su ambiente cultural a este otro nuevo. El cada vez más frecuente rechazo que se expresa a la hora de reconocer la diversidad cultural se utiliza de hecho en fundamento de aquella a la que hace falta denominar derecha nacional, incluso cuando ésta se considere a sí misma como izquierda.

Para entrar en comunicación, es preciso ser diferentes pero también hablar el mismo lenguaje. Por eso la idea de minoría ha adquirido tal importancia. Las minorías quieren ser reconocidas en sus diferencias, pero al mismo tiempo también reconocen democráticamente las leyes de la mayoría. Las instituciones deben proteger y consolidar el esfuerzo de cada uno para constituirse como singularidad en sí mismo; deben respetar los derechos culturales, es decir, para hablar con los términos de Amartya Sen, la posibilidad de que el mayor número posible de ciudadanos puedan comprometerse al máximo en las actividades a las cuales otorgan un valor positivo. A condición, claro está, de reconocer a los demás los derechos que se reclaman para uno mismo.

Hay que dejar de lado la idea de que el individuo está al servicio de la sociedad, de que el sujeto se caracteriza por las funciones que ejerce y por su contribución a la colectividad, y hacer del individualismo el objetivo primordial tanto de la educación escolar o familiar como del derecho. Se trata de una evolución que está avanzando a pasos agigantados. De esta manera se convierte en posible la «recomposición» de cada individuo; es decir, la combinación en uno mismo de la razón moderna y de todo cuanto ésta ha rechazado o minimizado, eso que el psicoanálisis en especial ha investigado y que tantas corrientes de opinión contemporáneas se esfuerzan por rehabilitar. Todavía es necesario que este esfuerzo no quede reducido a cierto confuso espiritualismo *New Age*. El movimiento de los «sin-papeles» ha sido también, e incluso en primera instancia, un movimiento de autoafirmación de inmigrantes malienses, senegaleses, chinos, y en eso que se llaman los suburbios se organiza la defensa de las identidades árabe, argelina, marroquí, kabila, que al mis-

mo tiempo constituyen herencias, creaciones y proyectos de participación en la sociedad francesa.

¿Por qué reducir tales acciones colectivas a la lucha contra la exclusión y la arbitrariedad, cuando representan también la lucha por el reconocimiento de sí mismo? ¿Por qué reducir la lucha de los homosexuales a una lucha contra la discriminación cuando de lo que se trata igualmente es de la afirmación de la identidad homosexual y de modificar el espacio que la sexualidad ocupa en la vida personal, interpersonal y colectiva?

Hablar de sociedad multicultural apenas si tiene sentido, pues la expresión deja en la sombra a las condiciones de comunicación entre las culturas. El objetivo debe ser la comunicación intercultural, es decir, el reconocimiento para todos del derecho a combinar, cada uno a su manera, la participación en el mundo de la tecnología y de la economía con la reinterpretación o la defensa de una cultura. Ninguna acción colectiva puede tener efectos liberadores a escala nacional y/o internacional si no se inscribe en esta reivindicación de los derechos culturales.

EUROPA Y LAS NACIONES

Este espacio político, y en concreto este espacio público ampliado, ¿se deberían instituir en el plano europeo, o incluso en el plano mundial, puesto que las grandes fuerzas tecnológicas y económicas actúan cada vez más a niveles supranacionales? La idea se apoya en buenos argumentos, y Jacques Delors tiene razón al defender la concepción de una Europa política, proponiendo en particular que la elección del Parlamento Europeo sea verdaderamente europea y no, simplemente, que se organice a nivel nacional.

Sin embargo, sin llevar la contraria a estos esfuerzos y a estas esperanzas, bien cabe imaginar otro modo de evolución bastante diferente. Estamos asistiendo al fin de la estrecha correspondencia entre todos los aspectos de la vida colectiva: económico, social, político y cultural, que aparecían reunidos dentro del marco nacional. Pero de manera progresiva, los distintos aspectos de la vida económica se desarrollan a niveles supranacionales: paralelamente, y de manera opuesta, se advierte que las identidades culturales, nuevas o antiguas, se multiplican, se sitúan en planos a veces supranacionales, pero más habitualmente infranacionales.

Cabe entonces pensar, por lo tanto, que en un nivel intermedio es donde mejor operan las instituciones políticas, ya sea ese nivel el de la nación, la región o la ciudad.

La idea de nación se emancipa pues de la de Estado nacional, como ésta se había emancipado antes de la de Estado de derecho, que designaba en principio la formación de las monarquías absolutas o de las sociedades políticas oligárquicas, sin referencia a la concepción de soberanía del pueblo sobre la cual reposa la idea de Estado nacional, en especial desde las Revoluciones francesa y norteamericana. Y aún sería preciso que la idea de nación se liberara de su carga cuasi religiosa y se limitara a designar sólo ese espacio común desde el que funcionan y se promocionan al mismo tiempo la comunicación intercultural, la solidaridad y la modernización. La opinión pública se encuentra más próxima a este concepto de nuestra existencia nacional que las ideologías que se empeñan en considerar que Francia posee el monopolio del universalismo y de la modernidad.

Lo que confiere a la nación una importancia creciente es que el desarrollo sostenido presupone en gran medida el incremento de determinadas actividades que no pueden considerarse directamente rentables, como es el caso de la educación, de la atención sanitaria o de la defensa del medio ambiente. Es cierto que en Francia las partidas del Estado en el gasto global resultan demasiado elevadas (54 % frente al 50 % de la Unión Europea o el 40% de otros países occidentales). Pero la urgente reforma del Estado y la disminución del gasto público no han de impedir el crecimiento de los gastos en materia de sanidad, educación o defensa del medio ambiente; sin olvidar, no obstante, que estos sectores no negociables han de ser financiados cada vez en menor medida por el Estado, pasando a serlo, progresivamente, por otras instancias, como son las regiones o las ciudades, los mismos profesionales o determinadas asociaciones.

Cada país se caracteriza por el modo en que administra sus recursos y por las soluciones que adopta en la resolución de sus problemas internos antes que por su mera posición frente a los mercados internacionales. Los países escandinavos se dieron cuenta hace ya tiempo de esto, y por esa razón tienen una conciencia nacional tan acusada. La misma evolución debería producirse en Francia, en donde, sin embargo, cierta concepción a lo «luis-catorce» del Estado, tan enfermiza como influyente, parece llevar a los franceses a hacer una elección radical entre el

«sólo Estado» y el «sólo mercado», soluciones absurdas tanto la una como la otra.

¿SE PUEDE SER FRANCÉS?

Todo lo que se ha dicho hasta el momento podría quizá entenderse como una andanada contra el «cuartel general» francés, contra el culto que gran parte de nuestra ciudadanía, y en especial quienes hacen funcionar las instituciones, profesa al Estado gobernante, juez y guía al tiempo, puesto que lo considera representante de la razón y el progreso. Es verdad que mis cañones apuntan contra este cuartel general, pero me dispongo tanto a justificar como a atenuar semejante actitud.

Lo que justifica mi crítica es que el modelo francés se ha convertido en una verdadera ruina, que ya no existe más que en los manuales y en las prédicas de los filósofos afectos al Estado. No se trata del mero fracaso económico o tecnológico que llevamos padeciendo desde hace más de veinte años, sino de la cada vez más evidente distancia que separa el añejo discurso que la Francia oficialista proclama acerca de sí misma y la realidad, entre el discurso republicano y el mantenimiento de unas desigualdades sociales causadas a veces por las mismas intervenciones del Estado, entre esa Francia tierra de acogida de exiliados y el cierre de fronteras a los refugiados (como por ejemplo los bosnios), entre el himno al Estado modernizador y las locuras del Crédit Lyonnais o de otras empresas públicas. Francia no ha cometido muchos más errores que los países vecinos, pero es el único cuya imagen de sí mismo resulta tan contraria a sus prácticas, de tal modo que para muchos observadores, tanto de dentro como de fuera, se muestra como un país cegado por el orgullo, paralizado por sus mitos fundacionales, y que sólo alcanza a avanzar llevado por impulsos exteriores. A buen seguro, Francia no puede quedar reducida a ese envejecido discurso republicano y progresista; no es cuestión de paisajes pintorescos, de literatura, de viñedos o de tecnología de lo que aquí estamos hablando: es de la ideología en nombre de la cual Francia se gobierna, en la que se enreda, y cuyo precio (alto) lo pagan sobre todo los más débiles.

Esta condena del modelo francés, que yo creo necesaria, no tiene por objetivo el intentar la aceptación de un liberalismo radical; el de la «sociedad de mercado», al cual, ya lo he dicho antes, soy categórica-

mente opuesto. Sería absurdo, en especial en estos momentos en los que se disipan las ilusiones puestas en la sociedad globalizada y en los que se muestra a cara descubierta ese capitalismo financiero contra el cual es necesario apelar a la intervención pública. El modelo francés es un modelo de gestión y de control antes que de regulación; ahora bien, de regulación, previsión y voluntad de justicia es de lo que estamos necesitados. Mi crítica no está dirigida por lo tanto contra los «obstáculos» al libre movimiento de capitales, sino contra las trabas puestas por nuestro antiguo modo de gestión a una sociedad que busca nuevos mecanismos de regulación, económicamente eficaces y socialmente justos.

CONCLUSIONES

EL PAPEL DE LOS INTELLECTUALES

En un movimiento social ideal, «autoconciente y organizado», al igual que en un sistema político enteramente democrático y transparente, el papel de los intelectuales por fuerza debería ser secundario o hasta inexistente. Así debería ser también si, por el contrario, el cambio social estuviera comandado en exclusiva por el interés económico, por determinada voluntad política o, incluso, por la rutina y el corporativismo burocrático. Cuando no existe el menor principio efectivo de unidad de la vida social y política, los intelectuales están forzados a intervenir. Hace tiempo lo hacían para criticar a los poderes políticos o religiosos que imponían a la sociedad decisiones arbitrarias o escandalosas; pero enseguida, y cada vez más, a medida que aparecieron los actores sociales y que se iba extendiendo la democracia, los intelectuales han ido interviniendo en los conflictos y en el debate social para iluminar su significado, ya que los mismos actores no podían ser por entero concientes de sí mismos en momentos de crisis o de dependencia, y porque tal sentido estaba secuestrado por ciertas ideologías impuestas por las clases dirigentes o por los partidos que hablaban en representación del pueblo, de la nación o de las masas. El caso Dreyfus se debe entender como bisagra de estas dos épocas, lo que lo convirtió en referencia central para el estudio de los «intelectuales». Este término por el cual son conocidos fue acuñado, recordemos, a resultas de aquel caso.

Por supuesto, existen varios tipos de intelectuales. El más clásico, el más reconocible también quizás, es el del intelectual crítico, cuya atención se concentra en la denuncia del sistema dominante. Suele revelar los intereses que se ocultan tras los discursos moralizadores y da a conocer el sufrimiento de los explotados, alienados y manipulados. Lo que se ha dicho a lo largo de estas páginas sugiere la importancia de estos intelectuales en la Francia contemporánea, y por consiguiente la de Pierre

Bourdieu, ejemplar representante de este tipo de intelectuales. Una parte significativa de la prensa requiere de los servicios de éstos, y no solamente *Le Monde diplomatique*. En la Francia de las dos últimas guerras coloniales esta imagen de intelectual se convirtió en la más representativa. Jean-Paul Sartre y su círculo, Frantz Fanon y Jean Genet en particular, fueron intelectuales que se caracterizaron por el papel crítico y contestatario que adoptaron más que por la teorización sobre las distintas formas de resistencia al poder. Y durante los años 1965 y 1975 la figura de Louis Althusser fue guía de gran número de intelectuales. Pero sería Michel Foucault quien mejor sabría aunar el pensamiento crítico con una obra de enorme rigor intelectual.

El segundo tipo de intelectuales, opuesto al anterior, es el de los que se identifican con determinada lucha o determinada fuerza de oposición, y se convierten en sus intelectuales orgánicos, de hecho en sus ideólogos. Al abrigo del Partido Comunista francés, muchos intelectuales tuvieron la oportunidad y la satisfacción, unas veces, de convertirse en las verdaderas estrellas de las reuniones públicas, y otras, con mayor honestidad, de sentirse partícipes, de una manera desinteresada, de los movimientos de liberación y de construcción de un futuro mejor. El derrumbamiento de la ideología y del poder comunista se ha hecho sentir de forma evidente entre estos intelectuales, tanto más por cuanto algunos de ellos se habían dejado arrastrar, con la mayor irresponsabilidad, a la defensa de la barbarie representada por la revolución cultural china. Sin embargo, tan injusto sería condenar por entero a este tipo de intelectuales como falso pretender que haya desaparecido del todo. Muchos de los intelectuales que firman peticiones, participan en manifestaciones o incluso en huelgas de hambre, dan prueba de modo completamente honesto de su solidaridad con reivindicaciones y actitudes de contestación que no logran hacerse oír por los poderes públicos. Su papel ha quedado limitado en la medida en que ahora no participan en la elaboración del sentido de la acción, conformándose con ser meros testigos de ella, aunque esto no deja de tener su importancia puesto que da idea de la voluntad de tales intelectuales, que podrían quedar fácilmente absorbidos por el *establishment*, de participar, de sentirse solidarios con las clases más desprotegidas, con las más privadas de voz.

Más allá de estas dos categorías de intelectuales, hay que tratar de otras figuras más complejas y que se manifiestan en las situaciones más difíciles. Existen, en primer lugar, algunos intelectuales que hacen su tra-

bajo, como es el de analizar y comprender, buscando el sentido de las acciones que apoyan o a las que se oponen. Se sitúan en el escenario a cierta distancia de los actores reales, cuyos actos, como cualquier acontecimiento histórico, despliegan numerosos significados al mismo tiempo, y hacen el esfuerzo de distinguir tales sentidos y de iluminar esos aspectos que les parecen más significativos. Pero en su caso no se puede hablar de intelectuales —y sí sólo de expertos o profesionales— más que si su voz y sus escritos quieren convertirse en instrumentos al servicio de determinada crítica al poder social o, más directamente, de una fuerza de oposición y de contestación.

La diferencia entre estos intelectuales y los de la primera categoría es que éstos, a los que ahora me refiero, creen en la existencia, en la conciencia y en la eficacia de los actores sociales, pese a reconocer sus limitaciones, mientras que los pertenecientes a la primera categoría sólo piensan en la crítica de las contradicciones internas de las crisis. Esto no significa que a quienes intentan comprender a los agentes y elaborar interpretaciones de sus actos se les daba considerar optimistas, gente que cree que el bien triunfará siempre sobre el mal, sino solamente que no piensan que la victoria del mal sea inevitable y que la historia avance únicamente a partir de sucesivas crisis internas y de las estrategias de dominación de las fuerzas que ostentan el poder.

A partir del instante en que se cree en la posibilidad de actuación y de invención de los dominados es cuando se intentan separar los análisis buenos de los malos o las estrategias mejores de las peores, entre las que llevan a cabo los actores sociales. La situación de estos intelectuales es bastante compleja: creen en los actores, pero mantienen las distancias con ellos, puesto que su tarea pasa por criticar sus discursos y acciones, luchando contra esas ideologías justificadoras que cualquier acción social y política genera. Por eso los militantes prefieren con mucho a los intelectuales que denuncian los abusos de sus adversarios que a aquellos que analizan sus propias actuaciones, incluso en el caso de que tales análisis demuestren indisimuladas simpatías con el movimiento en cuestión.

Francia ha conocido muchos grandes intelectuales de este último tipo, que a menudo combinaban la crítica brillante, original, con el afecto por las categorías políticas y las clases sociales más inadaptadas al sistema. Entre ellos, muchos provenían de la izquierda comunista, tanto de Socialismo o Barbarie como de la Unión de Estudiantes Comunistas, dos grupos en los cuales participaron o se forjaron numerosas figuras de pri-

mer orden, como Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Jean-François Lyotard o François Châtelet. Pero sería un hombre de otra generación, André Malraux, la figura más emblemática de esta categoría intelectual, puesto que sus intervenciones políticas participaron del realismo sin dejar al mismo tiempo de deducirse directamente de su obra.

Estos intelectuales no pueden efectuar sus intervenciones más que dentro de sociedades democráticas, puesto que su tarea crítica consiste en precisar, ante determinada reivindicación, lo que puede ser asimilado por las instituciones, lo que no resulta negociable y lo que es mera contaminación de intereses o ideologías ajenas a ella. Evidentemente, es aquí necesario precisar que tales intelectuales hacen acto de presencia porque reconocen en la acción analizada aspectos que sobrepasan la simple intervención política, ya sean éstos morales o sociales. Estos intelectuales, que a mi juicio interpretan el papel más relevante, nunca son del todo políticos, pues reconocen en la acción social la presencia de principios apolíticos que no pueden ser del todo asumidos por el sistema. La reivindicación de los derechos sociales y de la igualdad es la principal razón para intervenir de estos intelectuales. Sus esfuerzos están dirigidos a la tarea de separar, dentro de una situación política, lo que pueden tratar los mecanismos institucionales, lo que es justa persecución racional de ciertos intereses individuales o colectivos, y lo que apela a los valores superiores de cualquier organización social. Opuestos a visiones unificadoras, ya sean moralizantes o que den fe de una ilimitada confianza en las instituciones políticas, jurídicas o escolares, estos intelectuales hacen añicos esas falsas globalizaciones y se proponen poner de relieve los aspectos más notables de determinada acción colectiva.

Existe por último una cuarta categoría de intelectuales. Se les puede calificar de utopistas, en el sentido más positivo del término, pues se identifican con las nuevas tendencias culturales, sociales o propias de la vida personal, y las hacen más claras sin permanecer no obstante ciegos ante los conflictos sociales que se desarrollan alrededor de la gestión social de tales transformaciones. En Francia, Edgard Morin es el más original de estos utopistas, al mismo tiempo que atiende a la interpretación de los movimientos sociales, en especial cuando acaban de surgir y apenas disponen de organización.

A menudo se ha hablado del «fin de los intelectuales». Tal expresión carece de sentido. Max Gallo ha hablado más atinadamente del «silencio de los intelectuales» a comienzos de los años ochenta, pero por razo-

nes que no eran del todo acertadas. Los intelectuales franceses, en su inmensa mayoría, rechazaron vivir a expensas de la corte de Mitterrand, y aquellos que lo hicieron se arrepintieron luego. Su silencio estaba, pues, cargado de sentido; esto es algo que ya se vio al principio de ese reinado, cuando los más diversos intelectuales se unieron a la CFDT de Edmond Maire no sólo para defender Solidaridad y el movimiento de liberación polaco, sino también para elaborar juicios críticos sobre la política del nuevo presidente.

Más recientemente, la tendencia más característica fue la que acompañó la caída del comunismo y el renacimiento de la idea de democracia. Esta tarea fue asumida por Raymond Aron antes de serlo por los «nuevos filósofos». Después vinieron años de gran desilusión y de descomposición de la acción política, durante los cuales se hicieron escuchar los críticos del orden dominante, pero también los análisis de los que yo denomino «intelectuales intérpretes», entre los que me cuento. Una oposición que quedó simbolizada por la firma de dos peticiones al comienzo de la crisis del otoño de 1995.

Todas las familias de intelectuales pueden coexistir, e incluso esta misma coexistencia aporta consistencia al debate intelectual, y por tanto a los propios intelectuales, puesto que así dedican más tiempo a enfrentarse unos con otros que al análisis de las situaciones históricas reales. Esta conclusión general es especialmente valiosa en el momento actual, en la medida en que nuestras sociedades no presentan la menor unidad, no participan de ninguna lógica hegemónica y están cada vez más fragmentadas. Así, se puede ver cómo se originan nuevas formas de acción y de pensamiento que debemos volcarnos a descubrir, pero al mismo tiempo cómo se extienden las zonas de exclusión a las que se refieren los críticos. En ellas, los intentos de reorganización del sistema político mantienen a los intelectuales a cierta distancia.

La única familia de intelectuales que actualmente se encuentra en decadencia, hasta el punto de que parece estar en vías de desaparición, es la de los ideólogos vinculados orgánicamente a alguna organización política. Se trata en parte de algo normal y deseable, ya que este tipo de intelectuales no reconoce ninguna relevancia a los demás, y que las filosofías de la historia y la confianza en el «Partido» representante del futuro están en franco e irremediable declive.

Se asiste, por el contrario, al retorno de los intelectuales de las demás categorías, tan patente que muchos ya comienzan a quejarse del ruido

ensordecedor de sus disputas. Pero no se trata de ningún retorno al pasado. El relativo silencio durante las últimas décadas se puede explicar por la conclusión de un período histórico, mientras que el retorno de los intelectuales está asociado a la sustitución del análisis de los sistemas por la interpretación de las acciones de los actores sociales. Este retorno aparece, pues, vinculado a la consolidación del sistema democrático, a la recomposición de las formas de actuación y, sobre todo, a la defensa de los derechos fundamentales: libertad, igualdad, solidaridad.

DEL RECHAZO AL DESCUBRIMIENTO

La sociedad francesa, más que cualquier otra de la Europa Occidental, ha pospuesto durante mucho tiempo el análisis de las transformaciones que experimenta el mundo y la búsqueda de nuevas políticas capaces de canalizar, de utilizar o de amortiguar las consecuencias sociales de los cambios que la están convulsionando. Más bien da la impresión de que se esfuerza por eternizar el modelo social y político que fuera, durante la posguerra, el de la mayor parte de países, y que otorgaba al Estado un papel de privilegio en la reconstrucción y en la modernización nacional.

Pero este modelo se ha ido debilitando de manera inexorable, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, por una parte porque ha conducido a una economía dirigida progresivamente menos eficaz, y por otra porque la mundialización de la economía y las aceleradas innovaciones tecnológicas obligan a adaptarse y a poner en práctica ciertas iniciativas que el modelo francés de gestión hace más difíciles. Durante los años noventa el crecimiento ha sido muy escaso, lo que ha supuesto un fuerte incremento del paro. Mientras se agravaba la situación económica, Francia quería continuar avanzando por el camino del progreso social: vacaciones más largas, jubilaciones más pronto y aumento incontrolado de los gastos sanitarios. Pero todo esto precisaba de un mayor crecimiento. La sociedad demostró su entusiasmo en mayo de 1981 por las medidas adoptadas por François Mitterrand, recién elegido por entonces presidente de la República, si bien menos de dos años más tarde, decepcionada, aceptó un cambio de política, que será aplicada con la misma incoherencia que la de la etapa anterior: así se pudo ver a la izquierda, a principios de los años noventa, adoptando las más estrictas políticas mo-

netarias, sacrificándolo todo para que el franco se mostrara fuerte. Si Michel Rocard emprendió con éxito ciertas reformas a la vez políticas y sociales, después de él Francia conocería una serie constante de fracasos. Cada uno de los sucesivos Primeros ministros prometían conciliar el liberalismo económico con el progreso social; todos fracasarían en la tarea, y la opinión pública, después de haber creído en ellos, les retiró su confianza. Por último, Jacques Chirac, acuciado por la proximidad de la creación de la moneda única europea, animó a Alain Juppé a seguir una política de reducción del déficit público que se traduciría en una fuerte sangría sobre los ingresos, lo que supondría un nuevo agravamiento del paro. La mayor crisis que estalla a finales de 1995 no fue el pistoletazo de salida de ningún nuevo movimiento social portador de alguna visión de futuro ni el simple efecto de la resistencia frente al posible desmantelamiento de los avances sociales alcanzados; más bien dio por bueno el hundimiento de cierta sociedad política que, decididamente, no llegaba a efectuar los necesarios ajustes económicos que la reducción del paro requería, manteniendo al tiempo el sistema de protección social. La creencia suicida en la incompatibilidad del aperturismo económico y de la integración social conducía a Francia al borde del precipicio.

Se comprende el éxito que por entonces conoció la constante referencia al pensamiento único: la política no *parecía* consistir, tanto a derecha como a izquierda, más que en la sumisión a los mercados internacionales y en una construcción monetaria sin mayor ambición que la de favorecer los movimientos de capitales.

La historia de la Francia de las dos últimas décadas es, pues, más que nada, la de la descomposición de su sistema político, acelerado por los ataques de unos jueces constituidos en poder judicial, como en Italia o los Estados Unidos, que ponían de relieve la ilegalidad de los modos de financiación de los partidos políticos. Un órgano ejecutivo inoperante, un Parlamento sin poder real que votaba leyes en presencia de escaños vacíos, unos jueces que adquirirían una independencia tan inquietante como necesaria: ¿cómo, ante semejante panorama, las iniciativas que escapan al control de las instituciones políticas podían ser escuchadas? Las clases más preocupadas por la apertura y la construcción económica votaron a un Frente Nacional que había convertido a los inmigrantes en chivos expiatorios y que dramatizaba la inseguridad de los barrios del extrarradio. Con su auge (hasta llegar a alcanzar un 15% del electorado) el Frente Nacional dinamitó la unidad de la derecha. Por parte de la iz-

quiera, la abstención aumentó, el Partido Comunista continuó cayendo en picado, y cierto difuso descontento condujo a la opinión pública a apoyar las grandes huelgas con tal de expresar su pérdida de confianza en el gobierno y en el futuro del país.

Más allá de la crisis de las instituciones políticas, la descomposición de los actores sociales y de sus relaciones sería la causa principal de nuestra larga inoperancia. Una patronal a la defensiva, cuando tantas empresas se estaban abriendo al mundo, sindicatos empeñados en la defensa del sector público, ideologías políticas ofuscadas con la creencia de que las nacionalizaciones son condición esencial del progreso social o, por el contrario, de que la apertura de la economía es capaz por sí misma de solucionar los problemas sociales. Al margen de este mundo envejecido se forjarían las luchas sociales que han animado estas dos últimas décadas. Éstas han movilizado a las clases más desfavorecidas, a los inmigrantes castigados por la xenofobia, a enfermos de sida víctimas de una lamentable gestión administrativa, a «sin-papeles» envueltos en situaciones incomprensibles por culpa de una legislación absurda o devueltos de la manera más brutal a sus países, a familias sin techo, a los parados. Estos movimientos fueron apareciendo sobre el telón de fondo de la descomposición social y de una creciente precariedad (que afecta ahora a entre un 20 y un 25% de la población), de la violencia y del «incivismo» en muchos barrios suburbanos, etc. Puesto que se ofrecían como respuesta a situaciones bien definidas negativamente, puesto que estaban animadas por el desespero, tales luchas fueron ante todo la manifestación de un gran rechazo social, y apoyadas por una opinión pública cada vez más angustiada. Justamente apoyadas, a decir verdad, ya que eran expresión de una voluntad de acción que la población no percibía por parte de sus torpes gobernantes.

Pero estas luchas de los excluidos están igualmente marcadas por la señal de la incertidumbre. Si bien, en efecto, muestran y ponen de manifiesto el sufrimiento, no alcanzan a menudo a elaborar ningún tipo de contra política ni a concretar sus propuestas, lo que las condena habitualmente a ponerse al servicio de ciertas vanguardias políticas o intelectuales que les imponen sus propios discursos. Sin embargo, en ocasiones estos movimientos no son solamente la manifestación de una crisis; en diverso grado, hacen que surjan nuevos actores sociales, organizando en grupos concientes y ansiosos por actuar a los que antes eran tan sólo meras víctimas individuales. ¿Cuál será la ganadora, de entre estas dos tendencias?

La primera parece la más poderosa. Estos movimientos que la representan se han visto arrastrados, como los demás aspectos de la vida pública, a entrar en una lógica de crisis que ellos han contribuido a poner de manifiesto (y también a agravar), buscando su solución en la intervención de un Estado al que creen tan libre de movimientos como en 1945, y del que quizá esperen un nuevo Frente Popular. Sobre todo en 1995, tal tendencia es la que daba la impresión de llevar la delantera. La denuncia ocupó el lugar del análisis y de las propuestas, del mismo modo que la ruptura sustituyó a la negociación, y la negativa a la iniciativa.

Pero nos encontramos ya en otra fase. Aunque la lógica de la denuncia y de la crisis ha dominado claramente durante los años de extrema descomposición política que conocimos de 1991 a 1997, ahora se hace posible recuperar cierta confianza en nuestra capacidad de actuar y de inventar discursos políticos inéditos, de formular nuevos envites, nuevos conflictos y nuevas formas institucionales de tratar con ellos. Hoy esto es posible, y se hace absolutamente necesario comprometerse con esta acción. A eso he querido contribuir aquí en alguna medida.

EPÍLOGO

Este libro no es un panfleto. No tengo, sin embargo, nada contra los panfletos; a veces son necesarios (tanto como peligrosos, por otra parte), pero no hay que confundirlos con la reflexión, ni con tentativas de análisis, ni tan siquiera con obras de opinión. El panfleto se caracteriza por su combatividad; moviliza contra un enemigo todo su arsenal, sus conocimientos basados en pruebas, las informaciones periodísticas apenas elaboradas, las salidas ingeniosas, los ataques personales, etc. Un buen panfleto no dice mentiras, pero calla lo que no va en beneficio de su lucha. No se les puede reprochar a los bomberos que apaguen el incendio con agua tomada sin pedir permiso... El panfleto adquiere las presencias más diversas: cuántos dossiers de oficinas internacionales, discursos de dirigentes políticos o encuestas periodísticas resultan ser en verdad panfletos, incluso cuando su tono parece exento de acritud. Por el contrario, el *¡Yo acuso!* no es ningún panfleto, sino un preciso análisis de los hechos, y no se acabará de leer ese texto sin que uno se diga que no está de acuerdo con el ideario de Zola, tanto nos ha convencido su argumenta-

ción. Mi objetivo no ha sido aquí polemizar, como el título ya sugiere claramente.

Pero aunque este libro no sea un panfleto, no es tampoco más neutro que el trabajo del médico, del enseñante o del jurista. El partido que tomo es el de querer que los hombres piensen y que sean los protagonistas de su propia historia, luchando tanto contra la dominación material que padecen como con la explicación que de sus conductas se suele dar, y ello en nombre de lógicas materiales supuestamente superiores a cualquier otra forma de acción social. A mi juicio, lo que se trata es de comprender las relaciones, las acciones y las reglas sociales. Y yo hago causa común con los escritores, los economistas o los sociólogos, que creen en el mismo proyecto.

Los escritos dedicados a la vida social o individual deben ser juzgados en principio, pienso yo, según su propio criterio: ¿enriquecen o no la comprensión de los actores sociales sobre sus propias acciones, sobre sus causas, sus sentidos, sus consecuencias? Si una explicación o una interpretación que, por otro lado, pueden tener grandes cualidades, llevan a engaño al actor social o contribuyen a situarle en la senda del irracionalismo o de la pasión, no habría lugar para considerarlas justas u oportunas, puesto que no deben tener por objeto la mera descripción de los «hechos», sino la ayuda a los actores a comprenderse a sí mismos, y por tanto la reducción de la distancia que separa siempre a la acción de la representación que, de ella, se hace el actor.

Esta tarea no es nada fácil de llevar a buen puerto. A todos los actores sociales les gusta ser admirados y jaleados, puestos como ejemplo. Pero la identificación del actor con el análisis que de él se hace es casi siempre fuente de error, y por tanto le hace más débil.

Esta constatación es válida para cualquier momento histórico, tanto para el presente como para el pasado o el porvenir. Es preciso mantener las distancias con el análisis, o incluso crearlas si fuera necesario, disponer de cierta mirada crítica para distinguir los significados que se deducen del acontecimiento, al mismo tiempo que hay que dejarse llevar por la simpatía que conduce a descubrir un proyecto allí donde otros no veían antes más que simple desorden. Lo que un trabajo semejante pierde en aprobación general y en popularidad inmediata lo gana en utilidad, si se admite que el trabajo de una sociedad o de un movimiento social para labrarse a sí mismo (tanto como el de los individuos en relación con su vida personal) es largo, difícil, plagado de crisis y zonas oscuras.

Sería contradecir la caracterización que he intentado llevar a cabo del conocimiento social no aceptar el precio de este trabajo de investigación; es necesario incluso reivindicarlo. Justamente en este momento, sobre todo, en el que el retraso de las explicaciones es tan grande, en el que los discursos arbitrarios, sólo en apariencia científicos, invaden los campos del conocimiento, pero en el que se vislumbra ya la salida a un tiempo de contradicciones.

Hay que rechazar obligatoriamente todo discurso que intente convencernos de nuestra impotencia. ¿Hasta cuándo escucharemos y hablaremos este lenguaje que va en detrimento de nuestra sensibilidad y de nuestros mismos actos? ¿Hasta cuándo repetiremos que nos encontramos sometidos al dominio absoluto de la economía internacional, pese a que cada día estemos inventando y defendiendo otros ideales, pensando nuevas reformas y rompiendo el muro del silencio?

¿Tan difícil resulta entender lo que enfrenta a quienes no hablan más que de dominación y a los que creen en la posibilidad de liberación? ¿A quienes no hacen más que apelar al Estado y a los que creen en la consolidación de nuevos actores sociales? ¿A quienes hablan de rechazo y a los que aún tienen esperanzas? Los franceses acabaron el siglo XIX sin entender absolutamente nada de un movimiento obrero en período de formación, contemplándolo según las categorías heredadas de la Revolución francesa. ¿Dejaremos que este siglo termine con los nuevos movimientos y esperanzas confiscados por esos discursos que mantienen a la sociedad presa del pasado?